



ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN HISTORIA

**INJURIAS, HERIDAS Y HOMICIDIOS. VIOLENCIA COTIDIANA EN LA
INTENDENCIA DE AREQUIPA. 1784 – 1824**

TESIS

PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN HISTORIA

AUTOR:

CESAR AUGUSTO ESTEBAN BELAN ALVARADO

ASESOR:

Rafael Sánchez-Concha Barrios

Arequipa- Perú

2018

Para mi abuelo César Alberto, y mi hijo César Esteban.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes personas e instituciones:

En primer lugar a los profesores y amigos Dante Zegarra López, Fernando Calderón, Enrique Silvestre García Vega, Guillemette Martin, César Félix Sánchez Martínez, y en especial al prof. Víctor Condori por los comentarios y aportes y a mi asesor, el profesor Rafael Sánchez-Concha, por la paciencia y el impulso brindado. Asimismo al profesor Julio Armaza Galdos, estímulo académico desde los tiempos de pregrado.

A la Universidad Católica San Pablo, en la persona del Mag. Fernando Valle, Pamela Cabala y Patricia Salazar; y también a todos mis compañeros de maestría –en especial Juan Carlos Nalvarte y Rafael Longhi Saravia– por su estímulo permanente, refrescantes ideas y buen humor.

A Claudia Quiroz y a mis compañeros del Departamento de Teología, Filosofía y Humanidades, por su solidaridad, alegría, y aliciente constante para la investigación.

A los trabajadores y encargados del Archivo Regional de Arequipa, por su espíritu solícito y las facilidades prestadas; y también a los compañeros de fructíferas horas de investigación, como Christian Castelo y Jorge Pinto quienes me apoyaron con la paleografía y en el aburrimiento.

Y por último y fundamentalmente, a mi familia: a mis tíos César, Oscar; a mis tías Nonoy, Cocó; a mi abuela Leonor por su dulzura permanente; y especialmente a mis padres Augusto y Maritere, por su soporte constante, cariño incondicional y ejemplo, y a mi esposa Elízaeth que, en el fondo, es la gran gestora de esta tesis.

Índice

Introducción.....	9
Capítulo I. Arequipa a finales del s. XVIII. Sociedad y seguridad.....	13
Capítulo II. La violencia cotidiana: modalidades y actores.....	19
1. Violencia Cotidiana. Consideraciones generales.....	19
2. Incidencia.....	21
a. Periodo.....	22
b. Fuentes consultadas.....	22
2.1. Consideraciones generales.....	23
2.2. Incidencia en el tiempo.....	28
3. Modalidades de la violencia: Injurias, heridas y homicidios.....	29
3.1. Homicidios.....	30
a. Homicidios pasionales.....	32
b. Ambiente festivo.....	34
c. Lucro.....	35
3.2. Injurias y heridas.....	39
a. El honor.....	42
a.1. La publicidad de la injuria.....	45
a.2. La injuria como mecanismo de ascenso social.....	47
a.3. El honor como presupuesto procesal.....	48
b. Injurias verbales.....	51

b.1. Ofensas verbales contra mujeres.....	52
b.2. Injurias verbales contra varones.....	53
b.3. Agresiones por origen étnico.....	53
b.4. El revés de las injurias: el paradigma del «ciudadano honrado».....	58
b.5. Injurias verbales y el movimiento independentista.....	61
c. Injurias reales.....	62
c.1. Carácter corporativo de los conflictos.....	64
c.2. Agresiones y contenido simbólico.....	65
c.2.1. Vara de alcalde.....	65
c.2.2. «Apechugamiento».....	68
c.2.3. Cortes de pelo.....	69
c.2.4. Azotes.....	70
c.2.5. Otros.....	73
d. Heridas.....	73
d.1. Sevicia.....	76
d.2. Heridas autoinfligidas.....	78
3.3. Excesos, maltratamientos, atropellamientos de la autoridad y perdimientos de respeto.....	69
a. Secuencia, incidencia y modalidades.....	79
a.1. Abuso o «excesos» de la autoridad.....	80
a.2. «Atropellamientos» contra la autoridad.....	82
b. Sujetos, espacios y medios del crimen.....	83
b.1. Cargos y funciones.....	83
b.2. Instrumentos de violencia desde la autoridad.....	88

b.3. En las postrimerías del dominio colonial.....	89
c. La violencia de las autoridades en la encrucijada de la lucha por el estatus.....	91
c.1. Las autoridades locales y su relación con el intendente.....	92
c.2. Luchas de poder e injurias de la autoridad.....	93
c.3. La lucha por la moral pública como estrategia de poder local.....	96
Capítulo III. Espacios, ámbitos, instrumentos detrás del crimen de sangre.....	99
1. Espacios: Hacia una cartografía del delito.....	99
1.1. Generalidades. Discerniendo lo «urbano» y lo «rural».....	99
1.2. En los límites de la intendencia: el crimen de sangre en los pueblos y aldeas.....	101
a. Incidencia. Partidos y crimen.....	101
b. Las características de los conflictos en los espacios periféricos: pueblos y aldeas.....	103
c. Las características de los conflictos rurales.....	104
1.3. Cartografía criminal de la ciudad de Arequipa.....	106
a. Los suburbios.....	109
b. Hacinamiento.....	115
c. Plazas y calles.....	120
d. Chicherías y otros espacios de recreo público.....	122
1.4. La violencia en la intimidad: el espacio doméstico.....	123
1.5. ¿Bandoleros?: El crimen en el descampado.....	128
Conclusiones.....	133
Referencias.....	138
Anexos. Índice de Cuadros, Gráficos y mapas.....	156

Resumen

El estudio de la violencia cotidiana es un oscuro, pero esclarecedor medio para acercarnos al acontecer de un grupo humano. De otra parte, el período de hegemonía de la dinastía borbónica en tierras americanas es particularmente importante –además de convulso– por el profundo cambio de ideas y costumbres de la sociedad colonial de cara a la República, lo que podría haberse traducido en mayor criminalidad. El presente trabajo busca establecer la incidencia, características, medios, actores involucrados, y el ámbito de perpetración de los hechos de sangre (homicidios y ataques al cuerpo) cometidos en el espacio correspondiente a la antigua Intendencia de Arequipa entre los años 1784 – 1796. Se buscará con esto esbozar una imagen sobre la estructura de la sociedad arequipeña tardo virreinal, sus dinámicas interpersonales y principios. Para tal efecto se han analizado el íntegro de las causas criminales del Archivo Regional (ARAr); y algunos expedientes del Archivo Arzobispal (AMA) y del Archivo General de la Nación (AGN) correspondientes a ese período.

Abstract

Interpersonal violence is a dark but clarifying source to approach the events of a human group. Moreover, the period of the hegemony of the Bourbon dynasty on American soil is particularly important, likewise convulsed, because of the profound change in ideas and customs of colonial society facing the Republic which might have been translated into higher criminal rates. This paper seeks to establish the incidence, characteristics, sources, people involved, and the scope of the perpetrated crimes (homicide and attacks) committed between 1784-1796 in the Intendencia of Arequipa. For this purpose, it has been analyzed specifically criminal causes from the Arequipa Regional Archives (ARAr).

INTRODUCCIÓN

A mediados del S. XVIII el Obispo de la ciudad, don Juan Bravo de Rivero, recibiría una particular denuncia. El maestre de campo don Juan Jiménez Lancho, ilustre vecino de la ciudad, venía siendo acusado de matar «a varias de las mujeres con que se casó, haciéndoles otorgar testamentos a su favor, cuando se hallaban en perfecto estado de salud [...] pocos días antes que murieran en forma misteriosa y evidentemente criminal» (BUSTAMANTE 1971: 26). En el requerimiento interpuesto por don Diego Benavides y don Felipe de Portu, suegros ambos del agresor, se daba cuenta además de una vida colmada de maltratos e intimidaciones que Jiménez Lancho prodigaba a sus esposas antes del fatal desenlace.

¿Constituye este hecho un claro ejemplo de violencia cotidiana en la ciudad de Arequipa a finales del periodo virreinal, o se trató de un simple hecho aislado? ¿La violencia interpersonal se circunscribía únicamente al espacio privado, confundida con las diarias manifestaciones del ejercicio de la autoridad doméstica; o estaba más bien ligada a otras esferas sociales? En suma, ¿Cuáles eran las manifestaciones más comunes de la violencia cotidiana entre los habitantes de la ciudad en el período tardo-colonial?

Bajo estas premisas, el actual trabajo busca establecer la incidencia, características, medios, actores involucrados, y el ámbito de perpetración de los hechos de sangre (homicidios y ataques al cuerpo) cometidos en el espacio correspondiente a la antigua Intendencia de Arequipa entre los años 1784 – 1824.

Consideramos que la presente investigación permitirá echar luces sobre la seguridad imperante en la Arequipa virreinal del periodo, y adicionalmente, mediante ella podrá indagarse en la mentalidad, valores vigentes y la representación que la población arequipeña de a finales del S. XVIII e inicios del S. XIX poseía sobre sí misma, a través de las conductas que pertenecían al ámbito de lo reprobable. Finalmente ella dará cabida y será base de futuros trabajos que busquen aproximarse a la historia de las concepciones coloniales, y los que ahonden en las relaciones existentes estos criterios y los imperantes en la actualidad.

Se ha tenido en cuenta para fijar el período de investigación el estar signado por grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que devinieron, en último término, en el advenimiento de la República. Podemos pensar luego, que un tiempo de reformas políticas y sociales como las que se vivió en aquel período es potencialmente convulso y por ende profuso en violencia de tipo interpersonal.

Entre los investigadores que han tratado el tema podemos citar a CHAMBERS (2003), quien en su conocida obra desarrolla un panorama general sobre las relaciones sociales en Arequipa en el período 1780-1854, incluyendo un análisis del asunto que nos ocupa. Entre los múltiples datos que propone la autora, podemos resaltar, de entre los diversos datos sobre la violencia interpersonal en el período de la Intendencia y en la naciente República que consigna de forma indirecta¹, dos ideas fundamentales: 1) la violencia tuvo un fuerte carácter inter-étnico y estaba marcada por las tensiones identitarias; y 2) esta tuvo un carácter preferentemente privado, entendido este como el ámbito que corresponde al hogar, el barrio y los lugares de común sociabilización como son las chicherías y las fiestas; haciendo énfasis a la fuerte presencia femenina en las disputas.

Asimismo, otros dos investigadores AMADO (2011) Y CONDORI (2010) han tratado también el tema de manera indirecta, la primera al analizar las causas eclesiásticas correspondientes a separación de cuerpos del período, y el segundo al referirse a ciertas agresiones físicas concomitantes a delitos patrimoniales, como los robos o asaltos. La relevancia de la presente investigación es por tanto patente, por cuanto los trabajos previos al respecto no se han abocado específicamente al estudio de la violencia en la Arequipa del período. No teniéndose en cuenta, además, el íntegro de las fuentes documentales como son los expedientes criminales del periodo, no habiéndose asimismo establecido una tipología de las agresiones, habiendo sido todas tratadas de forma genérica.

El objeto material de análisis en el presente trabajo serán las causas criminales del período. Si bien existen otros datos que pueden apuntar sobre el índice de violencia interpersonal en la intendencia de Arequipa, tales como son los relatos de los viajeros y las relaciones de

¹ Sin avocarse por entero al fenómeno por no ser parte de su objetivo de investigación.

visitas como otros documentos o informes oficiales al respecto que también son recogidos, debe entenderse como fuente por excelencia del presente trabajo 12 legajos que se encuentran en custodia del Archivo Regional de Arequipa (ARAr) bajo la denominación de «Intendencia Criminal»², y secundariamente otros tantos que pertenecen a las secciones «Cabildo» e «Intendencia Administrativo», del mismo repositorio, y algunos otros legajos del Archivo Arzobispal (AMA) de la ciudad.

Para el análisis de las conductas se tomará en cuenta la teoría desarrollada por ERVING GOFFMAN (1993) sobre la Vida Cotidiana. Definimos esta como el juego de roles (*performance*) que representan todos los involucrados en las relaciones sociales. El connotado sociólogo tiene en cuenta para tal efecto, el análisis de «los códigos o marcos de significación, mediante los cuales, en los rituales de interacción, se produce el encuentro entre las microestructuras de significado que componen la expresión de la persona y las macroestructuras de significado que componen la cultura» (CHIHU y LÓPEZ 2000: 239).

Acogeremos también los postulados de CHARLES TILLY (2003) quien explica el fenómeno de la violencia desde la su teoría de la «Interacción Social, proponiendo el análisis de los micro mecanismos de violencia entendidos estos como causas en escalas pequeñas» (TILLY 2003: 20) que harán posible procesos de violencia, originados a partir de «combinaciones y secuencias de mecanismos que producen efectos similares a través de amplios espectros de circunstancias» (TILLY 2003: 21).

Finalmente, al relacionar el concepto de Cotidianidad de GOFFMAN con el de Micro mecanismos de violencia de TILLY, se buscará identificar los roles que los protagonistas de la violencia en la intendencia de Arequipa representaban cuando proyectaban imágenes identitarias (*self*) bien al propiciar una disputa, o bien al rechazar –mediante la agresión real o verbal– el cuestionamiento de la imagen que el sujeto poseía de sí mismo.

² El reducido número de causas existente tiene como correlato la escasa judicialización de las disputas en el ámbito de la Intendencia. Será reiterada la alusión a esto la manifestada por el Gobernador-Intendente Antonio Álvarez y Jiménez en su Relación de Visitas: «Como las actuaciones judiciales que practican los Alcaldes Ordinarios de españoles en esta Doctrina [Pampacolca] y su comprensión son raras, resulta de ellas por consiguiente ser ninguna las multas y penas pecuniarias» (BARRIGA 1946 : 34 *alt* 49, 61, 76, 101, 113, etc.)

CAPÍTULO I

AREQUIPA A FINALES DEL S. XVIII.

SOCIEDAD Y SEGURIDAD.

1. LA INTENDENCIA DE AREQUIPA. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

El cambio de dinastía, luego de la asunción de Felipe V al trono, producirá unos cambios tan marcados como pocas veces han podido verse en la historia de la hispanidad. El advenimiento de los nuevos monarcas de origen francés dará origen a un proyecto modernizador³ que tendrá como corolario, en tiempos de Carlos III, la reconfiguración territorial en los dominios americanos. En vista de esta nueva visión del poder, y sumado esto a la necesidad de un gobierno de estructura militar en regiones –como en el área sur andina– donde con cada vez más frecuencia se suscitaban violentas revueltas, el 5 de agosto de 1783 se instauró la intendencia de Arequipa (FISHER 1981). Ésta comprendía los partidos o subdivisiones de Arequipa, Camaná, Cailloma, Condesuyos, Moquegua, Arica y Tarapacá; cada una a cargo de un subdelegado. En ella, para el año 1793 habitaban algo más de 130 000 personas, repartidas en «60 doctrinas, 2 ciudades⁴, 2 villas⁵ y 80 pueblos anexos» (HAENKE 1980: 186).

El primer gobernador intendente fue José Menéndez Escalada, que gobernó efímeramente de 1784 a 1785, para ser trasladado a Huamanga. Posteriormente, Antonio Álvarez y Jiménez asumiría el cargo entre 1785 a 1796, recordándolo la historia como una destacada autoridad política, quien asumiría de lleno y con eficacia la tarea de la aplicación de las reformas en su jurisdicción (MARTÍNEZ 1930: 58 y ss). Siendo el intendente la mayor autoridad judicial del territorio, las penas aplicadas eran generalmente dictadas por el éste. Autoridad esencialmente militar y administrativa, y muchas veces lego en derecho⁶, tenía como misión

³ Entendido este como un esfuerzo dirigido a «crear una maquinaria económica y financiera más eficiente, y en general para reimplantar integridad y respeto por la ley en todos los niveles de la administración» (FISHER 1968: i), y que tuvo como base la aproximación cartesiana de la realidad según el paradigma ilustrado, es decir mediante «la adquisición de un conocimiento útil, una investigación racional [sobre esta]» (FISHER 2000: 161).

⁴ La Ciudad de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, capital de la Intendencia; y la Ciudad de San Marcos de Arica.

⁵ La Villa de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, y la Villa de San Miguel de Ribera (Camaná).

⁶ Razón por la cual existía la figura del «asesor letrado» o «teniente de letras» del intendente, quien generalmente impartía la justicia ordinaria en nombre del Intendente. En la presente investigación se ha tomado

principal asegurar la paz y el bienestar de los súbditos en su jurisdicción, ejercitando funciones de guerra, justicia y baja policía (DOUGNAC 1994).

Cuadro N° 15. Población de la Intendencia de Arequipa en 1793

Partido	Espanoles	Indios	Mestizos	Castas	Esclavos	Religiosos	Total
Arequipa ⁷	22687	5929	4908	2487	1225	485	37721
Camaná	5105	1249	1021	1747	887	43	10052
Arica	1585	12870	1977	985	1294	65	18776
Tarapacá	509	5406	1200	528	253	27	7923
Moquegua	5596	17272	2916	887	1526	82	28279
Condesuyos	3663	12011	4358	34	44	35	20145
Cailloma	212	11872	1417	335	29	40	13905
Total	39357	66609	17797	7003	5258	777	136801

Fuente: UNÁNUE 1793: 101-106; Elaboración propia.

En el período que nos ocupa, los fallos, autos definitivos y demás resoluciones fueron emitidas por los Intendentes que gobernaron la ciudad en esos años: el referido Antonio Álvarez Jiménez (1785-1796), Bartolomé María de Salamanca (1796-1811), José Gabriel Moscoso (1811-1814), Pío Tristán y Moscoso (1815 - 1817) y José Menaut (1916) –ambos en condición de interino– y Juan Bautista de Lavalle (1817-1825). Los únicos casos de pena capital efectiva vendrían a ser la dictada y pronunciada por quien en ese entonces sería alcalde ordinario de primer voto, don Pío Tristán y Moscoso⁸ y la que dictaminaría diez años después el Intendente Juan Bautista de Lavalle⁹. No obstante, y a pesar de no constar

cuenta de la importante participación de estos funcionarios suscribiendo decretos y autos en conjunto con el Intendente.

⁷ Según los datos de GÜNTHER VOLLMEYER, 23 545 habitaban la ciudad y 13 710 habitaban los suburbios alrededor de la ciudad. (BULLER: 94)

⁸ ARAr/Intendencia/Criminal (25-VI-1808). Leg. 89. «Contra Leandro Quispi y Luisa Solis por el homicidio de Hermenegilda Villafuerte». Con dictamen de su asesor letrado don Francisco de Paula y Páez

⁹ ARAr/Intendencia/Criminal (08-IV-1818) Leg. 91. «Contra Bentura y Romualdo Quispi por el homicidio cometido contra Ysidro Neira».

expediente al respecto, se tiene noticia de la ejecución de un hombre llamado Visente Paredes el mes de abril de 1821, estando la intendencia bajo el gobierno de Lavalle, por estar consignado en el Libro 2° de Visitas de Cárcel¹⁰.

Completaban el cuadro de autoridades políticas de la intendencia dos alcaldes ordinarios, nombrados cada dos años, denominados de primer y segundo voto y luego del 14 de febrero 1813 llamados alcaldes constitucionales¹¹; otro alcalde «de aguas», y un provincial o «de campo» quienes ejecutaban labores administrativas y jurisdiccionales; los regidores, que tenían como cargo el cuidado del abasto; dos ministros de Real Hacienda; un administrador de aduanas, otro de la renta de tabaco y otro de correos (CARRIÓN 1983: 372).

La ciudad de Arequipa, sede del gobierno y administrada directamente por el intendente, contaba en ese entonces con algo más de 20 000 habitantes, cifra que llegaba a las 40 000 almas si se contaba a las aldeas vecinas (ZEGARRA 1973: 13). Compuesta por una población predominantemente hispánica –en el extremo cultural del término¹²– que se concentraba significativamente en un sector medio de ascendencia criolla¹³.

El mayoritario sector criollo y mestizo solía ocuparse de menesteres artesanales y diversos oficios desde tenderos, comerciantes urbanos, pulperos, notarios, agrimensores clérigos y pequeño agricultores. (CHAMBERS: 70 y ss; GUTIÉRREZ 1992: 66 y s.). Los menos afortunados cubrían, junto a los indígenas, esclavos y pardos libres las tareas más pesadas, actuando como servidumbre doméstica, peones agrícolas, albañiles, aprendices de oficios y mano de obra contratada. Por otro lado, la élite residente en la ciudad era rentista u obtenía su riqueza mediante la explotación de fundos ubicados en los valles más fértiles de la zona¹⁴,

¹⁰ARAr/Intendencia/Administrativo (1818-1822) Leg. 107. «Libro 2° de Visitas de Carcel, practicadas semanalmente por los SS. Juez de Letras, y Alcaldes constitucionales de esta Ciudad de Arequipa. Empieza hoy Sabado 5 de enero de 1822».

¹¹ Cfr. ÁLVAREZ 2012.

¹² Según MC CAA, el estatus colonial –más conocido como «calidad»– era una compleja combinación de la identidad racial, ocupación, riqueza y predominantemente las prácticas culturales, es decir la asimilación de prácticas hispánicas o el mantenimiento de costumbres andinas o africanas (MCCAA: 1984). Iguales conclusiones señalan para Arequipa ESPINOZA DE LA BORDA 2013 y CONDORI 2010.

¹³ Las labores en las que normalmente se ocupaban eran las de tendero, pequeño comerciante, artesano, notario, agrimensor, tasador, clérigo y pequeño agricultor (CHAMBERS: 70 y ss.).

¹⁴ Camaná, Majes o Vitor (BULLER 2011: 97).

y del comercio con diversas zonas de la región, especialmente en el rubro de la producción vitivinícola (BULLER 2011; BROWN 2008) y en un plano secundario, gracias a la minería en la región de Tarapacá y Caylloma. La ciudad, luego, «se perfila como un centro vital de servicios para unas actividades agrícolas-ganaderas [...] que se desarrollan fuera de su espacio urbano» (GUTIÉRREZ: 66 Y S.).

Según el párroco de Cayma, Juan Domingo Zamácola¹⁵ y el propio Gobernador Intendente Álvarez y Jiménez¹⁶, en la ciudad no faltaban los comunes cuadros de pobreza y crimen que eran propios de las ciudades indianas, aunque no de la manera escandalosa de Lima y México (FLORES GALINDO: 196 y ss.). La miseria de los pobladores, evidenciada fundamentalmente en escases de trigo, fue acentuándose en el desalentador contexto de la guerra contra la Gran Bretaña (FISHER 1968: xii; 41).

Asimismo, las actividades agrícolas en los valles generaron incremento de una población flotante, siendo que «el trabajo asalariado estacional había superado a la esclavitud en las haciendas...» (BROWN 2008: 48). Evidentemente esta población desarraigada era más susceptible a cometer actos delictuosos, y por ende a generar violencia.

El sector indígena era minoritario en la ciudad y estaba relegado sustancialmente a los pueblos cercanos a la ciudad como Yanahuara, Chihuata y Pochi. De otro lado, y de acuerdo a lo mencionado por el propio Intendente Antonio Álvarez y Jiménez, los indígenas de los pueblos de alrededor de la ciudad estaban sumamente aculturados y que los clérigos no necesitaban saber el quechua:

«[...] y aún los naturales todos de esta Doctrina (Characato), son perfectamente ladinos por el frecuente trato, comercio, y comunicación con la Ciudad; sabe el actual Párroco el idioma Índico General; y con todo enseñando la Dictina Christiana en el Castellano» (BARRIGA 1941: 204-249).

¹⁵ «[...] en una palabra, no se viera por las calles de Arequipa y sus contornos tanto número de hombres y mujeres entregados a una afrentosa mendicidad» (ZAMÁCOLA : 47).

¹⁶ «[...] no se verían tanto número de hombres y mujeres entregados a una afrentosa mendicidad» (BARRIGA 1941: 286).

Así pues, en contraste con lo que ocurría en Cuzco y en otras intendencias, el poder de los caciques estaba considerablemente menguada.

En lo que respecta a las condiciones de vida de los esclavos en Arequipa, MÁLAGA y NINA (2010) aseguran que estas no fueron muy dura en el radio urbano, ya sea por la naturaleza de las tareas domésticas a que se dedicaban o por el mejor trato que recibían en las casas familiares. Sin embargo, fuera de la ciudad, y donde se encontraba el grueso de la población, las condiciones eran más severas, avocándose los esclavos a duras tareas agrícolas y en algunos casos mineras. Asimismo, según lo tratado por ambos autores, algunos esclavos cuyos amos eran muy pobres eran empujados por estos a dedicarse al robo y la prostitución. Cabe resaltar que por aquella época estaba generalizada la asociación entre delincuencia y ascendencia africana. Situación que se hallaba respaldada, en el alto número de delitos cometidos por este sector social, solo equiparados a los mestizos, en las grandes ciudades y en especial en la capital del virreinato (FLORES GALINDO: 164).

El 66% de los esclavos del total de la intendencia habitaban el valle de Vítor y el 29.5% el del río Tambo. Con todo, el número de africanos esclavos (entre zambos, negros y castas) en la ciudad de Arequipa era muy reducido, contándose entre 5 268 en 1791 según FLORES GALINDO y 2 164 para CHAMBERS, lo que hacía el 9% del total de la población. Según BROWN, de otra parte, serían 1 164 en 1792, configurando un 5.3% de la población (p. 32). De cualquier modo, las cifras están muy por debajo de los 29 763 esclavos africanos que habitaban Lima, donde se concentraba el 73.7% de la población negra. Finalmente, el número de negros horros o libertos era muy escaso en la Intendencia.

Finalmente, en lo tocante a la propia ciudad capital de la Intendencia, podemos decir que esta era al parecer una ciudad bulliciosa y congestionada, en la que –como la mayoría de las ciudades hispánicas– las fronteras físicas entre la esfera pública y privada eran difusas, o por lo menos eran fluidas. Así pues, «la familia [comprendía un espacio] más allá del hogar, [...] sino que estaba incorporada al barrio mayor» (CHAMBERS: 109), y el espacio público –como la plaza mayor de la ciudad– «[se vio apropiado] por los estratos de menor categoría social

en la rígida sociedad colonial», al constituirse como el punto de reunión predilecto por los servidores y esclavos quienes iban a abastecerse de agua (GUTIÉRREZ: 56).

En ese aspecto, los ambientes de las chicherías y las diferentes festividades eran el centro de la interacción social, además de no estar lejanos a la violencia que podía desembocar en cualquier momento al confundirse esfera pública y privada: Incluso para muchas autoridades de la época constituían el foco de la criminalidad¹⁷. Finalmente otro espacio de superposición de lo público y lo privado, y potencial ámbito de agresiones eran las salas de billar que poseía Juan Conde en la calle de la iglesia de San Francisco, y otras que satisfacían a una sociedad aficionada a los juegos como la arequipeña¹⁸, tal como en la segunda década del s. XIX referirá PEREYRA Y RUIZ: «El juego de naipes, dados, y otros, es el primer libro que aprenden [...] el amor que les debía unir á sus mujeres, lo tienen en el juego, y asi éllas viven martires» (CARRIÓN: 35 - 36).

¹⁷ «La concurrencia de grupos multiétnicos de plebeyos a las tabernas daba origen, a veces, a las actividades criminales que tanto temían las autoridades» (GAROFALO 2005: 105 Y SS) También CHAMBERS: 115 y ss; CONDORI 2010: 45. ZAMÁCOLA alude al enorme consumo de chicha que se hacía en esos años: «[su] uso es tan común entre la plebe [...] que a estos les es tan necesaria, que la prefieren a la comida» (p. 29).

¹⁸ En 1792 el Intendente Antonio Álvarez y Jiménez ordenó que «ninguna persona sin excepción tuviese ni permitiese en su casa juegos de banca, sacanete, ni otros semejantes de naipes, apuestas y dados...» (BARRIGA 1941: 3).

CAPÍTULO II

LA VIOLENCIA COTIDIANA: MODALIDADES Y ACTORES.

1. VIOLENCIA COTIDIANA. CONSIDERACIONES GENERALES.

La violencia, no cabe duda, resulta una oscura, pero fundamental fuente para aproximarse a la historia de cualquier grupo humano en particular. Asumiendo lo señalado por WARD STAVIG (1985), podemos afirmar que «estudiar la violencia cotidiana nos permitirá profundizar nuestro entendimiento del pueblo y sus problemas desde un punto de vista más cercano a su realidad» (p. 452), entendiéndolos luego como ellos mismos se entienden. Es en esa línea que, desde hace décadas, el foco de atención de los historiadores se viene desplazando desde aquellas grandes expresiones de violencia como son las rebeliones, motines o levantamientos, hacia aquellas otras formas que silenciosa pero intensamente van día a día conformando una comunidad, delineando sus relaciones, e incluso implicando en última instancia cambios profundos en las dinámicas de una sociedad. Atendiendo a esto, es que vale la pena señalar cómo es que en la presente investigación nos aproximamos al concepto de violencia cotidiana y la discriminamos de otro tipo de conflictos.

Teniendo como base la teoría desarrollada por GOFFMAN (1993), consideramos que lo cotidiano puede definirse en función a una serie de «códigos o marcos de significación, mediante los cuales, en los rituales de interacción, se produce el encuentro entre las microestructuras de significado que componen la expresión de la persona» (CHIHU Y LÓPEZ 2000: 239). Este concepto aludiría entonces, a que «lo cotidiano» corresponde al juego de roles (*performance*) que representan todos los involucrados en las relaciones sociales día a día. Por contraste, en las antípodas de la cotidianidad, podemos citar situaciones o acontecimientos que escapan o cuestionan las rutinas que se han constituido en función a los roles adoptados por los miembros de una comunidad. La singularidad de estos eventos y función de ruptura harán de ellos «momentos dignos de ser recordados», excluyéndolos automáticamente de la noción de lo cotidiano cuyos hechos –en el otro extremo– se pierden en la difusa noción de la secuencia vital. Es así que, por su relevancia, estas situaciones que escapan a la esfera de lo cotidiano por la fuerza de su significación, singularidad y el alcance

meta-personal de sus efectos, serán remitidas a la esfera de lo que llamamos «lo excepcional».

El hecho que para GOFFMAN la acción social se construya por la propia interacción dentro de unos marcos de referencia estructurales, nos acerca por otro lado a la tesis de CHARLES TILLY (2003) en la cual se explica que la violencia tiene origen en microprocesos de enfrentamiento que pueden generar modelos más duraderos y complejos de violencia. TILLY, destacado teórico contemporáneo sobre la Violencia, explica este fenómeno desde la teoría de la «interacción social».

El sociólogo norteamericano clasifica las visiones tradicionales sobre la violencia en tres grandes grupos: La primera perspectiva prioriza lo cultural, y señala que la violencia tienen origen en las «creencias, conceptos, reglas, metas y valores de su entorno». La segunda, de tipo economicista, está relacionada a la satisfacción de necesidades, incentivos de dominación, explotación, o seguridad. La tercera alude a aquella que se puede producir de los «espacios de intercambio, negociación y creatividad» (ARTEAGA BOTELLO 2007).

«Para TILLY (2003) cada una de estas perspectivas permite explorar hasta cierto punto las causas de la violencia. En este sentido no cree que puedan ser consideradas como erróneas, aunque sí limitadas porque acentúan demasiado un aspecto vinculado a la constitución de las acciones violentas, olvidando la capacidad explicativa de las otras. Propone por tanto una forma particular de articularlas: la interacción social». (ARTEAGA BOTELLO 2007: 48).

Por lo tanto, se propone el análisis de los micro mecanismos de violencia entendidos estos como «causas en escalas pequeñas» (TILLY 2003: 20) que harán posible procesos de violencia, originados a partir de «combinaciones y secuencias de mecanismos que producen efectos similares a través de amplios espectros de circunstancias» (TILLY 2003: 21). Este autor diferenciará, finalmente, entre tres mecanismos: a) los ambientales, que responden al entorno, Vg. La pugna por la escasez de recursos o la hostilidad del medio; b) los cognitivos, «que operan a través de las alteraciones de las percepciones colectivas e individuales»; y los c) los relacionales, que refieren a las dinámicas de adhesión o exclusión de los grupos,

expresados en la «activación de fronteras o clausuras entre grupos, conformando un ‘nosotros y ellos’: amigos y enemigos, blancos y negros, puros e impuros; y los que permiten la intermediación precisamente entre los grupos tanto aliados como enemigos» (ARTEAGA BOTELLO 2007: 49).

Es así que, al relacionar el concepto de cotidianidad de GOFFMAN con el de micro mecanismos de violencia de TILLY, podemos forjar una noción de «violencia cotidiana» entendida como cualquier tipo de agresión física y/o verbal producida a consecuencia de las comunes relaciones entre individuos en ejercicio de sus roles sociales estables y definidos, y que es englobada dentro de los marcos antes aludidos de dichas representaciones (*frameworks of understanding*), y de cuya progresiva resignificación y acumulación se van estableciendo los parámetros de la violencia colectiva no-cotidiana¹⁹; violencia que por su parte se manifiesta en desbordes de conflictividad excepcionales (V.g. Revueltas, movimientos revolucionarios, guerras, etc.).

2. INCIDENCIA.

Hemos considerado para el desarrollo de la presente investigación, la observación del íntegro de los expedientes penales obrantes en el Archivo Regional de Arequipa (ARAr). Se tratan de ocho legajos (del n° 85 al n° 92) que corresponden las causas criminales seguidos ante la Intendencia de Arequipa en el período de 1784-1824. Se ha estimado no tomar muestras, por cuanto el número total de las causas que involucren agresiones interpersonales –alrededor de 176 causas– constituyen un universo que es necesario abordar para realizar conclusiones más pertinentes y precisas. Se analizaron el íntegro de los legajos, identificando todos aquellos que versaran sobre «injurias», «heridas» y «homicidios» tanto íntegra como indirectamente, para luego analizar estas causas al detalle.

¹⁹ «[Se] hace posible, según TILLY (2003), observar variaciones significativas de la violencia a través del tiempo, de lugares y contextos sociales, en la medida en que muestran cómo las dinámicas de las interacciones interpersonales transforman creencias, inhibiciones y sentimientos en el curso de la violencia colectiva» (ARTEAGA BOTELLO 2007: 49).

a. Período de investigación. Se ha tenido en cuenta para fijar el período de investigación la importancia del lapso transcurrido entre 1784-1824 por ser éste uno de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales, que incidieron en último término en el cambio sustancial de modelo político y social, ya en el pleno período republicano. Hablamos de un tiempo de reformas que es potencialmente convulso, y por ende profuso en violencia de tipo interpersonal.

b. Fuentes primarias. Por otro lado, si bien la mayoría de los datos extraídos corresponden a las denuncias realizadas por particulares en forma de querellas criminales, y a pesar que de la revisión inicial de los expedientes la menor parte de las causas fueron sentenciadas, las querellas al parecer remiten a hechos ciertos tanto por lo descrito en las denuncias, las pruebas presentadas y actuadas en la sumaria, como también porque en la mayoría de los casos se dictó mandamiento de prisión y embargo contra los procesados. Se señala esto, en vista de la aparente parcialización y, por lo tanto, menor grado de verosimilitud de dichas fuentes. Es este punto, la historiografía remite a la necesidad de hacer uso cuidadoso de estas fuentes²⁰.

Habida cuenta de la información contenida en los depósitos judiciales, podemos señalar que en el período, la mayor incidencia de delitos estaba constituida por las ofensas personales, en los que se puede incluir los delitos de homicidio, injurias, heridas, y los de «faltamientos de respeto» y «excesos en el ejercicio de la autoridad» (65%)²¹. Los crímenes contra la propiedad (15%), y aún más, contra el Estado como la defraudación (contrabando), motín y sedición eran los menos (14%). (Ver cuadro 1).

²⁰ En relación a esto, y de manera pertinente, CAIMARI (2015) señala: «En América Latina, hizo falta más de una década de estudio de los lenguajes y engranajes del poder punitivo para encarar, sin miedo a caer ingenuamente en sus trampas las pistas alternativas que abren los documentos carcelarios, policiales y criminológicos».

²¹ Aunque podría tipificarse a estas dos últimas conductas —«faltamientos de respeto» y «excesos en el ejercicio de la autoridad»— como delitos de *lesa majestad*, o contra la Corona, por cuanto se refieren a hechos que en la actualidad se conocen como delitos de función; nos apartamos de estos criterios que más corresponderían al moderno sistema de clasificación de los delitos. Tenemos en cuenta que, por la misma dinámica de las agresiones advertimos que el hecho que las injurias se produzcan «hacia» o «desde» la autoridad operarían más como un agravante de una disputa de tipo personal, que como un delito de distinta naturaleza. Recordemos que en el antiguo régimen las fronteras de lo privado y lo público —tan explícitas hoy en día— eran profundamente difusas.

2.1. *Consideraciones generales.* La mayor incidencia de agresiones interpersonales frente a delitos que en la actualidad son los más frecuentes (como es el caso de los delitos contra el patrimonio) es también una constante en otros estudios sobre violencia en el período, como la efectuada por PALOP (1996)²² en el ámbito castellano, ANDAZÁBAL (2007) en el Perú, utilizando los Fondos de la Real Audiencia en los períodos de 1701-1792²³ y STAVIG (1985, 1990) en el caso concreto de Quispicanchis y Canas. Esta tendencia se remontaría aún a la baja Edad Media como lo demuestran los estudios de CHIFFOLEAU (1984) en la Aviñón del S. XIV; GAVARD (1993) en su investigación sobre la violencia en los centros urbanos franceses del S. XIV y XV; CÓRDOBA (2004) y MENDOZA GARRIDO (1999) en el ámbito castellano y manchego a fines de la edad media.

Sin embargo, debemos relativizar las conclusiones que a *prima facie* se pueden deducir de los datos estadísticos. Apartándonos del criterio de CHIFFOLEAU y GAVARD quienes caracterizan a la sociedad de fines de la edad media como muy proclive a delitos de sangre, en gran medida como respuesta a un alto concepto del honor, nos adherimos en parte a la opinión de CÓRDOBA y MENDOZA GARRIDO, que matizando las conclusiones de los franceses antes citados, señalan que «la naturaleza de las fuentes utilizadas pueden tergiversar los resultados obtenidos» (CÓRDOBA: 441). Tenemos pues que, teniendo en cuenta que la sociedad del Antiguo Régimen se aparta de parámetro de centralización y monopolización de lo público –tal como ocurre en nuestros días– es posible que el grueso de los delitos denunciados serían aquellos particularmente graves como son los de sangre, dejándose de judicializar aquellos que si bien acaecían quizás con mucha frecuencia, por su menor amenaza podrían bien autocomponerse sin necesidad de mediación pública.

De igual manera, en la línea de la necesidad de relativizar los datos cuantitativos sin descartar por completo su valioso aporte, se hace necesario dar cuenta del estado de las fuentes

²² En la Península, los ataques contra la persona constituían casi el 50% de los delitos, y los homicidios serán contabilizados como la mitad del total de las agresiones contra la persona. Entre ellos «no son infrecuentes los casos de parricidio ni los infanticidios, estos últimos sobrevenidos por sofocación, y mucho menos los abortos, todos ellos presentes en prácticamente la totalidad de las Audiencias» (PALOP 1996: 38).

²³ «Para el siglo XVIII, el resultado de las estadísticas proyectan el 8.91% para los delitos en contra el orden público, el 17.58% para los delitos contra la moral, el 30.7% para los delitos contra el patrimonio y el 42.79% para aquellos delitos en contra de las personas [...] De los cuales los homicidios (199 expedientes) y la agresión física (247 casos), son los que registran mayores porcentajes» (p. 5).

consultadas. Resalta así el hecho de no contar con el íntegro de documentos que darían cuenta de la real situación de violencia. Si bien del global de causas estudiadas tan sólo un reducido número de ellas están corruptas (9%), la gran mayoría de ellas no concluyen dejándose muchas veces abandonadas (43%), lo que nos impediría tener una noción global de los hechos criminosos para así reducirlos a estadística. El hecho del abandono de los procesos, de otra parte, podría estar en relación a lo oneroso que resultaban las costas procesales para las partes en conflicto, máxime si los procesos podrían alargarse por años. Tan sólo los procesos graves, como los homicidios que generalmente eran seguidos de oficio, eran llevados adelante hasta las últimas fases de la causa (ver cuadro 4). Asimismo, por medios indirectos, como la revisión de un libro de Visitas de Cárcel que obra en legajos calificados como «Administrativo»²⁴, y de la consulta del Fondo de Real Audiencia – Causas criminales del Archivo General de la Nación, se han encontrado diversos datos de expedientes sobre injurias y homicidios que no existen en la actualidad en los repositorios de la ciudad²⁵. Esto nos refiere que mucha de la documentación original está perdida en la actualidad, lo que evidencia finalmente que no poseemos información suficiente para abocarnos a una investigación de carácter fundamentalmente cuantitativo. No obstante esto, es evidente que la sistematización de los datos reduciéndolos a estadística nos permitirá organizar y desarrollar con mayor alcance las conclusiones del presente estudio.

Por otro lado, hablando ya de la incidencia global de crímenes, señalamos que gracias al estudio comparado con otras locaciones del espacio americano lo son Lima (FLORES

²⁴ ARAr/Intendencia/Administrativo. Leg. 107. (1818-1822) «Libro 2º de Visitas de Carcel, practicadas semanalmente por los SS. Juez de Letras, y Alcaldes constitucionales de esta Ciudad de Arequipa. Empieza hoi Sabado 5 de enero de 1822». En éste documento figuran datos concernientes al homicidio de Miguel Paredes cometido por Francisco Huerta «la noche del 15 de setiembre [de 1822] en la otra Banda del río». Fjs. 15 y s; 17v.); y de la ejecución mediante garrote de un «reo condenado a muerte llamado Visente Paredes en el mes de Abril de 1821». Fjs. 16 y s. No figura expediente alguno de estas causas.

²⁵ En el período estudiado, obran 7 causas criminales de las cuales 5 no figuran en archivos de la ciudad de Arequipa. De estos, tres causas aluden a crímenes de sangre: AGN/Fondo Real Audiencia/Causas Criminales. Leg. 69. (1791) «Contra Juan Damian Hurtado por el homicidio de Feliz, Sambo esclavo de don Vizente la Torre»; AGN/Fondo Real Audiencia/Causas Criminales. Leg. 137. (1817) «Autos promovidos en la vía penal por el Procurador de Pablo García, a nombre de Antonio Ruiz, contraquerellándose por injurias inferidas a Toribio Benavides y Baltazar Prado»; AGN/Fondo Real Audiencia/Causas Criminales. Leg. 137. (1817) «Autos criminales seguidos de oficio por la Real Justicia, contra José Rivera, por sospechas de haber dado muerte al indio José Rojas».

GALINDO 2010, ANDAZABAL 2007²⁶), Trujillo (VIVANCO 1990), la Sierra Central (ANDAZABAL 2007), Canas, Canchis y Quispicanchis (STAVIG 1985, 1990)²⁷ y Tucumán (ASPELL 2008), podemos afirmar que Arequipa resultaba un rincón de la hispanidad bastante tranquilo, en los que no eran abundantes los crímenes graves, tal como lo señalaban muchas fuentes.

Así pues, las autoridades, aluden al ambiente pacífico que imperaba en la región. Antonio Álvarez y Jiménez refiere continuamente en su relación de visita no encontrar causas judiciales pendientes, y aún reos, en los pueblos visitados «ya por la tranquilidad y buena armonía en que todos se han encontrado y se mantienen» (BARRIGA 1941: 138). De igual forma, su sucesor, el Intendente Bartolomé María de Salamanca resalta en su relación de gobierno «la religiosidad y sencillez de sus moradores», señalando que «fue muy raro el homicidio perpetrado en los grandes despoblados de tan dilatada provincia» (FISHER: 37; 39). Casi contemporáneamente, el viajero alemán Tadeo Haenke al visitar la ciudad en la última década del S. XVIII sostendrá que «los delitos dominantes de la plebe no son de consideración, por ser toda aquella gente apacible y de buena inclinación» (HAENKE 1830: 189).

La opinión discordante será la del párroco de Cayma, Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. En la relación de la visita a su doctrina afirma que en ella «día a día aumentan los ladrones y malhechores, [...] no hay ni ha habido freno para contener a tantos raterillos, holgazanes y ociosos que cada día van aumentando en este pueblo con motivo de la cercanía de la Ciudad» (ZAMÁCOLA: 38; 44). Sin embargo, debe discriminarse, pues, a los delitos de poca monta a los que alude el párroco caymeño con quizás celosa preocupación, de los graves crímenes que eran continuos en regiones más pobladas y que según las autoridades de la intendencia no se verificaban en sus dominios.

²⁶ ANDAZABAL contabiliza el 32.26% de los homicidios computados entre 1701-1792 en Lima, frente al 1.73% en Arequipa en el periodo. (p. 31 y s.)

²⁷ STAVIG (1985) en el mismo periodo reporta 43 homicidios (más del triple de los contabilizados en Arequipa) en un ámbito espacial significativamente menor, como son las provincias de Quispicanchis, Canas y Canchis.

Asimismo, según los criterios de la época, se tiene a la vagancia como principal causa del crimen. En ese sentido también ZAMÁCOLA, en el año de 1789, llamará la atención al Intendente sobre la proliferación de «ociosos y ociosas» en las calles de Arequipa (p.31), llegando incluso a señalar que los pobladores de la parroquia a su cargo, Cayma, eran «sumamente perezosos, desidiosos y entregados a una total ociosidad y dados a la embriaguez» (p. 37 y s.). De igual forma el Intendente don Antonio Álvarez y Jiménez, en su detallada relación de su visita, da cuenta de un criterio similar en todo momento «mandando que se recogiesen los vagos y mal entretenidos para evitar robos, pendencias y demás delitos que pudieran cometer» (BARRIGA 1941: 2), y quien por su parte reconoce no haber encontrado ociosos en su visita. Lo mismo señalará Salamanca: «no se han consentido Vagamundos ni gente sin destino, aunque muy pocos de esa clase se havrian presentado en esta Ciudad Capital y demas de su comprehension» (FISHER: 37).

Es de destacar en esa línea la nula incidencia en Arequipa de abigeato endémico –como ocurría en numerosas comunidades de la sierra–, y la inexistencia de bandas estables de asaltantes o salteadores de caminos, asunto ampliamente documentado en muchas de las regiones citadas anteriormente²⁸. Bandolerismo que se intensificó luego de 1821 a causa de débiles primeros gobiernos republicanos y la anomia generada por la coyuntura independentista.

«La escasez, la apatía de la junta, la desmoralización del ejército y la marina, por la inercia y negligencia de los jefes y el atraso en el pago de los haberes y la desconfianza creciente en el gobierno y el congreso trajeron por consecuencia el recrudecimiento del

²⁸ Han quedado perennizados los nombres de famosos jefes de asaltantes o –como se les llamaban en aquella época– «capitanes de bandidos», y sus correrías en las haciendas de los valles limeños de Carabayllo y Supe. Nombres como José Sifuentes, Fermín Antonio, Félix Lobatón, Pedro Nolasco Villar, Toribio Puente, Ignacio de Rojas, Manuel Bravo, Pedro León y Juan Pulido serán reiteradamente mencionados en la documentación judicial como causantes de los robos y las muertes en los caminos de Lima. Cometidos por grupos estables de negros fugados y refugiados en palenques que serían el terror de los viajeros y la preocupación de las autoridades coloniales, los asaltos limeños eran el epítome de inseguridad en el virreinato. (FLORES GALINDO 2010, ANDAZABAL 2007, ESPINOZA DESCALZO 1999, AGUIRRE 1990). En el caso de Trujillo, VIVANCO (1990) señala que la presencia de bandolerismo «no era exclusiva de la zona costera de Lima lo prueba la presencia en Trujillo, hacia 1804, de una banda que estuvo conformada por esclavos de la haciendas Tomaval, San Idelfonso y Santa Elena» (p. 50). Sobre Tucumán, ASPELL (2008) refiere las hazañas del famoso cuatrero y bandolero Juan Bautista Guayanes, «habilísimo en el manejo del facón, [...quien] desde pequeño andaba huido de su padre y de las justicias robando continuamente haciendas de campo y mujeres», un ejemplo tan sólo de una población «que vivía con poco temor de Dios ni respeto por la real justicia » (p. 213-214).

bandolerismo ya desde el desembarco de San Martín en Paracas, por la libertad que dio a los negros esclavos que se incorporaran al ejército patriota y también por el fomento de las montoneras. Los caminos y aún las mismas calles de Lima se veían infestadas por partidas de malhechores a los cuales no alcanzaba a contener la fuerza pública. Era peligroso, así fuese de día, encaminarse al Callao sin armas y sin compañía, y fue necesario crear el Tribunal de la Acordada a fin de juzgar sumariamente a los malhechores y poner término a sus desmanes. Todo esto demuestra la confusión y el desorden existentes y también la falta de patriotismo de muchos individuos» (VARGAS UGARTE 1966: 251)

Incluso, en algunos de los testimonios judiciales consultados se hace eco del sombrío panorama de seguridad en los territorios «patriotas»; afirmaciones en los que se deja constancia de cómo los vecinos arequipeños consideraban estos lugares –y en específico Lima– como lugares de inmenso peligro. Así pues, como ejemplo tenemos la declaración del alcalde de Sigüas, José Antonio Martínez del Campo, quien en una disputa contra Casimiro Bolaños y su familia sería insultado por Juan Baldivia –amigo de Bolaños– replicándole a manera de injuria: «baia U. a las pampas de Lima á acompañarse con los fasinerosos a matar»²⁹.

Por el contrario, en esas complicadas épocas, Arequipa y los demás territorios aún bajo dominio español mantenían el orden y cohesión interna para mantener e incluso mejorar el tráfico económico incluso en esos momentos de crisis (CONDORI 2012). En esa línea, en Arequipa, el reducido número de homicidios contabilizados (16 en 38 años) dan cuenta de lo pacífico que resultaba esa intendencia en una coyuntura tan difícil, inestable desde la rebelión anti-fiscal de 1780 llamada «de los Pasquines» (GALDOS 1967).

Finalmente, y pesar de haber dejado constancia en líneas precedentes de la necesidad de matizar la proporción entre delitos de sangre y los restantes crímenes del período, del análisis global de los crímenes denunciados resaltamos la preeminencia de la comisión de injurias

²⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (24-XII-1815) «Causa criminal seguida por el Alcalde de Sigüas D. José Antonio Martínez del Campo contra Casimiro Bolaños, su muger Januaria Baldivia, y Juan Baldivia su hermano; por perdimiento de respeto, y atropellamiento a la Real justicia, la noche del 24 de Diciembre: y remitida esta causa al Sr. Gobernador Intendente de esta Provincia» Fjs. 3. También se repite esta afirmación en las declaraciones de fjs 2 v. y 3 v.

por sobre los demás delitos, dado que los delitos contra el patrimonio y contra la Corona en Arequipa eran aún más reducidos en número y en gravedad en comparación con lo examinado en otras regiones. Esto confirmaría la teoría que, específicamente en Arequipa, la violencia estaba marcada por conflictos interpersonales, donde el honor y el estatus jugaban un fuerte papel³⁰.

2.2. *Incidencia en el tiempo.* Concordando con lo manifestado con CHAMBERS (2003)³¹, del análisis temporal de los delitos, podemos identificar una leve tendencia al incremento que tiene como pico el año de 1819 y que, luego, declina bruscamente en el período inmediato que va hasta 1824 (véase Gráfico 1). Interpretamos ese repentino descenso atendiendo al caos propio de la etapa final del virreinato; desconcierto que hiciera mella en la función de la administración de justicia que recaía en el Intendente, en ese momento abocado a las urgentes tareas militares en las que se veía envuelto frente a la insurrección patriota. Esto queda patente por el hecho que desde el año de 1822, cada vez con mayor frecuencia las causas fueron despachadas exclusivamente por el asesor letrado del en ese entonces Intendente Juan Bautista Lavalle, el Juez de Letras Vicente León³².

De otra parte, y aunque la incidencia de homicidios se prácticamente idéntica al pasar los últimos años del siglo XVIII e iniciarse el XIX, podemos apreciar un incremento más definido en cuanto la comisión de ataques personales como injurias y heridas, y en especial los ataques a las autoridades coloniales, tal como desarrollaremos con mayor detalle más adelante. Evidentemente, la coyuntura de la Independencia tuvo que ver con este deterioro de las relaciones entre vecinos y autoridades, encontrándose en las causas claras alusiones a

³⁰ De igual manera CHAMBERS (2003).

³¹ «El número de causas comenzó a subir en las últimas décadas del dominio hispano. Los que comenzaron a subir fueron en especial los juicios por injurias y las disputas con las autoridades, lo que tal vez refleja un cuestionamiento inicial de la legitimidad de las normas coloniales» (p. 158).

³² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (I-1822) «Expediente de María Manrique presa en la Carzel por orden del alcalde del Valle de Tambo dn. Leandro Ampuero»; (VIII-1824) «Don Mariano Goyzueta contra Ignacio Molina por calumnia», (11-VII-1824) «Mariano Zeballos contra Genaro Benavides por injurias», etc. También Villegas (2006:89) refiere el colapso de la administración virreinal de justicia en el periodo, en el ámbito de la Nueva Granada.

cada vez más acentuado desacato y desconocimiento de la legitimidad de los representantes de la Corona.

Asimismo, en este contexto, la progresiva militarización de la sociedad arequipeña –que alcanza un hito importante desde la rebelión de Pumacahua en 1914 y que continúa hasta el fin del dominio hispánico– provocará una tensión que muchas veces degenerará en crimen. A esto se le debe sumar los trastornos producidos por la alta movilidad de la población en este contexto, y sobre todo de efectivos castrenses. En los fondos criminales encontramos algunos ejemplos de estos hechos, traducidos en causas como la que promovió Petronila Suárez contra un soldado de nombre Diego, en 1914. Según lo aducido por la querellante, luego de reconvenir al sujeto por unas grescas que andaba provocando en su vecindario, el soldado le dio de palos hasta que algunos transeúntes la socorrieron. A consecuencia de la ataque del desconocido Petronila sufriría fuertes lesiones que, según lo manifestado por los cirujanos en sus declaraciones, corresponderían a signos evidentes de heridas de consideración³³.

3. MODALIDADES DE LA VIOLENCIA: INJURIAS, HERIDAS Y HOMICIDIOS.

Como es obvio, resulta una tarea muy difícil tipificar o, al menos, clasificar las conductas criminales fuente de la violencia cotidiana en la Arequipa de finales de la dominación española (TOMÁS Y VALIENTE 1969). Resulta comprensible, por tanto, que algunos autores hayan determinado evaluar y catalogar estas conductas, íntegramente, desde categorías actuales (PALOP 1996, ANDAZABAL 2007). Sin embargo, nos hemos orientado a clasificar las agresiones teniendo en cuenta a los criterios judiciales de la época. Así pues, siendo que incluso a finales del S. XVIII e inicios del S. XIX la fuente fundamental en materia criminal seguía siendo las Siete Partidas de Alfonso el Sabio (CUELLO CALÓN 1948)³⁴, se ha optado por seguir su categorización.

³³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (11-IX-1814) «Petronila Suarez contra Diego N. soldado, por injurias».

³⁴ Este cuerpo legal mantendría vigencia en el ámbito procesal (BASADRE: 238) y penal, ya que como menciona CUELLO CALÓN (1968) «Los trabajos legislativos posteriores a las Partidas [en materia penal] son de escaso valor» (p. 128). En la séptima partida por primera vez se define el delito, se enumeran causas de exención, de atenuación, de agravación; y de modo rudimentario la tentativa, la complicidad y hasta la prescripción (CUELLO CALÓN: 125 y s.).

3.1 *Homicidios*.- En el Título VIII de la Séptima Partida se describen claramente los homicidios. Ya en la Ley primera se los define:

«Ley primera. que cosa es omezillo. & quantas maneras son del. Omicidium en latin tanto quiere dezir en romanze commo matamiento de onbre. E deste nonbre fue tomado omezillo segund lenguaje de españa. E son tres maneras del. La primera es quando mata vn onbre a otro tortizeramente. La segunda es quando lo faze con derecho tornando sobre si. La tercera es quando acaesçe por ocasion. E de cada vna destas maneras diremos en las leyes de aqueste capitulo» (Ley 1 Tit. VIII Partida VII).

En la época se distinguía el homicidio propiamente dicho, penado con la pena de capital (Ley 2, Tit. VIII, Partida VII); el culposo, penado con destierro (Ley 5); el parricidio, penado con el *cuellum romano* (Ley 12)³⁵; el homicidio alevoso, penado con ahorcamiento y arrastramiento (Ley 15); el aborto penado con la muerte (Ley 8); la muerte por omisión del deber de cuidado que debían prestar los hijos o los siervos, también penado de forma capital (Ley 16); y finalmente, aquel producido por causa accidental o fortuita que estaba exenta de pena (Ley 4).

Además, en el mismo cuerpo legal, estaban previstas causales de excepción, como la «defensa natural», su honra o la de sus parientes, la orden del Rey o en defensa del estado, o el ejecutado por menor de diez años y medio o si fuese «loco o desmemoriado» (Ley 3, Tit. VIII, Partida VII)

A pesar de no estar prevista en la Séptima Partida, hemos considerado dentro de la tipología a los «homicidios en conato», por estar contemplados en la doctrina y, sobre todo, por

³⁵ El *Cuellum Romano* era una antiquísima pena que, según lo señalado por la propia ley 12 de la séptima partida, consistía en «que atal que fizo esta enemiga que sea açotado publicamente ante todos & desi que lo metan en vn saco de cuero & que encierren con el vn can y vn gato & vna culebra y vn ximio & despues que fueren en el saco con estas quatro bestias cosan la boca del saco y lançen los en la mar o en el rio que fuere mas açerca de aquel lugar do acaesçiere». A pesar que sus aplicación era muy difícil, y que en el ambiente de la Ilustración su ejecución aparentaba ser inútil, a inicios del siglo XIX el fiscal que acusaría a la india Bentura Quispe por el asesinato de su esposo Isidro Neira solicitaría la pena de muerte mediante la horca, y que luego se arrojase al río el cuerpo exánime de la homicida en un saco en el que se habrían de haber pintado las imágenes de un felino, una culebra y un perro. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (08-IV-1818) «De oficio contra Romualdo y Bentura Quispe por la muerte producida en la persona del marido de ésta, Ysidro Neira».

aparecer de las propias causas consultadas. Así pues, Juan Francisco Valdion, cabo de caballería y vecino del valle de Sigüas querrellaría a Tomas Llerena por «omicidio en connato» y por las injurias que recibió su mujer³⁶. Denominación similar utilizarían Juana Sánchez al querrellarse contra su medio hermano Rafael Galdos, por el ataque ejecutado en su contra por una disputa surgida entre ambos a propósito de una herencia³⁷; y Juana Florez quejándose del ataque mortal efectuado a su esclavo Alberto por parte de Bernardo Pastor, entre otros³⁸.

Señalamos también que, no obstante encontrarse en muchas causas expresiones que hacen referencia a un supuesto móvil homicida del victimario, lo que podría llevar a considerar la conducta como un supuesto homicidio en conato, consideramos que la mayoría de ellas –tal como quedará acreditado de las declaraciones– tan sólo son afirmaciones hiperbólicas de las partes, quienes con el ánimo de mover a la justicia normalmente exageran los hechos para dramatizar el daño sufrido. Hablamos de imprecaciones del tipo: «tenía positivos deseos de abirme [...] tomó dos piedras en la mano para herirme profiriendo positivos deseos de matarme»³⁹, que son abundantes en los escritos de querrela. Es por eso que se ha tenido a bien discriminar entre estas afirmaciones para categorizar las conductas como homicidio en conato, descartando aquellas que no estén apoyadas por las pruebas aportadas en la sumaria, y en especial a aquellas agresiones cuyo potencial homicida se haya restringido a la mera provocación o intención (dolo), para luego tan sólo considerar a aquellas que –a pesar de no haber provocado un resultado homicida– implicaron una acción eficaz para alcanzar la muerte de la parte contraria (homicidio frustrado).

Apartándonos de las cifras presentadas por CHAMBERS (2003: 160), hemos verificado la existencia de 10 homicidios, 4 parricidios y uxoricidios, 3 homicidios cometidos por

³⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (30-V-1806) «Juan Francisco Valdion contra de Tomas Llerena por homicidio en conato».

³⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (24-IV-1810) «Juana Sánchez en contra de Rafael, María y Balentín Galdos».

³⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (27-II-1816) « Da. Juana Florez contra Bernardo Pastor por haver herido mortalmente á un Esclavo mio nombrado Alberto Florez». De igual forma se utilizará dicho término en: ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (01-I-1817) «A solicitud del Procurador don Torivio Aguilar como Apoderado de Dn. Francisco Xavier de Villena y demás vecinos del Pueblo de Andaray Partido de Condesuyos en esta Provincia».

³⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (19-X-1789) «Don Vicente Mantilla contra Tomás Ortiz por injurias».

imprudencia, 3 abortos, 9 homicidios en conato y 2 denuncias de homicidios que fueron desestimadas o cuyos supuestos autores fueron exculpados.

a. *Homicidios pasionales*. De entre los homicidios, resaltan por su número aquellos que se perpetraron como producto de enfrentamientos familiares, especialmente de tipo sentimental. Coincidiendo con los resultados de ANDAZABAL (2007)⁴⁰ STAVIG (1990)⁴¹ y podemos señalar que la mayoría de los crímenes tenían por móvil y espacio la desavenencia doméstica y sentimental, y el ambiente festivo o el consumo de bebidas alcohólicas. En el ámbito arequipeño estos constituían la gran mayoría, contabilizándose 9 casos (47 %).

En este sentido, resultará muy representativo el uxoricidio en conato que intentaron contra Thomas Valdivia, su esposa Eulalia Rosado y el amante de ésta –además de primo– Matheo Rosado, en el valle de Tambo durante el año de 1796. Durante meses Eulalia suministraría «solimán crudo», es decir arsénico, haciéndole creer que se trataba de una cura para un mal del estómago. Una india de Puquina, llamada Thomasa Benavente, advertiría del hecho a Valdivia justamente cuando su mal lo tenía a las puertas de la muerte. Ambos cómplices serían juzgados por el Intendente Salamanca:

«debía absolver, y absuelvo del rigor de la pena que correspondería a la criminalidad intentada, y [los da] por incursos solo en el apercibimiento por la imprudencia que se divisa en sus procedimientos, á guardar toda la escrupulosidad debida en el sucesivo manejo; imputándoseles la Carzeleria como en parte de ella: con mas la necesidad de no habitar Matheo en el lugar qe Eulalia bajo la pena de Carzeleria»⁴²

Años más tarde, un indio tributario del pueblo de Chivay llamado Cipriano Herrera sería condenado «a seis años de precidio al de Guayaquil para que sirva en las reales obras de su magestad a ración y sin sueldo» luego de haber asesinado en 1810 a su mujer Francisca

⁴⁰ «La revisión de los juicios ventilados en la Real Audiencia de Lima en el siglo XVIII [1701-1792], nos perfilan hasta 16 tipos de móviles por las cuales se llegaba al homicidio, siendo los índices más altos para aquellos suscitados por causa de amistad ilícita (22.54%), embriaguez, (16.18%), robo (15.61%) y hostilidades en las cárceles (15.03%)» (p. 55).

⁴¹ «Las causas principales de asesinato en Quispicanchis y en Canas y Canchis fueron los crímenes pasionales que frecuentemente involucraban el consumo de alcohol» (p. 74).

⁴² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (4-XI-1796) «Eulalia Rosado y Matheo Rosado por la tentativa de uxoricidio por veneno en contra de Thomas Valdivia».

Gutiérrez⁴³. Tan sólo dos años después, en 1812, otro indio de nombre Marcelo Ccasa asesinaría a su esposa, de nombre María Arequipa, en la Puna de Viñocaya en Yanque. Luego de ser denunciado por los familiares de la víctima, sería procesado y confesaría como le había «torcido el cuello» con el objetivo de casarse con una joven soltera de las inmediaciones. A pesar de los esfuerzos de los querellantes, Ccasa escaparía de la cárcel antes que se le dicte sentencia⁴⁴.

Sin embargo, será en 1818 cuando ocurriría uno de los hechos más sonados de éste tipo. Luego de cuatro años en prisión, Bentura Quispi, india procedente de Vilque (Puno) y residente en la pampa de Miraflores, sería fusilada en la plaza de armas de la ciudad. Se la había acusado y condenado por el asesinato de su esposo el leñador Isidro Neira, también indio forastero, en las inmediaciones de Yumina. Habría cometido el crimen en colusión con su amante Romualdo Quispi, también originario de Vilque y al parecer pariente de la agresora. Neira habría muerto consecuencia de los golpes recibidos por Bentura y Romualdo, quienes aprovechando que estaba dormido lo golpearon en la cabeza con la leña recién cortada por éste. Inicialmente ambos habrían sido condenados a morir en la horca, sin embargo Romualdo fugaría de la Real Cárcel en 1821⁴⁵.

Resaltan de estas y las demás causas que casi la totalidad de los asesinatos por asuntos amorosos –y en especial los uxoricidios– fueron cometidos por indios, asunto que también ha puesto de relieve ANDAZABAL (2007) encontrando una proporción de 26 muertes cometidas por indios en un total de 39 crímenes pasionales en su período de estudio. Asimismo, muchas de las muertes, y en general de las agresiones por asuntos pasionales (como se verá en capítulos posteriores) fueron perpetradas por personas ligadas al entorno familiar (esposos, primos, cuñados, hermanos) y entre amantes o amancebados (convivientes); algo que también ya se ha puesto de manifiesto en muchos de los estudios antes nombrados.

⁴³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1810) «Copia de la sentencia de vista pronunciada en contra de Cipriano Herrera por el homicidio cometido en contra de su esposa Francisca Gutiérrez».

⁴⁴ ARAr/Intendencia/Criminal (22-III-1812) Leg. 90. «Marcelo Ccasa por el homicidio cometido en la persona de su muger María Arequipa».

⁴⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (08-IV-1818) «De oficio contra Romualdo y Bentura Quispe por la muerte producida en la persona del marido de ésta, Ysidro Neira».

b. *Ambiente festivo*. En segundo orden, luego de los crímenes pasionales se observa que la mayor cantidad de homicidios se relacionan a ambientes festivos y consumo de alcohol. Hablamos de 4 homicidios que constituyen el 21% del total. A diferencia de lo que ocurría con los crímenes de corte sentimental, muchas de las agresiones producidas durante festividades no se consumarían finalmente, lo que llevaría a que los procesos fueran finalmente abandonados.

De igual modo, por lo caótico del ambiente en el que se perpetraron los delitos, muchas veces las autoridades se verían imposibilitadas de encontrar responsables, situación por la cual numerosos procesos terminarían archivándose sumariamente. Muestra de ello será el asesinato de Manuel Vilca, apodado «el cojito». Vilca, humilde zapatero, fue apuñalado en la madrugada del 15 de noviembre de 1824 en el Callejón de Guañamarca, hoy cuarta cuadra de la calle Rivero (TOMASIO 2015: 34). Dada la lejanía del lugar en aquellos años, dicha calle se veía frecuentada por gentes de la plebe en busca de diversión. Guañamarca era sede de algunas chicherías, y fue en un par de ellas en las que Vilca, en compañía de amigos y familiares, iría a tomar «medio real de chicha cada uno», y luego «aguardiente, por valor dos pesos». Cuando ya eran las once de la noche y muchos de los acompañantes tomarían diferentes rumbos, el zapatero iría junto con unos recién conocidos a seguir tomando fuera de una tienda cercana donde fueron a comprar pan, queso y más aguardiente. A la mañana siguiente encontrarían el cuerpo de Vilca abandonado en la misma calle de sus aventuras nocturnas, esta vez exánime y con sendas heridas de puñal en el torso⁴⁶.

Finalmente, y como también apunta TAYLOR (1987) en su investigación en el ámbito colonial mexicano, por el hecho que casi la totalidad de estos crímenes se produjeron bajo los efectos del alcohol, casi la totalidad de estas inconductas recibirían penas muy benignas al ser caracterizadas por las autoridades como homicidios por imprudencia⁴⁷. Esto determinaría que los inculpados ya confesos, luego de un prolongado tiempo de carcelería,

⁴⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (16-XII-1824) «Sobre la muerte de Manuel Vilca».

⁴⁷ El jurista español ESCRICHE Y MARTIN (1977 [1874]) señalaba al respecto: «Todavía no se han uniformizado las opiniones de los jurisconsultos ni las decisiones de los legisladores sobre la culpabilidad de los actos cometidos en estado de embriaguez» (p. 433).

serían puestos en libertad o indultados en razón de esta atenuante. Ejemplo de aquello será lo ocurrido la nochebuena de 1824 en la Loma de las cuchillas, ubicada en el valle de Tambo. Luego de celebrar la pascua, dos jornaleros de aquella localidad llamados Toribio Pacheco y Pascual Chalco, se dirigían por la loma sumamente embriagados luego de la fiesta. A causa de su estado, Chalco rodaría por la pendiente. Inmediatamente, Pacheco iría en auxilio de su compañero, pero éste confundido por el alcohol lo apuñalaría causándole la muerte. Menos de un año después Chalco sería comprendido en el indulto concedido «en celebridad del Cumple Años de S.E. Libertador [Simón Bolívar]»⁴⁸.

El hecho que la mayoría de los homicidios cometidos en celebraciones o bajo los efectos del alcohol da cuenta que éstos no eran tenidos como una falta gravísima, lo que los diferenciaría de los crímenes pasionales, que eran dignos de sanciones drásticas y efectivas, por tratarse de trastornos severos del orden social, en tanto claros ataques a los valores de la sociedad cristiana.

c. *Lucro*. Finalmente, del íntegro de homicidios, los cometidos con la finalidad de ocultar o silenciar un robo resultarían también ampliamente significativos en cuanto número e importancia (16%)⁴⁹. Al igual que con los crímenes pasionales, y por contrario de la mayoría de atentados contra la persona que solían producirse en contextos públicos y altamente concurridos (ya que su dinámica se orientaba más a la representación (*performance*) del autoconcepto de los intervinientes o estatus), los homicidios orientados al lucro se cometían en ámbitos estrictamente privados, preferentemente de noche y en lugares apartados. Hechos arquetípicos los constituyen los ataques realizados en los caminos. Situación que se referiría comúnmente en las declaraciones judiciales, donde más de una vez se ha consignado la elocuente expresión: «donde hai gente no muere gente»⁵⁰. De otro lado, cabe resaltar asimismo que, a pesar de lo que comúnmente podría pensarse, la totalidad de estos crímenes

⁴⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (25-XII-1824) «Criminalmente seguido: contra Pasqual Chalco, por la muerte que perpetró, en la persona de Torivio Pacheco, en la Jurisdicción del valle de Tambo, y Lomas de las Cuchilla, y fue remitido, á este Gobierno, por aquel Alcalde». Fjs. 21.

⁴⁹ Algo similar constatará ANDAZABAL (2007) en su investigación en los fondos de la Real Audiencia de Lima (1701-1792).

⁵⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (6-I-/1816) «Don Juan Portugal contra don Luis Cáseres por injurias personales». Fjs. 4.

no se ejecutaron por miembros de bandas u organizaciones criminales, sino que se dieron al amparo de una relación de confianza.

Un último rasgo distintivo de esta modalidad delictiva residirá en el hecho que los victimarios en gran número serán forasteros afincados en la ciudad, o simplemente transeúntes, estableciéndose así una relación entre crimen atroz y desarraigo, tal como ya lo había subrayado STAVIG (1985, 1990) en sus investigaciones. Rara vez pues, un miembro de una comunidad –asimilado a ella no sólo por habitar más o menos permanentemente en una locación, sino por compartir una tradición y una mentalidad colectiva que se expresa en espíritu de cuerpo e intereses imaginados como compartidos– rechaza procurar grandes trastornos a su entorno por un crimen que le acarreará una ganancia económica. Si los vecinos de una comunidad realizan estas conductas, estas serán cometidas más bien por influjo del alcohol, en el ardor de una disputa, o en circunstancias donde la razón se ve alterada, disminuida o empujada a una decisión poco meditada. En suma, se cumple aquel viejo adagio castellano que dice: «El buen jitano respeta su barrio», conforme lo cita TERREROS Y PANDO en su diccionario, comentando además «que denota, que es mayor inhumanidad hacer mal á los mas cercanos y amigos» (1788: 359,1).

Finalmente cabe resaltar que las personas involucradas en este tipo de crímenes provendrían de ámbitos indígenas –de origen forastero, como se ha señalado⁵¹–, lo que se diferencia de espacios costeros como Ica, Lima o Trujillo, donde la mayor comisión de asesinatos por lucro fueron perpetrados por negros cimarrones o libres. Sorprende la baja incidencia de crímenes de estas castas en la región, ya que como se ha mencionado anteriormente, la presencia negra en la ciudad no era nada despreciable, encontrándose además un gran contingente africano en las haciendas de la costa arequipeña, y en Moquegua o Arica.

Al respecto, resultará importante el análisis de tres memorables casos ocurridos en el periodo. El primero acaeció la madrugada del 09 de junio de 1795 en el camino que une los pueblos de Condoroma y Callalli, en el valle del Colca. Por esta ruta que llevaba hacia Cuzco se dirigía el arriero Thomas de Soto, procedente de la península y vecino del Cuzco. Iba en

⁵¹ De igual manera STAVIG (1990).

compañía de Dionisio Cáceres y el hijo menor de edad de éste último. En el trayecto de Soto realizaría actividades comerciales propias de su oficio, extendiendo y cobrando pagarés a diversos residentes del valle. Llevaba además una carga de «especies de Castilla» para el comercio; una serie de prendas empeñadas por sus deudores, tal como joyas y espuelas de plata; y al mismo tiempo una considerable cantidad de «piñas» del mismo metal y dinero en metálico. Al parecer, y tal como lo confesaría el propio Cáceres posteriormente, de Soto y su acompañante entrarían en disputa por la cantidad de dinero que debía recibir el ayudante por sus servicios, lo que empujaría al empleado a asesinarlo propinándole doce puñaladas. Luego del asesinato Cáceres enterraría superficialmente el cadáver a la vera el camino, lo que no pasaría desapercibido por los residentes del lugar quienes, descubriendo el hecho, capturaron al malhechor y lo pusieron a disposición de sus caciques, y luego en manos de funcionarios de la Corona. El hijo de Cáceres escaparía cuando trataba de deshacerse de los bienes robados, y se asilaría en un convento de donde fugaría definitivamente. Dionisio Cáceres, finalmente, fue condenado tres años después al presidio del Callao, lugar al que no lograría llegar por morir en la Real Cárcel de la ciudad antes de ser trasladado⁵².

Un hecho similar, acaecido no muy lejos del asesinato de Soto, ocurrió en la Pampa de Cañaguas, en la ruta que iba hacia el Cuzco. Finalizaba el mes de setiembre del año 1800, y don Antonio Raberto, «encargado del azentista general de azogues de Guancavelica» se dirigía con su carga de azogues a las minas cercanas. Lo acompañaba Margarita Munari, viuda y arriera de Huancavelica, quien fletaría las mulas a Raberto y proporcionaría un grupo de hombres para el servicio del azoguero. La relación entre Raberto y sus acompañantes venía enturbiándose, ya que éste no quería compartir la ganancia producida por la merma y la venta ilegal de los azogues. El detonante se produjo cuando, ya en Arequipa, Raberto prefirió la compañía de una lugareña a la de Munari, quien a decir de sus empleados era la amante del encargado de azogues. Por instigación de Munari y en combinación con el secretario de la víctima, Mariano Salvatierra, se resolvió asesinar a Raberto en la madrugada del día veintiséis, para lo cual tomaron chicha a fin de darse ánimos. El hijo de Margarita Munari llamado José Garabai, y dos de sus peones: Gregorio Mosqueira y Bartolomé Flores

⁵² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (10-VI-1796) «De oficio contra Dionisio Cáceres por la muerte de Thomas de Soto».

consumarían el hecho. Raberto sería arrojado de su cabalgadura a pedradas y jalones cuando ya caía el sol, acuchillándole Mosqueira y rematándole Garibai con el propio sable de la víctima. Los asesinos se apresuraron a enterrar el cuerpo al borde de la ruta, y partieron a Arequipa a dar cuenta de la «misteriosa desaparición de su patrón». Antes esconderían la carga sustraída enterrándola en el piso de un tambo. Sin embargo, la condición de forasteros de todos los criminales levantó sospechas entre los residentes –especialmente los indios lugareños, tal como ocurrió con Dionisio Cáceres años antes– los que encontraron el cuerpo y detuvieron a los delincuentes cuando buscaban escapar. No pasaría mucho tiempo sin que los reos cambiaran sus declaraciones iniciales y comenzaran a delatarse mutuamente. Mosqueira y Flores serían condenados a la pena capital, pero morirían en cárcel antes de ejecutarse su pena. Garabai, por su condición de menor de edad, sería condenado a servir en el Callao, pero escaparía antes de ser trasladado. Por su parte, Margarita Munari sería remitida al obraje de Acobamba en Huancavelica⁵³.

Por último, daremos cuenta de un crimen que captó el interés de la sociedad Arequipeña, ya que sería citado por cronistas como Pereyra y Ruiz en su «La Noticia de Arequipa», de 1816⁵⁴. Se tratará del caso de Leandro Quispe, indio zapatero, doméstico y «sobador de masa», originario de Lampa - Puno, y vecino de la ciudad; y Luisa Solis, también originaria de Puno, prima carnal del anterior y su «amancia»⁵⁵. Luisa Solis trabajaba como doméstica y habitaba en casa de Hermenegilda Villafuerte, anciana soltera que la tenía a su servicio. El 25 de junio de 1808, tal como relataría Solis en su confesión, los amantes llevaron a cabo el crimen:

«A las ocho de la noche, saliendo la Hermenegilda a la ramada a encender una luz, le acometió Leandro con una Arma que no vió la que expone [y que resultó su cuchillo de zapatero], y le dio por la espada varios golpes, mientras que estaba inclinada soplando las brasas para el intento referido: que cayda esta, y sobre ella Leandro tomó este una sogá,

⁵³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (26-IX-1800) «Por el homicidio de don Antonio Raberto, encargado de azeitista general de azogues de Huancavelica».

⁵⁴ La descripción –parcialmente errónea del hecho– es como sigue: «Hace tres años se le dió muerte de Horca en esta Ciudad á una India de 23 años, quien al tiempo que la Ama la habia criado en clase de Hija desde muy chica, dormía, le dio muerte machucándole la cabeza con una piedra» (CARRIÓN ORDÓÑEZ 1983).

⁵⁵ Nombre común con el que se denominaba a la amante, o a mujer con el que se tenía relaciones ilícitas en el período.

aviendo antes repetido los mismos golpes por el pecho por haver caydo de espaldas la herida, y asegurándola delos brazos mandò a la que expone con amenazas sela hechare al cuello, lo que ejecutó amedrantada, en seguida delo quál, y despues de haver luchado algún corto rato la Hermenegilda con Leandro, tomó ene el cabo dela sogá, y lo amarrò contra delpilar de la misma ramada, arrastrando el cuerpo hasta que se unió su cabeza con dicho Pilar hasta que no tubo movimiento»⁵⁶

Luego de descubierto el hecho por la hermana de la occisa, y dando parte a las autoridades, los asesinos fueron encontrados a las afueras de la ciudad rumbo a Puno. Traían con ellos las pertenencias más valiosas de la anciana. El hecho había sido planificado semanas atrás, tal como afirmó la propia victimaria: «Dijo Justo: [el otro nombre con que identificaban a Leandro Quispe] luego que matemos a la patrona nos iremos, a lo cual la confesante se sonrió, extrañando la proposición»⁵⁷. El asesinato de una española a manos de sus sirvientes indios aprovechando la relación de confianza despertaría, como es evidente, profundo horror y temor en los habitantes de la ciudad, y así el crimen no pasó desapercibido. Finalmente, ambos serían condenados a la pena capital, luego que el fiscal destacara la alevosía y la traición efectuada contra su patrona. Quispe moriría en el hospital de la ciudad luego de haber tratado de evadirse de prisión. Peor suerte le esperaba a Solis: sería ahorcada en la Plaza Mayor cuatro años después del asesinato.

3.2. Injurias y heridas. El análisis de las injurias y heridas resulta complejo. Al constituirse como los delitos de mayor ocurrencia (65%), se manifestarán en múltiples formas, siendo cometidos por y en contra de muchos tipos de ciudadanos. Se hace así difícil una caracterización y una tipología. No obstante lo dicho, de primera instancia, podemos diferenciar las conductas según los criterios fijados por la propia doctrina jurídica de la época.

El título nueve de dicha última Partida se consagró a las injurias o deshonras:

⁵⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (25-VI-1808) «De oficio por la muerte de Hermenegilda Villafuerte» Fjs. 13 v y s.

⁵⁷ *Ibídem.* Fjs. 20.

«Ley primera. que cosa es desonrra & quantas maneras son della. Iniuria en latin tanto quiere dezir en romance commo desonrra que es fecha o dicha a otro a tuerto o a despreçiamiento del & commoquier que muchas maneras son de desonrra. pero todas desçienden de dos rayzes. La primera es de palabra. La segunda es de fecho» (Ley 1 Tit. XIX Partida VII).

Luego observamos que, la propia doctrina jurídica, diferenciaba entre las «injurias verbales», y las llamadas «injurias reales», tal como se leen comúnmente en los escritos de querrela del período. A pesar de ello, muchas veces el término «injuria» no va a estar caracterizado en alguna de las dos modalidades nombradas anteriormente (verbales o reales), utilizándose muchas veces el término de manera única. Dicho término, luego, refería a una agresión tanto verbal y física.

Es así que, consideramos que la injuria, más allá del menoscabo físico, refiere sobre todo a una agresión que implica un daño en conjunto a la persona, englobándose como un todo inseparable al honor y al cuerpo. En ese sentido, la más remota alusión al término, el diccionario castellano-latino de NEBRIJA (2005 [1495]: 116,2), interpreta este término como un atentado a la justicia en general, como una agresión a un todo. Luego tenemos que en la sociedad colonial el ataque a la persona era entendida en una doble dimensión indivisa: la física y la de la personalidad, en base a que el pensamiento aristotélico que inspira la concepción social y política del mundo del régimen hispano define al ser humano como la composición de cuerpo (*soma*) y alma (*psyquê*), entendida esta como un todo indisoluble (*sinolo*).

Evidentemente, constituyéndose como una ofensa a la integridad bio-espiritual de la persona, la carga simbólica en la injuria será determinante. Del análisis causal, encontramos cómo el espectro del daño físico se manifiesta en una amplia gama de estragos, pudiéndose encontrar agresiones cuyos resultados podríamos clasificar en la actualidad como levísimos, leves o graves. Sin embargo, según el criterio de la época, todas estas agresiones son catalogadas indistintamente de injurias, no haciéndose ninguna graduación del daño objetivo,

reduciéndose y haciéndose énfasis en el daño subjetivo o ataque en la esfera del honor⁵⁸. Este será pues el parámetro por el cual una conducta puede ser calificada de injuriosa, y no el daño físico en sí. No obstante lo dicho, la mayor o menor gravedad del daño contra el cuerpo de la víctima si será tomado en cuenta para solicitar mayor o menor compensación económica, ya sea por el daño causado (gastos de sanación) o por la incapacidad de haber laborado normalmente, es decir por el lucro cesante generado por su postración. Diferente es el caso de las «heridas»: el hecho reprobado por este delito es la grave afectación de la víctima a nivel físico, existiendo riesgo de perder la vida o por la mutilación o pérdida de un miembro u órgano.

Un hecho que afirma la dimensión simbólica de la injuria (por sobre la valoración del menoscabo a la integridad física), sería el mayor reproche de la conducta cuando esta se ejecuta en contra de una persona de mayor calidad o estatus que el injuriante, incluso cuando el resultado físico de la agresión en sí fuera insignificante. En una sociedad jerárquica como la colonial, la injuria entre desiguales era más censurable que aquella que, habiéndose producido entre iguales, generaba mayor menoscabo físico. Por su gravedad era muchas veces calificada con una denominación diferente, refiriéndola como «faltamientos de respeto» o «perdimientos de respeto». Un caso típico de esto –y que será desarrollado con detalle más adelante– serán las injurias a las justicias o autoridades⁵⁹.

⁵⁸ COBARRUVIAS (1616), en su diccionario, define Injuria como: «el agravio y afrenta q' uno recibe de otro, Latine iniuria, quafi contra ius, & quod non iure fit. L. r. ff. de injurijs» (p. 505). Posteriormente, define a la afrenta como un menoscabo referido al ámbito del honor: «AFRENTA, es el acto que fe comete contra alguno en deshonor fuyo, aunque fea hecho con razon y jufticia como açotar a uno, o facarle a la verguença: y a elle tal dezimos que le han afrentado. Tambien fe recibe afrenta de palabra como si a uno le dixeffen ladron, o otra palabra de las injuriofas» (p. 18).

⁵⁹ Un ejemplo de esto lo tenemos en la querella interpuesta por Fray Francisco Cárdenas O.F.M, quien se ampara en su situación de religioso para denotar la mayor gravedad de la injuria recibida por Pasqual Rodríguez, esclavo de doña Rosa Bustamante, cuando fue a recoger limosna en el valle de Vitor. A pesar que el fraile respondiera severamente en el momento al esclavo: «Sambote, ni tu heres digno de desir Misa» (Fjs. 3), trabándose inmediatamente una disputa verbal; el religioso franciscano solicita la pena por la ofensa recibida de parte del esclavo, por considerarla atroz e insuficiente el insulto proferido contra este: «El delito es el de los mas enormes que exige pronto y exemplar Castigo, lo primero por ser cometido por un esclavo infame de condicion, y lo segundo por haverse perpretado (sic.) en la Persona de un Religioso profeso que viste a toda ora el sagrado abito de Nuestro Padre San Francisco» (Fjs. 1v.). ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (28-VII-1796) «Fray Francisco Cárdenas contra Pasqual Rodríguez, por injurias».

Por otro lado, y a pesar que la distinción entre honor y cuerpo tiene su origen más bien de la modernidad y hunde sus raíces en el pensamiento de Hobbes y los empiristas ingleses (REALE Y ANTISERI 2007); y que en la casuística la división entre los tipos de injuria no era del todo clara por las consideraciones antes mencionadas, creemos que para efectos de la presente investigación se hace necesario también desagregar de las «injurias verbales», de las «reales» y, sobre todo, éstas de las «heridas» para definir las modalidades de agresión de la sociedad arequipeña tardocolonial. Realizamos esta tipología apoyándonos en los propios cuerpos legales y doctrinales realizan al respecto y de los propios escritos judiciales que –aunque de manera no muy clara, como ya antes se ha señalado– terminan diferenciando entre los tipos de agresiones.

Concluimos entonces, que es importante estudiar a las «injurias» tanto como un atentado contra el honor, como en su dimensión de agresión física y manifestación de violencia real, de manera desagregada. En esto nos diferenciamos de CHAMBERS (2003), quien, por los objetivos propios de su investigación⁶⁰ no discriminó en ésta entre los ataques al honor (injurias verbales) y las acometidas físicas (injurias reales), centrándose únicamente en la primera de estas dimensiones de la violencia.

a. El honor. Es abundante la bibliografía sobre el honor en las sociedades mediterráneas –y en especial sobre la hispánica– habiéndose estudiado el tema desde diversos enfoques⁶¹. Sin embargo se hace necesario resaltar algunos elementos basales que nos orientarán en el desarrollo de las páginas siguientes. Como punto capital y aceptado unánimemente por la historiografía, advertimos la centralidad del honor en las sociedades hispánicas del Antiguo Régimen. La vida social, luego, se articulaba en una serie de relaciones desiguales y jerárquicas cuyo criterio ordenador era el honor. Es así que el ataque a este, como se ha venido mencionando, constituía una ofensa tan atroz como el ataque físico. Es por eso que ambas faltas, las reales y las verbales, estaban catalogadas bajo una misma denominación de injurias

⁶⁰ Ya que su estudio estaba destinado a aproximarse a conceptos tales como «estatus» y «ciudadanía» en la Arequipa del periodo.

⁶¹ Dentro de la diversa y abundante bibliografía sobre el honor en las sociedades hispánicas y mediterráneas destacamos a MARAVALL 2007; y la citada en CHAMBERS 2003, TWINAM 2009 y GRANDE PASCUAL 2016.

comúnmente llamadas «personales». En otras palabras, el ataque al honor constituía un riesgo de «muerte civil» que era tan grave como la muerte física.

Como muestra de ello, en los documentos judiciales se ha podido encontrar casos de colegas que se ofenden recíprocamente aludiendo a la inhabilidad en su empleo u otras características propias de su profesión, algo que los injuriados resentían con gravedad. Esta situación se debía al grave menoscabo que dicha injuria producía en el agredido, ya que dicho ultraje constituía un ataque dirigido a cuestionar la habilidad y pericia del artesano afrentado, lo que afectaría por ende también al ingreso económico y posición social del mismo, aspecto por otro lado muy supeditado a la calidad de su labor. Es por eso que dichas injurias fueron tomadas muy a pecho por las partes ofendidas, quienes no satisfechas con enfrentarse físicamente con los agresores para salvar su honor, promovieron causas ante el intendente buscando la rehabilitación de su nombre y el castigo para el «matador de honras».

Como ejemplos al respecto citamos la causa seguida entre el maestro herrero Eugenio Escalera contra su oficial Pedro Cornejo. Ambos mantendrían una disputa verbal y física al cuestionarse la aptitud del maestro en la materia, asunto que quedaría patente en los mismos insultos que proferiría Cornejo mientras le daba de golpes a su superior: «aprende herrero a dar garrotaso»⁶². Asimismo, más de una década encontramos un pleito por un altercado similar. El caso atañería a dos sastres, el oficial Ignacio Benavides y el maestro Mariano Goyzueta. Este último, intimado por el jefe de la Maestranza del ejército para la entrega de uniformes, se vio precisado a echar mano a otros dos oficiales, por lo cual intimó al trabajo a Ignacio Molina al trabajo. Molina no aceptó el cargo por tanto tenía otra obligación contraída con el Ejército debiendo confeccionar las casacas del Regimiento de Batidores. El apremio de los líderes militares y la negativa del oficial de sastrería producirían una disputa verbal en la que la honorabilidad y la notoriedad del trabajo de Goyzueta quedarían resentidas. Por tanto interpondría la querella para recuperar su fama en los siguientes términos:

⁶² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (11-VIII-1811) «El maestro Herrero Eugenio Escalera contra su oficial Pedro Cornejo, por injurias». Fjs. 1v.

«yo soy un maestro público de sastrería, en que varias personas de primero rango de esta Ciudad depositan la confianza de sus obras en mi persona, sin reselar famas de mi manejo y conducta; y si yo dejo pasar la exprecion de aquel ml hombre ya mi reputación cae por tierra, y mi honra vendría a quedar en descubierto para que nadie medé una sola obra fuera del concepto público en que seré reputado [...] Viendo que este no se cansa de insultarme, y que a todos en general repite igual exprecion de donde me sobreviene deshonor, in-famia a mi persona, y carácter pundonoroso con que procedo, y soy conocido en la ciudad»⁶³.

Enfrentamientos similares ocurrirían entre los comerciantes, el proceso entre Rafael Contreras y Agustín Herrera podría dar luces de aquello. Ambos comerciantes se enfrentaron a golpes por haber proferido lo que Contreras llamaba «rasones que denigran mi aredituada onrades», determinándose así el ultraje al honor como una afrenta mayor que cualquier acometida física, ya que esta ponía en entredicho ese capital invaluable para un comerciante que era su fama de probidad en los negocios⁶⁴. De igual forma, en esa línea también podríamos mencionar la causa que promovió el escribano Pedro Felipe Salazar contra su colega, el escribano Vicente Vílchez por haberle imputado una falsedad en una escritura, asunto que «se le ha vociferado en la Ciudad»⁶⁵, entre otros⁶⁶.

El honor era, pues, el presupuesto básico de la sociabilidad y en base a él se ordenaba las relaciones humanas en la ciudad. Mediante él se asignaban los roles y se «leían» las jerarquías y los protocolos del trato cotidiano. Luego, el ataque al honor construirá no sólo un menoscabo a quien recibe la ofensa, sino una tentativa de alteración social. Por lo cual, la autoridad española buscará sancionar a quien cuestione la estructura jerárquica social.

⁶³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (20-VIII-1824) «Ignacio Benavides contra Mariano Goyzueta por injurias verbales». Fjs. 1 y v.

⁶⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (29-I-1792) «Rafael Contreras contra Agustín Herrera, por Injurias, reales, verbales y personales». Fjs. 1v.

⁶⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (21-I-1795) «Pedro Felipe Salazar contra Vicente Vílchez por calumnia». Fjs. 1v.

⁶⁶ Algo similar plantea MORAL RONCAL (1996) en su trabajo sobre la península en el mismo periodo «En nuestra opinión, a partir de la apertura de demandas judiciales, los agremiados buscaron también el reconocimiento de la honradez de sus oficios por parte de las autoridades» (p. 382). También GARRIOCH (1987) en París del dieciocho: «A journey-man baker, insulted in the street by the wife of a nearby innkeeper, said that her calumnies could prevent him for finding work in future because of impression they might make on people who didn't know him well [...] he claim, to make him lose most of his clients» (p. 113).

La importancia de la honra palpita en las declaraciones de los querellantes. La mera insinuación contra el honor era algo serio para un vecino, y digno de ser desagraviado. Algo así ocurriría con María Núñez, de profesión costurera, cuando Juana Bernal expresó de ella: «Dios me libre de Jente soldadesca»⁶⁷ en una alusión muy velada sobre cierto consocio que mantendría Núñez con un soldado. Esta mera expresión daría lugar a una querella, puesto que para la agraviada de su deshonor podría «resultar el grabe perjuicio ó de que me mate bolviendo mi marido, ó cuando menos me abandone con un Diborcio perpetuo, si llegando a su noticia las expresiones ofencibas, no llegase al mismo tiempo la justificación demi inosencia»⁶⁸.

a.1. La publicidad de la injuria. Ya tratando otro aspecto, se hace menester comentar otro punto: la publicidad de la injuria. Consideramos que en una sociedad de roles y jerárquica, las relaciones y hasta la dinámica de construcción de los eventos está siempre marcada por posiciones. En estos destaca la importancia de un personaje, a propósito de su centralidad en la «escena» donde se desarrolla un acto público. La ubicación principal vendrá siempre acompañada de un contenido de jerarquía que es fácilmente legible por los que participan en él, ya que este saber proviene y es reproducido por la sociedad. Luego, la «centralidad» de una persona es la que implica mayor número de relaciones de reconocimiento social (CASTILLO GUZMÁN 2015: 84). El despliegue de la violencia mediante la puesta en acto de la injuria (e incluso su posterior proceso) provocará el efecto de la visibilización y mayor posicionamiento del injuriante –a costa del injuriado–, lográndose así el efecto de «centralización» en su esfera social inmediata, como es el vecindario o la comunidad.

Así pues, si los injuriantes obtenían mayor destaque social en mérito a sus desafíos e escarnios, las víctimas advertían el mayor reproche que suponía la injuria contra ellos cometida toda vez que esta se ejecutaba en un espacio especialmente público. Son numerosas las alusiones a la mayor afrenta recibida –y, por lo tanto, mayor culpabilidad del autor– en relación al lugar y a la mayor concurrencia con que se perpetró la humillación, como son las plazas y calles

⁶⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (07-II-1787) «María Núñez contra Juana Bernal por injurias verbales». Fjs. 2v.

⁶⁸ *Ibidem*. Fjs. 1v.

concurridas y hasta los templos⁶⁹. Como ejemplo de ello citamos la declaración de Manuel Caseres, en la causa que promovió contra Manuel de León por las injurias que éste le infiera en la plaza principal del pueblo de Caylloma:

«Siendo una de sus menores expreciones imputarme latrocinio, y tratarme publicamente de Ladron en la Plasa de esta Ciudad y en un lugar de tanta concurrencia como es el Portal de los Jusgados [...afectándome así] el honor, que es mas estimable en militares graduaciones, como lo soy Yo, pues sostengo el empleo de Capitan, y en semejante caso debo mirar con mas esmero mi buena reputación»⁷⁰

De igual manera Manuel Mogrobejo se quejaría de la ofensa que le inferiría Josef de Tapia en un altercado por la posesión de un solar en Arequipa: «ha sobrepasado al crimonoso hecho de erirme en la cabeza con una piedra, después de llenarme de improperios en presencia de gran numero de gente, y con detrimento de mi buen nombre y ajustadas operaciones»⁷¹. En su querella dejará patente como su honor fue más vulnerado en virtud al número de personas que fueron testigos del hecho, y del espacio público –la calle– donde se cometió el escarnio. Asunto que se agravaría aún más porque –y tal como mencionaremos en detalle más adelante– en el antiguo régimen las fronteras de lo público y lo privado no estaban bien definidas, y que sería acogido por la justicia del intendente, dictando muchas veces prisión por el hecho que una ofensa se había producido en un espacio público⁷².

Asimismo, en la misma línea de la publicidad –es decir de la escenificación de la injuria en espacios públicos– encontramos que la reiteración era otro factor clave. Son numerosos los casos en los que las víctimas declaran haber sido injuriadas por «más de una vez» o «repetidas veces», haciéndose así énfasis en la comunidad del contraste entre el honor propio y la vileza ajena.

⁶⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85 (08-VIII-1786) «Juan Chrisostomo Anco, Alcalde de Cayma. contra Domingo Calla, Tomás Quinto y otros por perdimiento de respeto».

⁷⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (19-IV-1790) «Manuel Caseres contra Manuel de León, Minero y Azoguero de Caylloma por injurias». Fjs. 1.

⁷¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (19--X-1787) «Manuel Mogrobejo contra Josef y Mariano de Tapia por injurias». Fjs. 1.

⁷² «...se le mandó apresar por ser público el hecho». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (15-V-1803) «Ysabel Portugal y Arenas contra Rudesindo Megia». Fjs. 9v. Semejantes conclusiones refiere GRANDE PASCUAL (2016) en el ámbito vizcaíno en la misma época.

a.2. La injuria como mecanismo de ascenso social. En otro ámbito, debemos comentar cómo las injurias y las causas criminales constituirían notables mecanismo de reposicionamiento social de un individuo, buscando elevar o reforzar su estatus mediante una representación social de su honor que implicaba la comparación –y por ende la denigración– de la condición de un «otro». El contraste será pues el instrumento más simple, pero también el más arriesgado, para tratar de escalar socialmente; los medios más habituales y más seguros de ascenso social significarán esfuerzos extraordinarios que estarán vedados a gran parte de la población: el patrimonio económico, el mérito militar, un matrimonio provechoso. Es por eso que las injurias en su mayoría se presentan como algo muy típico de la «ínfima plebe», como llamaban las autoridades en sus documentos oficiales al estrato que más echaba mano de ese mecanismo. Hablamos pues de un uso consciente y generalizado por parte de aquella plebe con suficientes recursos –artesanos, chicheras, pequeños comerciantes y minifundistas– para promover causas judiciales en los que discutirán su estatus frente a sus pares, para así paulatinamente ganar relevancia social entre la masa indiferenciada en la que se encontraban. Estos serán los actores más comunes de las injurias que, mediante la «representación» de su honor en las disputas públicas y la «re-escenificación» del mismo en las causas judiciales, buscarán el reconocimiento social que no pueden obtener de otros modos, promoviendo procesos que casi en su totalidad serán sumariamente relegados –y en muchos casos conciliados– por la autoridad, a pesar de las insistencia de las partes interesadas, con obstinación que rayaba en el desacato.

Como ejemplo de un intento de cuestionamiento social mediante el uso de injurias, y sobre el pronunciamiento del intendente en salvaguarda de la estabilidad de la jerarquía, podemos citar la disputa que propició el sargento retirado José María Beltrán contra Domingo Arias, teniente alcalde de Yanahuara, a quien el sargento cuestionaba sus cualidades para ostentar el cargo y sus servicios a la Corona, comparándolos con sus propios méritos en el campo de batalla con el ánimo de invisibilizar su estatus. Entre las injurias que Beltrán proferiría podemos citar aquella que decía «que á otros más altos que él los había sobado, y que [Beltrán] hera un Chuchón y Maricón [...] que se cagaba en todos, que hera Sargento de Campaña y tenía mas

servicios que dn. Domingo [...] les dijo hiba dentrase al Quartel con el fin solo de acabarlos a sablazos»⁷³. Se trataba, pues, además de un intento de dejar en claro la supremacía social el injuriante sobre el injuriado, una velada crítica sobre el acceso a las dignidades y cargos, no en razón a sus méritos, sino mediante otros procedimientos subalternos. Sin embargo, el intendente en su fallo –siempre conciliador– señalaría: «que en lo futuro [Beltrán] arregle sus procedimientos al manejo respetuoso que se debe presentar a las personas constituidas en las consideraciones políticas y militares que se han grangeado por su mérito, so pena de ser escarmentado»⁷⁴.

Las injurias muchas veces se muestran como protestas contra las convenciones y niveles jerárquicos determinados en un momento concreto, y en alguna medida constituyen esfuerzos para cuestionarlos para así avanzar en su escala. Plebeyos como Ygnacio Severiche, maestro carpintero, aludirán indirectamente a su propio honor al cuestionar el de alguien superior en estatus en razón de una agresión injustificada, negando así veladamente la alcurnia por mera razón de cuna. En el pleito que promoviera, Severiche, que luego de ser agredido verbal y físicamente por don José Poso a causa de la entrega de una cajita de relojes, manifestó «con altanería y orgullo –según declaración de su adversario– que si estos eran los hombres de bien, y que si no estuviera en una casa le enseñaría a tratar apatadas» en un claro cuestionamiento al estatus de su agresor, por no haberse comportado como reclamaba un hombre de condición noble⁷⁵.

a.3. El honor como presupuesto procesal. A pesar que –tal como mencionamos en el párrafo anterior– el proceso judicial era un mecanismo de re-significación social, advertimos cómo el mismo aparato judicial estaba signado por los códigos del honor. Afirmamos esto en virtud a dos consideraciones: los antecedentes de las partes involucradas servían como prueba

⁷³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (18-III-1822) «Heridas contra Domingo Arias por José María Beltrán». Fjs. 3v.

⁷⁴ *Ibidem*. Fjs. 5v. Algo similar sucederá en la causa promovida por el alcalde de Chiguata contra Valentín Moscoso y otros implicados. En dicha ocasión, y frente a una reprensión del alcalde que terminaría en un enfrentamiento verbal, Valentín y los demás vecinos involucrados llegarían a «bociferar que heran soldados que tenían Boletos desus Capitanes, [mencionando luego el alcalde que] por esto no hubo Hombre que ovedeciese mis Ordenes». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (17-XI-1799) «Criminales promobidos por dn. Pedro José Rivera y Prado, Alcalde Ordinario de Chiguata contra Valentin Moscoso, Diego, y Carlos Ramos, Vecinos de aquel pueblo». Fjs. 1v.

⁷⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (22-II-1820) «Ygnacio Severiche contra Dn José Poso». Fjs. 9v.

indiscutible para apoyar la veracidad de sus alegatos; y por otro, estaban más penadas las injurias proferidas por un subalterno en contra de su superior social (por tratarse de un atentado contra los roles y jerarquías que soportaban la coexistencia social), tratándose así de una justicia entre desiguales como ya lo señalara la ley 21. tit. 9 de la séptima partida: «porque las personas & los fechos dellas no son contados por yguales».

Como ejemplo de lo primero, citamos uno de los tres testimonios de parte que serían presentados por don Josef Alvares en su querella contra Calisto Lazo por haberle imputado públicamente un robo. En él, un testigo refiere que «le consta que Josef Alvares es un hombre de Vien, conosido por tal en toda la Ciudad [...] que no es capas de cometer ningún robo porque es hombre trabajador, que no ha dado mala nota de su persona»⁷⁶, dotando a la palabra del querellante la legitimidad necesaria para llevar a cabo la causa.

Pero no sólo los testimonios estaban destinados a probar la buena fama de los querellantes, muchas veces estos se ofrecían para evidenciar los malos antecedentes de los querellados, evidenciando así su «ánimo escandaloso y poco temor de Dios», como normalmente se lee en los escritos. Ejemplo de esto lo encontramos en el proceso seguido por Juana Linares contra Josefa Corso y sus hijos, en el contexto de una riña en el patio de una casa de vecindad entre dos niños. Las declaraciones de los vecinos testigos presentados por Linares apuntarán al mal comportamiento de la familia a quien acusaban de alborotadora y pendenciera⁷⁷. Algo similar ocurriría en la causa seguida por Vicente Mantilla contra Tomás Ortiz⁷⁸.

Como ejemplo de lo segundo –las desiguales consideraciones de la justicia entre individuos de diferente alcurnia– podemos mencionar lo declarado por el presbítero licenciado don Juan José Zegarra, quien en la causa que siguió contra Juan de Dios Bolaños por «palabras injuriosas por escrito» señalaría, para descalificar las declaraciones de su rival en la causa aludiendo a su linaje y al oficio de sus antepasados:

⁷⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (21-VII-1796) «Dn Miguel Medina y Dn José Álvarez contra Calisto Lazo por Calumnia». Fjs. 3v.

⁷⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (11-VI-1792) «Juana Linares contra María Manuel y Josefa Corso por injurias».

⁷⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (19-XII-1789) «Don Vicente Mantilla contra Tomás Ortiz por injurias».

«...bastaría también [...] palpar lo infame de su origen, así por naturaleza, como por el ejercicio de él y sus autores [antepasados] han tenido [...] No ha caído en el olvido que el primer oficio que tuvieron fue tratar con delincuentes de cárcel, sugetándose a buscar su subsistencia en aprehemiarse fascinerosos cuyo entretenimiento jamás pudo transmitirle buena educación»⁷⁹

En ese sentido, elocuente será la afirmación de Manuel Salazar en el pleito que siguió contra Nicolás Quintanilla: «como el citado Nicolás es un sujeto de vil calidad, sin honor ni conducta se hace reo de cualquier crimen»⁸⁰.

La necesidad de hacer respetar las calidades y méritos sería, por otro lado, será un pedido reiterativo en las causas; tal como lo manifestaría el cirujano latino Agustín Rodríguez en su querrela contra Dominga Chumes por los ultrajes que ésta vertiera en contra de su hija. En ella el cirujano lamentaría que Chumes «no respeta fueros, ni distingue calidades, insolentándose con gente honrada lo mismo que con la infima plebe»⁸¹.

Adicionalmente, no sólo los estratos superiores aludirán a esta situación desigual entre las partes involucradas en un proceso judicial. Personajes de la plebe procurarán alcanzar justicia en contra de vecinos de mayor categoría sin dejar de mencionar su posición subalterna, apoyándose muchas veces en su minusvalía social para pretender un especial amparo de parte de las autoridades, exigiendo luego que «se sepa respetar a los hombres de cualquier clase y aun al más infimo»; tal como se lee en el escrito presentado por el carpintero Ygnacio Severiche en la causa que éste siguió a don José Poso, ya mencionado⁸².

Sin embargo, a pesar que los procesos judiciales se llevarían a cabo teniendo en cuenta la ascendencia y honor de los involucrados, estos –paradójicamente– servirían también como un

⁷⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (26-V-1815) «El presbítero licenciado don Juan José Zegarra contra don Juan de Dios Bolaños por palabras injuriosas por escrito». Fjs. 2.

⁸⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (8-I-1793) «Manuel Salazar contra Nicolás Quintanilla por injurias de palabra». Fjs. 1v.

⁸¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (21-IV-1817) «Dn. Agustín Rodríguez Cirujano Latino, contra Da. Dominga Chumes». Fjs. 1.

⁸² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (22-II-1820) «Ygnacio Severiche contra Dn José Poso». Fjs. 1v.

medio cuestionador de las jerarquías sociales, ya que por medio de una disposición judicial como un auto o sentencia se podía dejar sentado el «mayor valer» de un ciudadano, obligándose a la parte vencida su reconocimiento. Aunque, como ya señalamos, en la práctica la mayoría de los fallos y resoluciones de los intendentes se orientaron a mantener el *statu quo*, tratando de abstenerse de pronunciarse sobre las diferencias entre ciudadanos y su pretensión de reivindicación –leámoslo como reconocimiento– de su estatus, en algunos casos la decisión judicial redundó en una abierta declaración de la mayor categoría de un individuo.

b. Injurias verbales.- Ya abordando el análisis de los diferentes tipos de agresiones en el periodo, iniciaremos con el estudio de las llamadas «injurias verbales». Éstas eran descritas por la Séptima Partida como las expresiones dirigidas a socavar el buen nombre de un hombre (honor), mediante las «bozes ante muchos faziendo escarnio del. o poniendole algund nonbre malo. o diziendo en pos del muchas palabras atales onde se touiesse el otro por desonrrado» (Ley 1); o bien mediante el uso de libelos, canticas o rimas (Ley 3); o mediante calumnias (Ley 2).

En el ámbito de nuestra investigación se ha encontrado que el 12% de las agresiones entre particulares corresponderían a injurias verbales propiamente dichas, es decir altercados entre una o dos personas que no llegaron a la confrontación física. Asimismo, el 6% de las agresiones corresponderían a calumnias⁸³, es decir a ataques contra el honor que se producirían ante terceras personas sin la presencia del agraviado. Todo esto haría un total de 18% de ataques estrictamente verbales sobre el global de injurias entre particulares (véase cuadro 3). En tanto las agresiones verbales producidas por o en contra de las autoridades, tenemos que el 7% de los «faltamientos de respeto» a la autoridad se produjeron verbalmente, mientras que el 2% del total de atropellamientos y excesos cometidos por las autoridades contra los particulares se dieron únicamente de forma verbal.

⁸³ Llamadas indistintamente en las causas con el nombre de «difamaciones». Solamente una de estas calumnias se cometería mediante por medio escrito. ARAr/Intendencia/Criminal (26-V-1815) Leg. 90. «El presbítero lic. don Juan José Zegarra contra don Juan de Dios Bolaños por palabras injuriosas por escrito».

El tenor de las agresiones encontradas es de lo más variado. Es destacable el ingenio y desvergüenza con que los arequipeños del siglo XVIII proferirán insultos de grueso calibre. Nosotros obviaremos dichas expresiones que, tal y como se leerá en numerosas declaraciones, «el pudor ha de poner en silencio»⁸⁴. Sin embargo, hemos de destacar algunas de los dicterios más comunes.

b.1. Ofensas verbales contra mujeres. En el caso de las ofensas contra las mujeres, las que más destacan son las que se refieren a la conducta sexual. La expresión «puta» –entendida esta como mujer licenciosa– es la más común de las injurias verbales dirigidas al sexo femenino. Éste término como tal, o sus derivaciones e hipérboles, acompañará por lo general a todas las afrentas. Otras voces, también utilizadas, y con igual connotación despectiva sobre la moral sexual de una mujer serán: «indigna», «cochina», «ramera», «perra», «callejera», «fregona», «morcilla», «choriza», «descasadora», «alcahuetona» o «fraylera». Asimismo, muchas veces será usado como insulto el término «chichera» –mujer que atiende una picantería o chichería– acepción que tendrá una fuerte carga de liviandad sexual y de costumbres.

En segundo término, los ultrajes de índole racial serán también muy frecuentes. Expresiones como «india», «chola», «serrana», «samba», «negra», «china» estarán siempre acompañadas de un fuerte carácter despectivo, y algunas veces de términos como «insolente», «alzada», «advenediza», «malcriada», «osada» o «afeitada». Finalmente y en menor medida se consignan en autos agravios como «ladrona», «canalla» o «facinerosa», que aluden a la honradez de la persona; «borracha», cuestionando su comportamiento social; y vocablos que buscan zaherir en base de defectos o condiciones físicas, como «vieja» o «fiera»⁸⁵, o por una profesión de extracción plebeya como «pallapadora»⁸⁶.

⁸⁴ ARAr/Intendencia/Criminal (20-XII-1815) Leg. 90. «Doña Micaela Begazo, muger legítima de Pedro Pacheco contra María de tal por injurias» fjs. 1v.

⁸⁵ Picada de viruelas.

⁸⁶ Término de origen quechua que alude a una peona del campo. ARAr/Intendencia/Criminal. (12-VII-1815). Leg. 90. «Doña Josefa Ramires contra doña Narcisca Postigo, por injurias». fjs. 1v.

b.2. Injurias verbales contra varones. Tratándose de los varones, el insulto más frecuente será el de «ladrón», en todas sus posibles variantes, y otras locuciones afines como «bribón», «canalla», «usurpador», «pícaro», «facineroso». Esta, al parecer, era la forma más generalizada de injuria, ya que COBARRUVIAS (1616) la menciona como un ejemplo en su diccionario: «AFRENTA [...] También fe recibe afrenta de palabra, como fi a uno le dixeffen ladron, o otra palabra de las injuriofas» (p. 18.). De igual forma, en segundo término, y como también ocurre con las mujeres, el agravio más común será el racial o étnico, asociado comúnmente al anterior. Así pues, «zambo» será el insulto más común de este tipo, utilizándose también «negro», «cholo» e «indio» con una fuerte carga ofensiva. En menor grado se echaron mano de agravios relativos a la sexualidad como «maricón», «chivato» o «cornudo», u otros de diferente índole como «borracho» o «viejo»⁸⁷.

b.3. Agresiones por origen étnico. En otro término, señalamos que los insultos raciales se proferían indistintamente de la casta a la que perteneciera el agresor. Hay registro de indios que insultan a otros usando términos como «cholo» e «indio», como le ocurriría a Juana, hija de Petronila Bera, cuando atendía en el establecimiento de su madre:

«Estando mi hija Juana despachando la bendeja⁸⁸ que mantengo para ayudar mi subsistencia [...] le contesto un indio cuya persona ignora, con estas palabras = Toma Chola puta esta llabe: abre , y saca de ay tu baso. Como fuese regular que mi hija por onesta, y por virgen, repusiera la reprenición a palabra tan insolentes é inmoderadas, esasperado el Yndio, con las que le contestó se lleo a dar guantadas ami hija lo que puso en execucion hasta los términos de haver dado con ella en tierra»⁸⁹

En casi la totalidad de disputas, ambas partes enfrentadas hacían uso de afrentas de contenido étnico, haciendo hincapié en alguna característica física que permitiera asociar a una persona a un grupo social subalterno dentro de las ambigüedades de la raza. De esta manera, Juan de Mata, comerciante arequipeño y su vecina doña Lorenza Escudero, ambos clasificados ambas

⁸⁷ STAVIG (1988), en el ámbito rural cuzqueño, GRANDE PASCUAL (2016) en Vizcaya, BERRAONDO (2012) en Navarra y GARRIOCH (1987) en París, llegan a similares conclusiones sobre la tipificación de ataques masculinos y femeninos en la misma época.

⁸⁸ Vendeja: f. Venta pública y común como en feria.

⁸⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (15-IV-1816) «Da. Petronila Bera contra Manuela, María e Ignacia Santayana por injurias». fjs. 1v.

en el proceso como españoles de origen, se ofenden haciendo alusión a cuestiones étnicas y a los estereotipos de incivilidad y servidumbre⁹⁰ que implicaban: «Salió doña Lorenza y le dijo ‘Perro negro como habías de tener manos para tus amos, y a lo que contesté [Juan de Mata] ¡Qué llama negro la india! Replicó entonces que a los negros se los sacaba en un aparejo, y contesté que a las indias en una llama con un costal y sogas»⁹¹, haciéndose mención a los paseos hechos por los reos antes de su sentencia, en una clara alusión al carácter «delincuencial» de esos dos orígenes.

Estando generalizado el uso de las «ofensas raciales» indistintamente del estrato social o casta de quien las proferiera o recibiera, y siendo incluso que los propios miembros de una etnia utilizaban como epítetos despectivos los que aludían a su propio origen, nos inclinamos a señalar que los insultos étnicos no deben ser interpretados como agravios racistas; algo que recién ocurrirá desde el siglo XIX gracias al paradigma positivista⁹². Asumimos, deberían interpretarse estos dicterios como alusiones al estándar de civilidad, es decir de un «ciudadano honrado»⁹³. El ofender a una persona haciendo mención a la pertenencia al segmento indígena

⁹⁰ Al respecto, encontramos ofensas como las del tipo «sambo, para tu amo tienes mano», que hacen alusión a la condición servil de estos sectores, algo usualmente utilizado como medio de ofensa. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (17-II-1803) «José Manuel y Pedro Valdivia contra Nicolás Cuadros por injurias reales y verbales». fjs. 6.

⁹¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (01-I-1819) «Don Juan de Mata contra doña Lorenza Escudero por injurias verbales». fjs. 1v.

⁹² En el Perú, representantes del positivismo científico y rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como Javier Prado y Alejandro Deustua, serían los primeros defensores del racismo como explicación de existencia de males personales o sociales, aludiendo a la existencia de «razas inferiores»: Para Deustua «el Perú debe su desgracia a la raza indígena», y para Prado «las razas inferiores [han ejercitado una influencia...] perniciosas en el Perú». También figuras precursoras de la izquierda como Manuel Gonzáles Prada y Luis E. Valcárcel pueden ser considerados como iniciadores del racismo en el Perú. El primero de ellos, haría gala de su retórica racista en su *Tonel de Diógenes*, prorrumpiendo sobre todo en sus escritos contra los afroperuanos: «Españolas y latinoamericanas no tienen esa higiene o limpieza amorosa de las inglesas. Hoy mismo, no faltan mujeres blancas, rubias y hermosas enamoradas de zambos verdaderamente infectos» (en SÁNCHEZ MARTÍNEZ 2011: 260).

⁹³ Los epítetos «indio» o «negro» no serían de ningún modo raciales, sino que corresponderían a conceptos culturales. Véase: CHAMBERS 2003: 96-104. Hacemos hincapié en esto, remarcando la inexistencia de patrones «raciales» para agrupar a un individuo a una corporación o asociarlo a una determinada situación jurídica. Muchos son los casos en los que se evidencia esto, por lo que sólo hacemos mención a uno: En el proceso por el asesinato de Antonio Raberto a manos de sus acompañantes a la salida de Arequipa, la autoridad judicial quedó contrariada cuando, al haber inscrito en la sumaria a José Garabai como español dada su tez blanca y color de pelo, al tomársele su confesión se descubriría que era quechua hablante y que era necesaria la presencia de un intérprete, por lo que el escribano dejaría constancia del «cambio de etnia» salvando su falta manifestando la imposibilidad de haber discernido su procedencia basado en sus rasgos físicos. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (26-IX-1800). «Por el homicidio de don Antonio Raberto, encargado de azentista general de azogues de Huancavelica». Algo similar menciona STAVIG (1990): «Juan de Bueño, el español, no encajaría por su adscripción racial o étnica [...] necesitó un intérprete para rendir su declaración. No era el único español en

o africano, tenía que ver con el estado de «minoría de edad» o de «capacidad relativa» de los indios y negros frente a la civilidad o policía⁹⁴, y por lo tanto cualquier alusión a estos grupos deberá ser entendida como un comportamiento aún no adecuado al considerado aceptable en el imaginario social. Hablamos, pues, de sectores que –según como se consideraba en ese entonces– estaban en vías de integración a una sociedad plenamente «política»⁹⁵.

Sobre el particular ADORNO (1988, en SÁNCHEZ MARTÍNEZ 2011:257), siguiendo a Anthony Pagden, reflexiona sobre la perspectiva que se tenía del indígena americano en el orbe hispano, según el paradigma cultural vigente: la «segunda escolástica». Según la teoría de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca no se consideraba

«al natural americano como un ser definitivamente inferior sino, al contrario, como poseedor de todas las facultades racionales que existían en potencia sin estar plenamente desarrolladas [...] lo que faltaba era la instrucción y la educación para que se realizaran sus potencialidades racionales [...] Esta hipótesis de Vitoria sobre el desarrollo evolutivo e histórico de mundo amerindio fue aceptada por muchos pensadores».

Este criterio diferenciador entre «perfección ontológica» y «perfección histórica» –deudora de los conceptos aristotélicos de acto y potencia– son los que sustentarán la visión que se tenía del indio como ser digno en sí mismo, pero muchas veces cultor de costumbres lejanas al ideal ciudadano; situación que por otro lado debía perfeccionarse mediante la evangelización y la educación. Sin embargo, la modernidad, que abandona deliberadamente la metafísica clásica, se remite únicamente a consideraciones empíricas que reducen el fenómeno humano a lo cuantificable y tecnológico, es la que consagra la idea de «razas inferiores», matriz del racismo. Ya uno de los padres del empirismo, Francis Bacon, afirmando que «el hombre es Dios para el hombre por medio de las artes»⁹⁶, señaló asimismo como la tecnología –el arte– es la que nos hace ver «la gran diferencia que media entre la vida del hombre de un país, el más culto de Europa, y la del de una región la más salvaje y bárbara de la Nueva India»

Quispicnchis y en Canas y Canchis que no podía hablar en castellano. Se ha encontrado varios de estos casos» (p. 99).

⁹⁴ Véase SÁNCHEZ-CONCHA 2013.

⁹⁵ Sobre «racismo colonial» véase SÁNCHEZ MARTÍNEZ 2011.

⁹⁶ *Homo deus homine ex machina*. (BACON 2003: 174).

(BACON 2003:174); un criterio basal para la consecución del paradigma racista, que basado en criterios pseudocientíficos plantea la «superioridad de una raza y la imperiosa necesidad de desplazar a otra, degenerada o extranjera» (SÁNCHEZ MARTÍNEZ 2011: 260).

Luego de estas consideraciones, podemos interpretar que las agresiones verbales de índole étnica aludían a conductas estereotipadas de los sectores indígenas y africanos ajenas al ámbito de la «policía», es decir aquellas que no estaban en consonancia con el ideal de la «vida política» y que debían ser reducidas a su plena civilidad. Así pues, ya en referencia de aquellos estereotipos, señalamos que los africanos eran vistos como licenciosos sexuales y agresivos⁹⁷, y a los indígenas «se les atribuía los vicios de la ociosidad, la ignorancia y ebriedad» (CHAMBERS 2003: 101). Por ejemplo, Antonio de Pereyra y Ruiz, contemporáneo a la época, afirmará sobre los indios en su crónica titulada «La Noticia de Arequipa»:

«Quanto mas bien se le hace [al indio] vive mas desconfiado, mas descontento, y aborrece mas al bienhechor [...] aman la ociosidad, huyen de todo trabajo [...] A dos cosas se reduce el modo de solemnizar sus grandes fiestas: la una es echar mucha polvora en Cohetes, para lo cūal gastan con gusto algun real: la otra es la borrachera, que es la que pone fin á todos sus placeres. Pero no se vé ninguno que confiese ni comulgue en tales días, ni lo hacen mas que cuando para el cumplimiento de la Iglesia son llevados a la fuerza [...] se ven llenos los Portales y calles de estos hombres desnudos, durmiendo toda la tarde» (CARRIÓN ORDÓÑEZ 1983: 402 y s.)⁹⁸.

⁹⁷ ALDAZABAL (2007) señala que las negras libres eran tenidas comúnmente como una fuente de conflictos intrafamiliares, ya que solían liarse y convivir con hombres casados (p. 65), algo que se ha confirmado en menor medida en el presente trabajo. Por otro lado, la misma autora afirma que la casta más involucrada en la comisión de delitos –y especialmente atroces como el homicidio– era la africana (p. 43 y s.), algo similar a lo encontrado en Arequipa, ya que los negros y castas aparecen en mayor proporción como victimarios que como víctimas. Sin embargo debemos relativizar estos datos señalando que el acceso a la justicia de estos sectores marginales era reducido, y por lo tanto es posible que el número de víctimas de origen africano era muy grande, pero invisibilizado en los documentos oficiales. Según CHAMBERS (2003) «Se creía ampliamente que las personas de ascendencia africana –sobre todo los racialmente mixtos mulatos y zambos– eran solapadas, taimadas y proclives a la delincuencia» (p. 101).

⁹⁸ En ese sentido, en la causa incoada contra don Pascual Bargas, Alcalde de naturales de la parroquia de Santa Marta, al responder sobre supuestos excesos cometidos contra dos indios, respondería que «no debe tenerse en cuenta a los dichos de los naturales por su inclinacion a la vevida». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (13-XI-1798) «Vicente Vilca e Ysabel Condori contra don Pascual Bargas, alcalde de naturales de la parroquia de Santa Marta por excesos». Fjs. 6.

Evidentemente, es necesario resaltar el evidente círculo vicioso en que se veían envueltos estos sectores relegados. Así pues, los grupos marginados serían proclives al crimen en tanto que la propia etiqueta de marginalidad contemplaba un perfil incivil de ciudadano que de una u otra manera los incitará a cometer conductas antisociales; estereotipo que –por otra parte– se reforzaría con la criminalidad en que incurrirían muchos individuos de estos sectores.

Por otro lado, se advierte también la instrumentalización por parte de los sectores más marginales de la sociedad arequipeña –y en específico el caso de los africanos– del estereotipo de peligrosidad que se les atribuía. Estos grupos, cuyo ascenso social era francamente improbable, utilizarían su propio estigma social como mecanismo de mayor visibilización y «respeto» por parte de su vecindario, representando con sus gestos y palabras aquella imagen intimidante que, por otro lado, constituía en su baldón. Varios son los casos en los que mulatos –y sobre todo mulatas– libres, mantienen a raya a un vecindario que los teme a la vez que los reconoce, evadiendo así por un momento el anonimato que su condición servil les deparaba.

Un caso de estos lo representa Juana de Tal, zamba libre. Dicha mujer, luego que penetrara sin permiso en el solar de la viuda Jossefa Zegarra y Caserez en compañía de un negro, y después que fuera reprendida por la dueña de casa, provocaría sistemáticos escándalos frente al hogar de la viuda durante dos días siguientes, e inclusive agraviaría en las calles de la ciudad al hijo de ésta, el clérigo franciscano Bernabé Antonio Rodríguez, llamándolo «suchi cara de palo de jeringa»⁹⁹. El comisario del barrio tendría que poner a la mulata en prisión para acabar con sus griteríos. Algo muy similar ocurriría con la mulata libre Luisa Tapia, conocida por el sobre nombre de «Guacaca» o «Macaca»¹⁰⁰. Sin embargo, un caso aún más paradigmático sería el de la mulata de nombre Thomasa, panadera mejor conocida por el apelativo de «la Piquena». En mayo de 1788, la liberta protagonizaría una gresca con su vecina María Ebarista Arroyo, por el uso de un lavatorio (acequia) en el patio de una quinta ubicada en la calle de los huérfanos, hoy primera cuadra de Palacio Viejo (TOMASIO 2015), provocándole grandes

⁹⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (21-II-1785) «Da. Jossefa Zegarra y Caserez, viuda de Dn. Josef Rodríguez y Dn. Bernabé Antonio Rodríguez O.F.M. contra Juana de Tal, samba libre por perdimiento de respeto». Fjs. 4.

¹⁰⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. (24-VII-1815). Leg. 90. «Doña María de Rivero por injurias verbales, contra ILuisa Tapia conocida por el sobre nombre de Guacaca o Macaca» fjs. 1; y la contraquerella «Luisa Tapia contra Doña Bárbara de Ribero por Injurias Verbales».

heridas: «Tomando una piedra en la mano rompió contra mi de lo que resultó que me hubiese lastimado un dedo de la mano izquierda, rasgo mi nariz, tomó un palo en la mano, con lo que acercándose en mi persona quizo pegarme, no pudiendo darme por ser más corto»¹⁰¹. En la causa, numerosos testigos manifiestan la agresividad que caracterizaba a la mulata, algo que le hacía digna de temor entre sus colindantes: «[Thomasa] es de jenio altibo, provocante, insolente, atrevido, en tanto grado que no repara en quien depone, aunque verdaderamente conosca que es superior de ella»¹⁰².

b.4. El revés de las injurias: el paradigma del «ciudadano honrado». Finalmente, completando el panorama, podemos concluir que las injurias que utilizaban los arequipeños con el propósito de dañar el honor de sus enemigos referirán a todas las conductas que están fuera del paradigma del «ciudadano honrado»¹⁰³, es decir aquellas que amenacen al ideal de «policía» como medio de sociabilidad que funda la ciudadanía. Además de las injurias que tienen connotaciones étnicas –que como ya hemos mencionado aluden a este criterio de civilidad–, encontramos también aquellas que refieren a la liviandad sexual en el caso de mujeres¹⁰⁴; y la deshonestidad, ociosidad y embriaguez en caso de los varones. Todas ellas son tenidas como actitudes antisociales y por tanto reprobables. Por oposición podemos obtener una imagen del prototipo de ciudadano virtuoso: fiel y devoto al matrimonio en el caso de las damas; laborioso, leal a la Corona y respetuoso de las autoridades, honrado y trabajador en tanto los varones; católico y piadoso en cualquiera de los dos casos¹⁰⁵.

Ahora bien, este arquetipo de ciudadano antes descrito no será resentido por los sectores «marginales» o también llamados como plebeyos, antes bien todos sus esfuerzos estarán tendientes a adecuarse al patrón que cierta historiografía muy afecta a los binomios cerrados

¹⁰¹ ARAr/Intendencia/Criminal. (17-V-1788). Leg. 85. «María Ebarista Arroyo contra Thomasa la piqueña por injurias». Fjs. 7.

¹⁰² *Ibidem*. Fjs. 2v.

¹⁰³ Epíteto común, encontrado en numerosas causas, mediante el cual las partes querellantes aludían al prototipo de ciudadano modelo, garantía de la civilidad y convivencia política.

¹⁰⁴ Según CHAMBERS (2003) «En los estudios de la América Hispana, tomar como eje al honor sexual y a la pureza racial ha permitido a los investigadores demostrar el papel clave que el matrimonio tuvo en la conservación de un orden social jerárquico» (p. 182).

¹⁰⁵ Semejante interpretación maneja GARRIOCH (1987) en su estudio del París del siglo XVIII.

y enfrentados llamaría «dominante» o «hegemónica»¹⁰⁶. En las fuentes consultadas encontramos abundante información sobre cómo la plebe se esfuerza en hacer carne de los modelos antes descritos, muchas veces tan sólo pudiendo imitar la imagen de este prototipo. Son frecuentes las referencias de cómo la población, indistintamente de su origen étnico o económico, ostenta los valores del «ciudadano honrado» llamándose a sí mismos con aquel nombre. Como un ejemplo podemos citar al zambo libre Gregorio Carpio, quien se calificará con el epítome de «don» en su escrito de querrela, dejando en ella plena constancia de aquellas características que resaltaban su civilidad¹⁰⁷.

Como ya se ha señalado, la apropiación de ese estatus de «policía» que era análogo a «lo hispánico», muchas veces estará relegado estrictamente al ámbito formal, es decir a la adopción de elementos externos de esa cultura. En esa tónica, será elocuente lo manifestado por don Pascual Vargas, en un pedido dirigido al intendente:

«Todos los Indios [...] quieren volverse Españoles, ya porque se visten a lo español, ya porque aprehenden oficios de Españoles, como Barberos, sastres, etc. ya porque tienen el color algo palido, ya porque se han peinado a la moda, ya porque sus Padrinos son Españoles, y los hasen baptisar en la Catedral y ya porque se mudan los apellidos de Yndio, y se ponen los de Español»¹⁰⁸

Es en este punto, y siguiendo en parte el esquema de VAN VELSEN (1964), que hemos de resaltar lo siguiente: muchas veces en las actuaciones sociales concretas y cotidianas la población manipula y reformula el patrón cultural, es decir la versión arquetípica de la representación social: el paradigma del «ciudadano honrado». Se muestra entonces que las

¹⁰⁶ Es en esa línea que STAVIG (1990) describe como «los delincuentes indios [forasteros] eran traídos ante la justicia por otros indios [naturales de Canas, Canchis y Quispicanchis] que a menudo los veían como desadaptados, flojos y a veces peligrosos» (p. 82), discriminándoseles al atribuirles así las características inciviles que tanto pesaban sobre la colectividad indígena. El valor mismo de la supervivencia social –que estaba garantizado por la reproducción de las pautas de policía que permitirían la subsistencia– suponía la discriminación de aquellos comportamientos que pusieran en riesgo la estabilidad del grupo, y por tanto todos los sectores sociales echaban mano de estos «prejuicios» para manifestar su desprecio a otro. Luego, los indígenas asimilaron estos criterios de discriminación y «fortalecieron al sistema colonial al darle importancia cultural al control de la delincuencia» (STAVIG 1990: 76, 1988: 743).

¹⁰⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. (24-VI-1809) Leg. 89. «Don Gregorio Carpio contra Melchor Cáceres y otros, por Injurias Reales y Verbales».

¹⁰⁸ ARAr/Intendencia/Administrativo. (20-I-1803). «Don Pascual Vargas representa las dificultades». Citado en CHAMBERS 2003: 85.

estructuras de comportamiento son permeables y porosas, y gracias a su aprovechamiento personal o reinterpretación interesada son nutridas con nuevos significados. Se evidencia así del análisis situacional una amplia gama de re-significaciones del patrón cultural de ciudadanía, más allá de la pura asimilación de los roles establecidos. Como es evidente, esto concurrirá sobre todo en lo que respecta a la plebe, la que buscando una mayor integración al conglomerado social y un mayor estatus en el mismo mediante la réplica de patrones socialmente aceptados, tampoco pierde oportunidad para adaptar estos (muchas veces trastocándolos profundamente) a una interpretación muy adecuada al gusto e intereses de esta. No podemos hablar entonces de un binomio asimilación/marginalidad de las estructuras de comportamiento; existen luego una serie de estrategias que permiten el aprovechamiento –con la consecuente modificación– de dichos roles por parte de la población. Sin embargo nos apartamos del autor citado cuando este define que el marco normativo será totalmente instrumentalizado por parte de los «sectores marginales». Conviene así dar énfasis a la consecuente asimilación de la población –aunque muchas veces sesgada y confusa– de aquellos valores que iluminan el imaginario y la acción de un grupo humano. Por tratarse de un tema complejo podemos esbozar la idea de un intercambio recíproco, en el que se evidencia una instrumentalización parcial del paradigma normativo, así como la asimilación del mismo (también en parte) en tanto el actor social.

Evidentemente, este anhelo de integración (echando mano de las manifestaciones culturales hispánicas) de parte de los sectores indios y africanos no será bien visto por españoles y por los mestizos que se reclaman como tales. Muchos cuestionarán su asimilación al paradigma ciudadano, o aludirán veladamente al carácter «aparente» de su condición civilizada, acompañando los ultrajes de contenido étnico con vocablos como «alzado», «osado», «advenedizo» o «afeytado»¹⁰⁹. Así pues, la disputa por la preeminencia en el espectro social mediante la minimización el otro se hace patente.

¹⁰⁹ De esta manera sería agraviada Januaria Baldivia, llamada por el alcalde de Sigüas D. José Antonio Martínez del Campo de «chola bribona, alzada y osada». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (24-XII-1815) «Causa criminal seguida por el Alcalde de Sigüas D. José Antonio Martínez del Campo contra Casimiro Bolaños, su muger Januaria Baldivia, y Juan Baldivia su hermano; por perdimiento de respeto, y atropellamiento a la Real justicia, la noche del 24 de Diciembre: y remitida esta causa al Sr. Gobernador Intendente de esta Provincia». Fjs. 8; 13.

b.5. Injurias verbales y el movimiento independentista. Ya refiriéndonos a otro aspecto, consideramos resaltar un tipo de injuria verbal que, si bien no es frecuente o común, resulta particularmente significativa. Se trata de las ofensas que hacen alusión a la coyuntura independentista. Como se ha dejado constancia, el modelo de civilidad —«el ciudadano honrado»— incluía entre otras características la lealtad al soberano católico. En algunas ocasiones el muy mentado epíteto ladrón será agravado mediante frases como «ladrón al Rey»¹¹⁰. No obstante, resultan más peculiares aquellos agravios que sugerían la supuesta adhesión del rival a la causa independentista. En más de una ocasión, y a partir del año 1913, y sobre todo en el año 1915, luego de la derrota de Pumacahua, veremos cómo se utilizarán vocablos del tipo de «alzado»¹¹¹, «aliado» y «patriota»¹¹².

Así pues, y a manera de ejemplo, citaremos la causa promovida por Juan Portugal en 1816, luego que tuviera una disputa con Luis Cáseres al ser atropellado por su mula saliendo de una fiesta en Cayma. En lo más acalorado de la discusión Portugal terminaría «diciendo que Luiz y toda su familia eran unos aliados ladrones, descaminadores de los chapetones», o como lo refireriría otro testigo, «qe. dicho Luiz y sus gentes eran unos ladrones, alzados, Patriotas, descaminadores de chapetones»¹¹³. Más singular resultará la afrenta pronunciada por doña Juana Tomasa Velarde, vecina de Ilo, motejando como «la Casteli» a Andrea Santón, concubina del alcalde ordinario Manuel Ramírez de Ortiz, con quien mantenía diversos altercados¹¹⁴. El apodo que recibió Santón —mujer tachada de díscola, escandalosa y revoltosa en la causa— apuntaba al célebre agitador de multitudes y prócer de la independencia rioplatense Juan José Castelli, que dos años antes fuera derrotado en Huaqui por las fuerzas realistas procedentes de Arequipa, dirigidas por Pío Tristán. Finalmente podemos reseñar el

¹¹⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (8-I-1793) «Don Manuel Salazar contra don Nicolás Quintanilla por injurias de palabra».

¹¹¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (1818) «Por Bartolomé Gill, quejándose de la tropelía con que dice que procedió contra un Negro suyo nombrado José Antonio el Alcalde de Siguan don Tomás Sambrano». COBARRUVIAS (1616), en su conocido diccionario, alude a la acepción sediciosa que implica el término alzado: «Alçarfe un Reyno, Provincia, Ciudad, o Castillo, es rebelarfe contra fu feñor» (p. 41).

¹¹² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (12-VII-1815). «Doña Josefa Ramírez contra doña Narcisa Postigo por injurias»; Leg. 91. (01-I-1817) «A solicitud del Procurador don Torivio Aguilar como Apoderado de Dn. Francisco Xavier de Villena y demás vecinos del Pueblo de Andaray Partido de Condesuyos en esta Provincia.

¹¹³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (6-I-1816) «Don Juan Portugal contra don Luis Cáseres por injurias personales». Fjs. 7v; 8v.

¹¹⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (4-IV-1813) «Doña Juana Tomasa Velarde, viuda de José Murillo contra don Manuel Ramírez de Ortíz, Alcalde Ordinario de Ylo por excesos».

proceso seguido contra la mulata Luisa Tapia por doña Bárbara de Rivero, matriarca de la familia de Rivero de conocida ascendencia liberal, y tía de Mariano de Rivero y Ustáriz, entre otros. Doña Bárbara –a la vez que su hija María– sería injuriada por la mulata en la puerta de su casa en la calle Guañamarca (hoy Rivero), quién tildaría a la anciana de «vieja patriota [...] alzada pública [...] casta de matagentes»¹¹⁵.

c. *Injurias reales*.- Las «injurias reales», o «de hecho» eran consideradas como los acometimientos contra la integridad física de la persona. Estas agresiones, en general, están definidas por la Ley 6 del Tit. XIX Partida VII:

«Ley sesta. en quantas maneras puede onbre a otro fazer desonrra de fecho. Fyriendo vn onbre a otro con mano o con pie. o con palo. o con piedra. o con armas. o con otra cosa qualquier dezimos que le faze tuerto & desonrra. E por ende dezimos que el que resçibiesse tal desonrra o tuerto quier salga sangre de la ferida quier non puede demandar que le sea fecha emienda della y el iudgador deue apremiar aquel que lo firio que lo emiende [...] Otrosy dezimos que ronpiendo vn onbre a otro a sabiendas los paños que vistiesse o despojandolo dellos por fuerça. o estupiendolo en la cara a sabiendas o alçando la mano con palo. o con otra cosa para lo ferir. maguer non lo fiera fazele muy grand desonrra de que le puede demandar emienda en iuyzio. y es tenudo el otro de gela fazer a bien vista del iudgador».

Las agresiones simples más frecuentes se consumaban por medio de una gresca o riña, enfrentamiento comúnmente catalogado en las fuentes judiciales como «quimera», «asonada» o «gorgona»¹¹⁶. Se tiene, además, que las agresiones más comunes implicaron tanto injuria verbal como real. Ellas constituyen los ataques más frecuentes que concurren en el periodo, constituyendo el 46% del total de agresiones entre vecinos.

¹¹⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (24-VII-1815) «Doña María de Rivero por injurias verbales, contra Luisa Tapia conocida por el sobre nombre de Guacaca o Macaca» fjs. 1; y la contraquerella «Luisa Tapia contra Doña Bárbara de Ribero por Injurias Verbales».

¹¹⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (15-IV-1816) «Da. Petronila Bera contra Manuela, María e Ignacia Santayana por injurias».

Las manifestaciones de las agresiones reales eran de las más variadas, constituyendo todo un espectro de violencia entre los que podemos encontrar desde empujones o jalones que resultarían en un mero daño al vestido, hasta aquellas que podían postrar a la víctima por varios días, a causa de los golpes y serias magulladuras que sufriría. En todo caso, el daño resultante –físico o patrimonial de la injuria– era visto como análogo en todos los casos, ya que el perjuicio, como antes se ha mencionado, estaba enfocado a la esfera del honor. Las agresiones consideradas graves estarán sub catalogadas bajo el término de «heridas», y estas serían así tipificadas cuando la agresión suponía riesgo de muerte, de pérdida de un miembro, o de incapacidad funcional. Estas expresiones de violencia extrema, similares a lo que la doctrina jurídica actual califica como «lesiones muy graves» o «lesiones gravísimas», serán evaluadas en un acápite separado.

Por otro lado, como algunos ejemplos de «injurias reales», podemos mencionar al suceso protagonizado entre las hermanas Bustamante y su concuñada Gertrudis Almagro por una disputa por el pago de una reparación de una acequia en la casa común. Según el reconocimiento practicado por el cirujano Andrés Tinagero de la Escalera, la víctima tendría «toda la cara llena de insisiones hechas al parecer con las uñas de las manos, y que estas no son gravosas ni de peligro»¹¹⁷. De igual manera citamos a los estropicios causados en Lorenzo Aguirre. Luego de mediar en una disputa doméstica, y al tratar de interceder por la esposa golpeada sufriría algunas lesiones a manos de su vecino Manuel Dávila, quien ya tenía antecedentes por violencia contra su cónyuge. El daño, a pesar de no ser de riesgo, era de alguna consideración tal como resulta del análisis practicado por el cirujano Francisco Guzmán: «la parte superior dela cabeza una herida hecha con un instrumento obtuso sobre el gueso parietal derecho con total destruccion de superiosio, y gran laseracion de las vecinas partes carnosas»¹¹⁸.

Mientras que el enfrentamiento entre los hombres se restringía a puñetazos –muchas veces llamadas «puñadas»– y patadas, en las trifulcas entre mujeres, el enfrentamiento físico

¹¹⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (3-X-1792) «Manuela Bustamante y hermanas por heridas contra Gertrudis Almagro».

¹¹⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (23-X-1787) «Manuel Dávila por heridas en contra de Lorenzo Aguirre».

incluían comúnmente los arañoses, pellizcos, mordeduras y jalones de pelo¹¹⁹, advirtiéndose curiosamente que hubo alguna ocasión en que mechones de pelo serían ofrecidos como pruebas, adheridos con lacre en el escrito de querrela¹²⁰.

c.1. Carácter corporativo de los conflictos. Comúnmente el enfrentamiento físico sería recíproco, participando de las golpizas no sólo los actores principales del conflicto o quienes iniciaron la provocación, sino que más bien a ella se sumaban los familiares de los involucrados, sus criados, sirvientes o esclavos, e inclusive sus amigos, arrendatarios, vecinos o eventuales espectadores. Este hecho estaría marcado por la virtual inexistencia de los límites entre los ámbitos público y privado en la sociedad virreinal.

Como muestra del carácter corporativo de los enfrentamientos en la Arequipa virreinal, asunto muy común en las causas consultadas, podemos entre muchas otras nombrar el conflicto suscitado entre Casimiro Ballón y Juan Laso. La disputa iniciaría cuando un criado de Ballón, de nombre Mariano, se aprestaba a regar la huerta de la casa, ubicada en la ciudad. En ese momento, y por un hecho poco claro, se inició un intercambio de insultos entre Mariano y la sirvienta de Laso, que luego derivaría en una gresca. Al acercarse al lugar la hija de Laso, Teresa, salió en defensa de la sirvienta enfrentándose a golpes con el criado. En ese momento haría aparición el patrón de Mariano, quien no tardaría en verse envuelto en un intercambio de insultos con Teresa, a quien llamaría de «chola insolente». Acto seguido intervendría el mayor hijo de Juan Laso, de nombre Bonifacio. El joven derribó a Ballón, golpeándolo en el suelo conjuntamente con sus amigos Melchor Corbacho, apodado «el escolero», y Francisco Paulino Gonzáles, apodado como «Tacarpillo». Al tiempo, intervendría en la escena la esposa de Casimiro Ballón, Josefa Ponze, incorporándose a la riña, increpando a la familia rival

¹¹⁹ Un ejemplo de esto fue enfrentamiento entre la Ursula Ceballos y la chichera Gregoria Vizcarra quien, como señala la primera en su manifestación, «con un garrote en la mano, y sin decirle yo el menor motivo me arremetió, y me arrastró de los cabellos por el suelo con tanta furia, que me arrancó una trensa de Cabello, como está de manifiesto: me dio de bofetadas, y puñadas por la cara, y por todo el cuerpo: me ha lastimado la mano derecha, mordiéndome, lo que está también á la vista». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (23-X-1809) «Doña Gregoria Viscarra contra Úrsula Ceballos por injurias reales y verbales» Fjs. 1v.

¹²⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (3-III-1806) «Francisco Alvarado contra Josefa Valencia, conocida por la moquehuana por las injurias reales y verbales contra su esposa Antonia Villalobos». Fjs. 12.

dando voces e increpando sus acciones, por lo que sería finalmente «bofetada por Bonifacio Laso arañandola en la cara tanto que aún conservan las señales»¹²¹.

Otro caso muy ilustrador es el de la disputa producida entre doña Josefa Ramires y Narcisa Postigo en 1815, también dentro de los límites de la urbe. En el escrito de querrela, Ramires refiere que: «con ocasión de haver hido la citada mi Esclava María Alatrística á casa de los suso dichos [Matías Rojas y Narcisa Postigo], por estar contigua a la mia, á preguntar por una Gallina que se salio de mi casa» se produciría una disputa entre la negra y una sirvienta de Postigo llamada María Mamani. Allí golpearon a la esclava entre los esposos y sus criados, y cuando ella entró a la casa a librarla saltando la pared medianera, se produjo una pelea entre ambas matronas. Finalmente se unirían a la gresca los criados de ambas partes y hasta los plateros que habitaban la casa de Ramires en condición de arrendatarios¹²².

c.2. Agresiones y contenido simbólico. Por otro lado, asimismo hemos podido identificar algunas agresiones de muy bajo –o a veces nulo– menoscabo contra el cuerpo, pero de alto contenido simbólico, siendo por esto estimadas como dañosas según la mentalidad colectiva. En su ejecución, asimismo, se podían leer una serie de consideraciones que denotaban mensajes fácilmente interpretables por quien los observara y participara de su contexto, que generalmente apuntaban al descrédito o al deshonor del agredido. Estos ataques de índole gestual serían: los golpes con vara de alcalde, el «apechugamiento», los azotes, el corte de cabello, entre otros.

c.2.1. Vara de alcalde. En primer lugar trataremos los golpes de vara o bastón. Nos referimos, en el primer caso, a la «vara de justicia», es decir aquel distintivo de su autoridad, y en el segundo caso al bastón como elemento representativo del estatus de un caballero u hombre noble¹²³. La vara de justicia era el atributo de los oidores (y específicamente los

¹²¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (11-XII-1811) «Don Casimiro Ballon contra don Juan Laso, su hijo Bonifacio, y su muger, y contra otros por injurias verbales y personales».Fjs. 1v.

¹²² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (12-VII-1815) «Doña Josefa Ramires contra doña Narcisa Postigo, por injurias» Fjs. 1v.

¹²³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (23-II-1797) «Juan de Dios Bernedo contra Don Antonio Bernedo, Alcalde Ordinario de españoles de la doctrina de Puquina»; (07-VIII-1798) «Criminales contra dn. Pedro Perez Obligado, Alcalde de Aguas de Camiña por los atentados, y excesos cometidos contra la Persona, y Empleo de don Fernando Oviedo, Alcalde ordinario de aquel Pueblo»; Leg. 88. (5-III-1805) «Mariano Coaguila, contra

alcaldes de crimen), sin embargo un símbolo equivalente era portado por los alcaldes ordinarios (BARRIENTOS GRANDON: 2004)¹²⁴.

Como queda patente de las descripciones de los agraviados, el golpe con una vara implicará un agravio muy serio para las víctimas. Más allá del daño físico ejecutado con ambos medios –mínimo en el común de los casos– en las declaraciones de los injuriados y de los testigos, este tipo de ataques gozarán de un lugar diferenciado y preferente en el discurso, incluso frente a otras agresiones mucho más graves perpetradas por otros medios, que serían referidas someramente. Así también, al reseñar el menoscabo recibido, las víctimas aludirán a la vara de alcalde o al bastón como causa de heridas graves, imposibles de ser procuradas por ese instrumento en realidad, y que de la propia narración de los testigos e incluso de los mismos afectados podemos concluir que se produjeron por otros medios, pero que en la mentalidad del agraviado estaban ligadas a este signo de poder.

Resaltamos luego la dimensión simbólica del ataque con un símbolo de jerarquía social; una agresión en la que se pondrá de relieve además de la afrenta misma, la desigualdad de roles que mediaba entre agresor y agredido, pudiéndose leer en la acometida una clara mención a la relación de superioridad/inferioridad y, por consiguiente, una velada alusión al carácter plebeyo del que recibía la agresión por encontrarse en un sector social susceptible a ser «civilizado» mediante la corrección por las autoridades y los principales; todo esto según el modelo ya mencionado en líneas anteriores (véase acápite *b.4*). Muchas de las víctimas, luego, reclamarán a una autoridad de mayor rango –como el intendente– una reparación frente a este agravio, lo que, sumado a una farragosa relación de méritos y blasones (muchos de ellos oscuros y poco fiables), equivaldría a una declaración de su «mayor valer», buscando así ser rehabilitados de la condición de subalternos a que habían sido confinados por acción de aquel gesto. Vale la pena mencionar que –tal como se detallará cuando se trate el tema en

don Manuel Gutierrez, Alcalde de españoles de Puquina»; (V-1806) «Contra don Marcos Riveros, alcalde ordinario de Socabaya por atropellamientos contra María Baldivia»; Leg. 89. (1807) «Tiburcio Choque contra Carlos Chipoco, alcalde de naturales de Torata por excesos».

¹²⁴ Barrientos Grandon (2004) describe la Vara de Justicia de los oidores de la siguiente manera: «Era la vara de justicia del grosor de una lanza y de la altura de una persona, en cuya parte superior tenía un pequeño travesaño, que formaba una cruz, y que así también servía para tomar juramento» (p. 66). Consideramos que las dimensiones de la vara de alcalde era menor.

el subsiguiente acápite— la consideración y estima a la autoridad local (como el alcalde ordinario) por parte de los vecinos era muy escasa, ya sea porque éste no se diferenciaba en mucho de los demás ciudadanos en cuanto honor y procedencia, o por la alta rotación en el cargo. Así pues, en una sociedad «nueva» y de alta movilidad social como lo era Arequipa, en la que casi nadie poseía los títulos y méritos de manera evidente, las disputas en las que se ponía en entredicho el estatus social de los ciudadanos —siempre difícil de identificar— eran sumamente comunes; diputas que se traducían también entre vecinos que ocupaban esporádicamente funciones políticas, y otros que, habían ocupado cargos en otro tiempo además de ser vecinos principales gracias a su patrimonio o redes clientelares.

Pero volviendo a valor simbólico de la agresión con la vara de alcalde, podemos citar que esta no sólo revestía de especial connotación para las víctimas el ser agredido con este instrumento, sino que constituía una grave ofensa el despojar —aunque sea de una manera accidental, más propia de la defensa legítima que de una agresión consumada— de la vara a una autoridad. Este fue el caso de Jacinto Baldivia, quien luego de tener una disputa con Eugenio Gonzalez, alcalde ordinario de Characta por la entrega de los frutos de dos topos de alfalfa, como contribución para «la dentrada del excelentísimo señor Virrey»¹²⁵. En plena disputa y cuando buscaba protegerse de las embestidas que le hacía el alcalde con su caballo, le golpeó haciéndole caer la vara; acción por la cual la autoridad montaría en mayor cólera, confinándole finalmente en la cárcel.

Así pues, la vara materializaba la autoridad de quien la detentaba, tal como se aprecia en algunas quejas por desacato que presentan las autoridades al intendente. En ellas se exigía severos correctivos a quien se condujera «sin respeto al honor que se debe á la Vara»¹²⁶. En esa línea, como una clara manifestación de injuria y desconocimiento a la jurisdicción, el alcalde ordinario de Yanaquigua, Domingo de Rivero, reclamaría al intendente porque Ubaldo Cabrera y Manchego, principal del pueblo de Andaray lo insultaría y, sobre todo,

¹²⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (1806) «Contra Eugenio Gonzalez, alcalde ordinario de Characta por las injurias y maltratamientos contra Jacinto Baldivia». Fjs. 1.

¹²⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (22-IV-1818) «Sumaria criminal formada por el Alcalde Ordinariº de Vitor dn. Calisto Caseres contra dn. Miguel Rodrigues por falta de respeto». Fjs. 1.

«quebraría la vara» cuando fuera a reconvenirle por los excesos que cometía en aquella población vecina, cuando ejercía la función de juez comisionado¹²⁷.

c.2.2. «Apechugamiento». Otro de los ataques simbólicos dignos de ser mencionado es el señalado por las fuentes con el nombre de «apechugamiento»¹²⁸. Esta arremetida muy común entre autoridades y hombres de condición social algo elevada, consistía en zarandear al sujeto de la «pechuga» de la camisa, o golpear o empujar con el pecho. Este término figura en los diccionarios más antiguos de lengua española. Ya el de NEBRIJA (1495) traduce el término como «pechugar» al latín de la siguiente manera: «pectore incubo.is» (p. 151,1); el de PERCIVAL (1591) traduce éste mismo término al inglés como: «to leane on the breast» (p. 138,2); finalmente PALET (1604) lo traducirá al francés como: «S'apuyer sur la poitrine» (p. 228,2).

Como es evidente, el daño resultante de esta agresión era muy relativo, tan sólo afectándose en algunos casos el vestido del injuriado; sin embargo, muchas de las víctimas refieren este hecho como sumamente afrentoso¹²⁹. Interpretamos este hecho como una ofensa de carácter eminentemente simbólico, referido a agraviar mediante la destrucción parcial de un símbolo de honor, como lo es el vestido (y en especial la camisa); y en el caso de chocar el pecho contra el pecho, manifestar una posición de poder sobre el injuriado.

Es así pues, como mencionamos, que este gesto representaba una verdadera afrenta para los individuos de la época. El sólo intento de ejecutar este gesto ya representaba un hecho digno de ser referido en una querrela como una ofensa. Esto ocurriría en la causa que promovería

¹²⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (01-I-1817) «A solicitud del Procurador don Torivio Aguilar como Apoderado de Dn. Francisco Xavier de Villena y demás vecinos del pueblo de Andaray Partido de Condesuyos en esta Provincia». Fjs. 55.

¹²⁸ Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), «apechugar» significa: Empujar o apretar con el pecho, acometer. Semejante definición se tiene desde el diccionario trilingüe de VITTORI (1609: 57,2). MINSHEU (1617) señala al respecto en su diccionario: «Apechugar. i. Cerrar con otro *pecho a pecho*» (p. 26,4). Hablamos de un acto que en la actualidad en el Perú se llama «pecheo».

¹²⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (19-XII-1789) «Vicente Mantilla contra Tomás Ortiz por injurias»; Leg. 86. (5-VII-1798) «Don Lorenzo Velarde, Síndico de Jerusalem contra dn. Pedro Mantilla, Alcalde ordinario de españoles del valle de Uchumayo y Mollebaya»; Leg. 90. (20-I-1815) «Por injurias inferidas contra el Diputado de Aguas de este territorio don José Butrón»; Leg. 91. (27-XI-1816) «Bernardino Zavala contra José Trelles por injurias».

el alcalde ordinario José Trelles contra Bernardino Zavala por injurias¹³⁰. En su confesión, otro involucrado de nombre Gerónimo Blanco, justificaría la bofetada que dio al alcalde en atención que la autoridad quería apechugarle, aunque este gesto nunca se concretaría finalmente.

c.2.3. Cortes de pelo. Entre las mujeres una afrenta tenida muy tenida por grave era el corte del pelo, especialmente de las trenzas de las mujeres indígenas, dejándose algunas veces constancia de aquel daño mediante el lacrado las trenzas a las fojas de los escritos, como ocurriría con Ysabel Portugal y Josefa Valencia, entre otras¹³¹. En algunas ocasiones las trenzas eran arrancadas del cuero cabelludo generando las heridas correspondientes¹³², sin embargo, en otras ocasiones los cortes de pelo se hacían con cuchillo o tijeras, minimizándose así el daño físico sufrido, remitiéndose la afrenta al ámbito simbólico. No obstante, en estos casos, a pesar de la inexistencia del daño físico la pérdida de cabello – símbolo arquetípico de belleza en diversas culturas a lo largo del tiempo– constituía un perjuicio de gran significación para las víctimas, algo que reseñaban con profusión en sus escritos.

Como un buen ejemplo de este tipo de agresiones, podemos dar cuenta de la causa que siguió Jacoba Achircana, chichera de origen indígena, contra Theodora Cama –también indígena de origen plebeyo– por injurias. En ella se expone que, como venganza de la relación adulterina que mantenía Achircana con el esposo de Theodora, esta ingresaría a su habitación en la noche, y luego de golpearle procedería a, como ella relata, «cortarme tres simbas de cabello con el cuchillo que había traído para este efecto, agregando las injurias de decirme puta»¹³³. A consecuencia de esto, su esposo dejaría de frecuentar a la chichera, por lo que

¹³⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (27-XI-1816) «Bernardino Zavala contra José Trelles por injurias».

¹³¹ «Hasta los extremos de haberme arrancado pelo de la cabeza una trensa y es la misma que presento y juro». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (15-V-1803). «Ysabel Portugal contra su marido Rudesindo Megia por injurias» fjs. 2; ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (3-III-1806) «Francisco Alvarado contra Josefa Valencia, conocida por la moquehuana por las injurias reales y verbales contra su esposa Antonia Villalobos».

¹³² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (13-XI-1798). «Vicente Vilca contra don Pascual Bargas, alcalde de naturales de la parroquia de Santa Marta»; Leg. 88. (3-III-1806) «Francisco Alvarado contra Josefa Valencia, conocida por la moquehuana por las injurias reales y verbales contra su esposa Antonia Villalobos»; Leg. 89. (23-X-1809) «Doña Gregoria Viscarra contra Úrsula Ceballos por injurias reales y verbales».

¹³³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (2-I-1808) «Jacoba Achircana contra Faustino Condori y Theodora Cama, por injurias ». Fjs. 1.

ella, en venganza los querellaría a ambos. En el escrito de Jacoba Achircana se dejaría constancia de lo ofensivo que constituía para ella el corte de las trenzas, dándole más importancia a este hecho que todos los otros sufridos. Argumentaba al respecto en uno de sus escritos: «Se deben guardar nuestros usos y costumbres y según la ley 18 tit. 1ro Lib. 1 de la Real Ind. Es ornato entre los Yndios traer el cabello largo y es afrenta y castigo cortarles el pelo»¹³⁴.

En otro caso emblemático, encontramos cómo el corte de pelo constituía una de las formas de ofensa más dura, encontrándola conjuntamente con otros castigos tenidos por muy severos. Citamos la causa por sevicia iniciada por María Rosa contra su amo: dicha mulata fue esclava del teniente coronel Juan Bautista Arróspide por el lapso de 2 años, vendida a éste por 450 pesos. Bajo su servicio fue víctima de sevicia. Solicitando a su amo su venta por serle imposible continuar bajo su techo, salió en busca de nuevo patrón a las calles; sin embargo pero su amo le pidió 150 pesos más sobre el valor real de su persona. A pesar de encontrar un nuevo patrón que pague por ella 500 pesos, y haciendo las tratativas de su venta, fue castigada de forma cruel –incluyéndose en el escarmiento el privarla del cabello– por no alcanzar la excesiva cifra fijada por Arróspide. La mulata lo relataría así en su escrito de querella:

«me hacen sorprender en la Calle con dos ministros de Justicia, me arrastran asu casa, y allí me ponen en cueros, y amarrada me dan tantos asotes, quantos ya me desfallecieron: no cansados con este castigo tan severo, y sin Delito, me hinchán los ojos á puñadas, **me cortan el pelo afrentosamente**, me visten sin mas que una burda gerga á rais de las carnes, y remachandome un par de grillos, protestan hacer igual castigo por nueve días»¹³⁵.

c.2.4. Azotes. Conforme al castigo por azotes, mencionamos lo siguiente: además del evidente y muchas veces considerable daño físico que producían los azotes, es interesante remarcar la

¹³⁴ Ibídem. Fjs. 8v.

¹³⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (14-VII-1819) «Esclava María Rosa Arróspide contra su amo por sevicia». Fjs. 4v. El subrayado es nuestro. Luego de este hecho la esclava se fugaría de la casa y querellaría a su amo. Aduce a que su amo echa mano de subterfugios del amo para evitar el cumplimiento de la Ley que le obliga a venderle a otro en caso de no estar de acuerdo con su trato. Señala tener dos amos interesados en ella, pero bajo el precio de venta original.

dimensión simbólica que recaía en este tipo de agresiones. Ya COBARRUVIAS (1616) alude al daño moral que involucrado a los azotes: «AçOTE. Una correa ancha del cuero del lomo de la Vaca, con que se caftigan a los delinquentes [...] El caftigo de los açotes, trae configo dolor, y juntamente infamia» (p. 24).

Entre los instrumentos utilizados más usuales, podemos citar además del cinto de cuero, a la verga o nervio de toro¹³⁶, ya identificado por en 1495 por NEBRIJA bajo el nombre latino de «taurea»; y el zurriago¹³⁷, llamado por él «seutica» (p. 5,2).

Al prestarse como medio de corrección, el azote fungía como un indiscutible instrumento de autoridad; así pues, quien usara de él –justa o injustamente– se arrogaba una posición de superioridad moral, al tiempo que relegaba a una condición de subalternidad producto del deshonor al azotado. Si bien el uso de los azotes era usual al ejercicio de cargos como los de alcalde, no era exclusivo a ellos; se ha podido constatar luego como en disputas entre particulares, muchos hacían uso de esta forma de ataque, para imprimir a su ofensa un mayor perjuicio y arrogarse asimismo suficiencia moral. Inclusive, a veces se recurría a medios informales para ejecutar los azotes, como son las varas de membrillo.

Un buen ejemplo del uso de azotes por particulares lo tenemos en 1804. Habiéndose producido una trifulca en el pago del Palomar entre María Laguna y su pariente Rosa Zevallos, acusándole de ser la amante de su marido, intervendría en la disputa un buen número de parientes de Zevallos, los que arremeterían contra Laguna dándole de «puñadas y pisonos [y] trompadas»¹³⁸, «pellizcándole y dándole mordiscones [...] arrancándole los

¹³⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (04-IV-1813) «Juana Tomasa Velarde, contra el alcalde don Juan Manuel Rodríguez de Ortíz».

¹³⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (03-X-1792) «Antonio Acosta contra Diego Llerena por injurias»; Leg. 88. (25-V-1806) «Manuel Pérez contra Nicolás López, alcaide de la Real Cárcel y su hermano Domingo, por las injurias reales ejecutadas contra su esclavo Gregorio»; Leg. 92. (20-XII-1820) «El soldado de caballería Paulino Moscoso se queja de los atropellamientos que á él, y á su muger les há inferido el Alcalde de Tiabaya dn. Alejandro Alvarado».

¹³⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (01-II-1804) «Contra María Laguna, su hermana María, don Jacinto Laguna, su mujer y sus hijas por los maltratamientos hechos en doña Rosa Zevallos». Fjs. 6v. y 7.

cabellos»¹³⁹, para finalmente «dejándole en cueros la dieron de azotes»¹⁴⁰ con varas de membrillo, causándole así considerables estragos, tal como señalara su esposo en su escrito de querella:

«[Rosa Zevallos] se halla gravemente herida; en ella pues è hallado la cabeza despoblada de pelo entre tres partes [...] en la cara tiene una herida echa con instrumen obtuso (qual es piedra) esta herida contusa ocupa la parte derecha de la cara [...] tiene la última costilla rota o fracturada [...] **en las nalgas vi los mismos cardenales como azotes** [...] en vista de todo lo expuesto, hallo que Rosa Zevallos se halla en manifiesto peligro de morir»¹⁴¹

Los azotes, además de ser utilizados por las autoridades como elemento de corrección social (y muchas veces como elemento de venganza personal, como se verá luego), en ámbitos domésticos, convirtiéndose así en el instrumento típico de sevicia contra esclavos, siervos y demás subordinados por parte de sus patrones; siendo inclusive causa de la muerte de algunos en ciertas ocasiones, tal como se verá más adelante.

Sin embargo, de lo analizado en otro proceso, el seguido por Ysabel Portugal en contra su marido Rudesindo Megia, se puede constatar cómo la práctica del azote no se restringía a los habituales personajes que detentaban el poder (alcaldes, padres, maridos, amos), sino que era susceptible de ser apropiada por cualquiera como manifestación de su empoderamiento. En ella se describe cómo, luego de muchas agresiones domésticas mutuas, Ysabel Portugal azotó a su marido aprovechando su condición de minusválido, reclamándole que no aportaba económicamente al hogar ya que, según se manifiesta en las declaraciones, «era valdado de los pies»¹⁴².

Así pues, mediante el uso de los azotes, el victmario además de procurar un perjuicio físico a la víctima, procuraba una afrenta que se expresaba como la afirmación de su propia estatus

¹³⁹ *Ibidem.* fjs. 15 v.

¹⁴⁰ *Ibidem.* fjs. 3 y v.

¹⁴¹ *Ibidem.* fjs. 3 y v. El resaltado es nuestro.

¹⁴² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (15-V-1803) «Ysabel Portugal contra su marido Rudesindo Megia por injurias». Fjs. 3v.

y de la condición de subordinación —el azote era el castigo del desadaptado, marginal, esclavo, niño, delincuente— del que recibe el escarmiento.

c.2.5. Otros. Finalmente, como un ejemplo peculiar pero significativo de agresiones físicas de carácter simbólico, señalamos el proceso seguido por Bernarda Velarde contra Brígida Santayana. La causa se puede resumir en lo siguiente: Santayana se involucraría sentimentalmente con el esposo de Bernarda Velarde, con el consentimiento y ayuda de sus familiares. Luego de muchos esfuerzos, Bernarda Velarde logró separar a su esposo de Santayana; sin embargo, y al haber perdido la ayuda económica que recibía de parte de su antiguo amante, Santayana y su familia acecharían al sujeto y a su esposa para así provocarles e insultarles. En el clímax de este escándalo, Santayana y su familia sacarían de su casa a Velarde en plena noche, golpeándola con piedras y con unos cuernos de toro con que se habían equipado para la ocasión¹⁴³. La carga simbólica de esta agresión es tan evidente, que no merecerá mayor comentario.

d. Heridas. - Las injurias reales de tipo grave eran comúnmente como «heridas»¹⁴⁴. Hablamos de gravedad cuando aludimos a aquellas que —tal como lo reconocerían los cirujanos en sus respectivas revisiones de las víctimas— ponían en compromiso la vida por el daño generalizado en el organismo, o generaban la mutilación de un órgano o comprometían su normal funcionamiento. Este término se lee en numerosos encabezamientos de querellas o expedientes criminales¹⁴⁵, y está su vez señalado indirectamente en la Ley 20 Tit. XIX Partida VII:

«Ley veynte. quales desonrras son graues a que dizen en latin atroces & quales non. Entre las desonrras que los onbres resçiben vnos de otros ay muy grand departimiento. Ca tales

¹⁴³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (04-I-1790) «Bernarda Velarde contra Brígida Santayana por injurias».

¹⁴⁴ También se utilizan indiscriminadamente los términos «maltratamientos», «excesos» y «atropellos», sin embargo estos vocablos normalmente están relacionados con los abusos cometidos por la autoridad. Utilizamos el término de «heridas» para referirnos a las injurias reales de grave connotación, por entenderlo así la terminología jurídica del momento.

¹⁴⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (23-XI-1783) «Lorenzo Aguirre contra Manuel Dávila por heridas»; ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (07-II-1812) «Lorenzo Gonzáles por heridas», etc.

ay dellas a que dizen en latin atroces. que quiere dezir en romance commo crueles & graues /2/ E otras ay que son leues. E las que son graues pueden ser conosçidas en quatro mneras. La primera es commo quando la desonrra es mala & fuerte en sy por razon del fecho tan solamente. assy commo si aquel que resçibio la desonrra es **ferido** de cuchillo o de otra arma qualquier de manera que de la **ferida salga sangre o finque lisiado de algund mienbro**. o si es apaleado o **ferido de mano o de pie** en su cuerpo abiltadamente. La segunda manera por que puede ser conosçida la desonrra por graue es por razon del lugar del cuerpo. **assy commo si lo firiese en el oio o en la cara**»¹⁴⁶.

COBARRUVIAS (1616) en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, identifica a una herida como un ataque realizado con un medio idóneo a procurar un daño de consideración, evidenciado específicamente en el derramamiento de sangre: «HERIDAS. El golpe que fe da con la efpada, o cualquiera otra arma, o cualquiera otra cofa que pueda laftimar y facar fangre» (p. 467). La denominación herida, entonces, estará más orientada a designar el menoscabo físico que el espiritual, ya que el término «injuria» es el que designaba con más propiedad a la ofensa moral (que incluye además a la física); esto es muy bien ilustrado por la definición que da TERREROS Y PANDO (1787) en su diccionario: «HERIDA, llaga hecha por alguna caufa exterior» (p. 276,1).

La gravedad de estas agresiones quedarían registradas al detalle en los documentos suscritos por cirujanos –«fe de heridas»– como el que elaboró el cirujano don Francisco Paredes, comisionado por el Intendente para revisar las heridas de la vendedora de colación María Zevallos, a quien don Mariano Villanueva –conocido como «el tunti»– dio un sablazo en la mano por el regaño que la vivandera diera a su sobrino de por haber cogido una golosina. En el documento se refiere:

«reconoció de orden del señor Governador Ynendente á Maria Zevallos y le halló dos eridas una en la mano derecha y otra entre los dedos de dicha mano hechas al parecer con instrumento cortante ocisivo, y en el brazo izquierdo contusiones del tal instrumento y algunos barios cortes ó rasgos que estos no meresen mayor atension á esepcion de los que se hallan en la mano derecha, que procuró reparar en el modo posible para evitar cualquier

¹⁴⁶ El subrayado es nuestro.

inflamacion que le fuese dañosa. Y para mejor asierto le ha mandado sangrarse, quedando al reparo de su curacion»¹⁴⁷.

Gracias a estos documentos no sólo la existencia del daño físico quedaría patente, sino que la importancia de los mismos residiría en que, sin ellos la diferencia entre una simple injuria y una herida no podría quedar acreditada. En la «fe de heridas» no sólo se describiría el daño, sino que se haría una relación de las posibles causas, se daría cuenta de la prognosis del mal, llegando el cirujano –finalmente– a pronunciarse sobre la gravedad del daño, las medidas necesarias para la recuperación del paciente y el tiempo de reposo necesario para su total mejoría.

Como otro ejemplo de una agresión de este tipo, podemos citar la paliza que recibió Marcos Pérez, indio del solar de San Lázaro, de parte de Lucas Severiche y sus hermanos, luego de un altercado en una fiesta en la que le:

«maltrataron con puñadas, patadas y otros golpes de modo que me dejaron sin habla y que a fuerza de sangre que eché por boca y narices a causa del crecido golpe que recibí en varias partes me tuvo casi ahogado e incapaz de movimiento»¹⁴⁸.

Tratando la incidencia de este tipo de ultrajes, podemos afirmar que el número de «heridas» contabilizado resulta ser mínimo en relación al global de ataques entre particulares (7%), y en especial si se le compara con las «injurias» que alcanzan el 46% de los casos. En tanto los ataques por y contra la autoridad el porcentaje es aún menor. No se ha registrado ninguna causa de «heridas» provocadas a una autoridad, sin embargo si se dieron de forma inversa, ya que se tiene cuenta de por lo menos seis casos (4%) de agresiones provocados por autoridades que podrían considerarse como heridas. Sin embargo, la magnitud de estas vejaciones y el subsecuente daño producido harían presumir que, naturalmente, su número

¹⁴⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (3-IX-1789) «María Zeballos, viuda de Nicolás Vello por las heridas que le procurara don Mariano Villanueva» Fjs. 8 y s.

¹⁴⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (20-I-1785) «Lucas Severiche y hermanos por heridas graves en contra de Marcos Pérez».

debía ser considerablemente menor en relación a las injurias comunes, lo que hace previsible las cifras antes citadas.

Asimismo cabe señalar un dato relevante. Según la data procesada se tiene que en el período que va de 1814 a 1818 el número de heridas se dispara considerablemente (de uno a siete en promedio), para después mantenerse estable. Siendo que, según la curva de incidencia, se muestra un progresivo aumento de delitos –y en especial los de sangre– conforme se va acercando la independencia, podemos presumir que la convulsa coyuntura de la emancipación enrareció las relaciones interpersonales; esto como producto del desconcierto y el quiebre del sistema. Situación que se evidenció en una mayor tendencia no tan sólo a la conflictividad –expresado esto en el aumento en el total de enfrentamientos–, sino también a la magnitud de la violencia, esto en vista en que en este periodo se dio pie a embates de mayor envergadura¹⁴⁹.

d.1. Sevicia. Una de las formas más comunes de infligir heridas era la sevicia. Aunque no muy común en comparación a otras conductas, este abuso físico del deber/derecho de corrección correspondiente a los amos, padres y esposos es digno de ser reseñado pues casi siempre implicaba estragos de gran consideración. En las causas judiciales encontramos algunos episodios que ilustran estos ultrajes, que incluso terminaban en la muerte del castigado a consecuencia de las lesiones. Muestra de ello será lo ocurrido con el negro Pascual, esclavo de don Tomás Galindo, hacendado de Chaparra, Camaná. Según lo referido en la causa, el negro habría «muerto a fuerza de riguroso castigo [luego de habersele dado] veinticinco azotes seis días antes»¹⁵⁰, poniéndosele a trabajar luego a pesar de sus heridas. De igual manera, la mulata Eusebia Godinez sufriría la sevicia de su amo José Roa, vecino de Moquegua. El Defensor de Menor tendría que intervenir en el hecho para evitar la muerte de la esclava y proteger a sus dos hijos. Eusebia refirió en el proceso la sevicia sufrida en

¹⁴⁹ Como se ha señalado anteriormente, el hecho que en el periodo que va desde 1819 a 1824 –en pleno clímax de la gesta de emancipación– la incidencia y magnitud de las agresiones decaiga sorpresivamente, se puede explicar por la incapacidad de los funcionarios de la corona (y en especial del Intendente), para hacerse cargo con igual eficiencia de los asuntos públicos en vísperas de la independencia, por estar abocados íntegramente en tareas militares.

¹⁵⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (1792) «Don Bernardo Velarde y Calderón, contra don Tomas Galindo por injurias». Fjs 8 y s.

estos términos: «hemos complacido a nuestro amo don José y el solo hemos experimentado impiedades en todo lo correspondiente al sustento, alivo y conservación de nuestras personas [...] en otra ocasión me puso una soga en el cuello a ahorcarme»¹⁵¹.

Además de los cuadros de sevicia contra esclavos negros como los antes mencionados y a los que se ha aludido párrafos anteriores¹⁵², se evidencia que el abuso físico también se ejecutaba contra los sirvientes indios. Ejemplo de ello lo tenemos en el proceso contra Juan Francisco Fernández Dávila, dueño del obraje de la Yerba Buena en el valle de Tambo. Además de ser acusado y condenado por «contrabandista y auxiliador de buques enemigos»¹⁵³ fue culpado por el intendente y el subdelegado de Camaná por la muerte de indio –del cual no se consigna el nombre– a consecuencia de los graves castigos que le infligiera. Así refiere la sumaria: «no satisfecho con tantos excesos, cometio el de quebrar un brazo, y las costilla á un infeliz Yndio de Etmoquinto»¹⁵⁴. Asimismo, se tiene constancia de abusos sistemáticos contra trabajadores mineros por parte jefe de una zona minera. Tal fue el caso de don Ramón Sotomayor, diputado de minas de Ichuña, en Moquegua. Él fue acusado los alcaldes indios «por las crueldades que [los trabajadores indios] han sufrido por largos años por su tirano Despota y Enemigo dn. Ramón Sotomayor»¹⁵⁵. En los testimonios vertidos en el proceso se señalaban las modalidades de la sevicia: «Nos obliga a todo sin distención á trabajarle casi de balde á esfuerzos de puntapiés, palos, azotes, y Carcel. Nos exhige pagemos la pension del cupo aun de una meia cabeza de ganado que tengamos»¹⁵⁶.

Finalmente, la sevicia se daba como abuso al derecho de corrección que poseían los padres y maridos –y que incluía el uso de violencia moderada¹⁵⁷– con respecto a su familia. A pesar de sólo haberse contabilizado un único caso en el Archivo Regional de Arequipa (ARAr) en

¹⁵¹ ARAr/Intendencia/Pedimentos. Leg. 111 [1800-1810]. (11/07/1804). «El Defensor de menores contra José Roa, solicita la venta de la esclava Eusebia Godinez y sus hijos». Fjs. 1.

¹⁵² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (14-VII-1819) «Esclava María Rosa Arróspide contra su amo por sevicia».

¹⁵³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (1806) «Contra Juan Francisco Fernández Dávila, dueño del obraje de la Yerba Buena». Fjs 1.

¹⁵⁴ Ídem.

¹⁵⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (I-1824) «Ramón Sotomayor contra Domingo Mendoza y Eusevio Bejar». Fjs. 12.

¹⁵⁶ Ibídem. Fjs. 8.

¹⁵⁷ Al respecto véase Cap. 3.1.4.

el que explícitamente se alude a la sevicia¹⁵⁸; se tiene constancia de un buen número de procesos por sevicia en el Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA)¹⁵⁹, por cuanto la vía más recurrida por las mujeres maltratadas era la eclesiástica, ya que en estos fueros se denunciaba conjuntamente los maltratos como la solicitud de divorcio (léase: separación de hecho) que se presentaba como solución a estos atropellos (AMADO 2011).

d.2. Heridas autoinfligidas. Para finalizar, hemos de mencionar un caso aislado pero de digno de ser referido. Se trata del proceso seguido a Martín Sánchez, zapatero tacneño, quien al ser convocado a luchar en el ejército realista en las postrimerías del virreinato, decidió herirse la pierna con un puñal para evitar ser levado. Este hecho fue presenciado y testimoniado por Mariano Martínez, un recluta con quien Sánchez esperaba fuera del edificio del cabildo en el momento de la leva. Él declararía lo siguiente en el proceso:

«[me dijo] toma este puñal y degüéllame: que el declarante se sorprendió de semejante determinación, y en esta bio que tirando con fuerza el dho puñal, se hizo el mismo la herida que tiene en la pierna, y con el mismo puñal aun se iba a herir en la barriga. Que luego le quitaron el dicho puñal por uno de los soldados de la guardia. [...] no estuvo hebreo ni furioso y solo manifestaba allarse como colérico pues decía que sabía que lo habían traído de reemplazo, y que primero se había de degollar que salir»¹⁶⁰

3.3. Excesos, maltratamientos, atropellamientos de la autoridad y perdimientos de respeto. Acto seguido, se analizarán las agresiones realizadas por y en contra de las autoridades virreinales. Sin embargo, vale hacer una salvedad previa: no obstante que la calidad de «representante del rey» de alguno de los involucrados en dichos episodios de violencia podría considerarse como un elemento constitutivo de un aparente delito de *lesa majestad* (clasificación que está fuera de nuestro ámbito de estudio); afirmamos que –según consta de

¹⁵⁸ *Ídem.*

¹⁵⁹ AAA/Causas Civiles/Divorcio y Nulidad. Leg. 4. (23-X-1724) «Petronila Adrian contra Balthazar Uribe por divorcio»; Leg. 5. (27-X-1750) «Pascuala Hurtado contra Manuel García»; (5-VI-1754) «Manuela Quispe contra Mathias de Herrera por divorcio»; (03-III-1756) «María Josefa Balbuena contra Eusebio López por divorcio»; Leg. 6. (8-I-1767) «Sara Velarde contra Tomás Bega por divorcio»; (04-VIII-1760) «María Belarde contra Agustín Dávila por divorcio»; (31-VIII-1761) «Micaela Xara contra Vicente Chalco por divorcio»; Leg. 8. (21-IV-1787) «Isabel Vizcardo y Guzmán contra Lorenzo Saldaña por divorcio»; (20-II-1788) «María Magdalena Carballo contra Apolinar Balencia por divorcio»

¹⁶⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (07-XI-1824) «Por heridas contra Martín Sánchez». Fjs. 1v.

las propias causas— las agresiones en las que intervenían autoridades se considerarían como una modalidad más de injurias personales según la práctica forense de la época, teniéndose simplemente como una agravante el hecho que se ejecutaran desde o contra una autoridad.

Así pues, y remarcando el carácter privado de los llamados «excesos» o «atropellamientos» a la autoridad encontramos que, aunque algunas de estas agresiones se producían en el marco de la función jurisdiccional, la mayoría se desarrollaban en el contexto de una pugna de eminentemente personal; disputas en las que, sin embargo, la autoridad sacará a relucir —y algunas veces utilizará deshonestamente— su condición superior. Un ejemplo de esto lo tenemos en la gresca que protagonizarían don Antonio Bernedo, alcalde ordinario de españoles de Puquina y su hermano natural Juan de Dios. Luego de una disputa por el usufructo de unos bienes de la masa hereditaria, el alcalde golpearía con su vara a su medio hermano, reconviniéndole en nombre de su autoridad, algo que propiciaría que Juan de Dios lo golpease insistentemente y acto seguido se diese a la fuga. Finalmente, el alcalde solicitaría al intendente el prendimiento y la prisión de su pariente, insistiendo en que el hecho constituía una ofensa a la real justicia¹⁶¹. Problemas de tierras con arrendatarios o vecinos¹⁶², asuntos de agua¹⁶³, y asuntos sentimentales (que comúnmente tenían que ver con el amancebamiento)¹⁶⁴ constituirán comunes causas de conflictos con las autoridades en los que ellas actuarán como juez y parte, dictando muchas veces castigos y prisiones abusivas contra sus contrarios.

a. Secuencia, incidencia y modalidades. Del análisis, observamos que en numerosas causas de injurias cometidas por autoridades se consignan nombres como «excesos», «maltratamientos» y «atropellamientos» con el fin de designarlas. El término «maltratamiento» es el más antiguo en figurar en los diccionarios. En el de CÉSAR OUDIN (1607: 345,2) y en el de VITTORI (1609: 404,2) se le tiene como análogo a atormentar, y según

¹⁶¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (23-II-1797) «Don Antonio Bernedo, Alcalde Ordinario de Españoles de la doctrina de Puquina contra Juan de Dios Bernedo por atropellamientos».

¹⁶² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (15-X-1800) «Juan Carnero contra don Ignacio de la Granda, Alcalde Ordinario del Valle de Ocoña, por excesos».

¹⁶³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (5-III-1805) «Don Mariano Coaguila contra don Manuel Gutierrez, Alcalde Ordinario de Españoles de Puquina».

¹⁶⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (4-IV-1813) «Doña Juana Tomasa Velarde, viuda de José Murillo contra don Manuel Ramírez de Ortíz, Alcalde Ordinario de Ylo por excesos».

TERREROS Y PANDO (1787) este hecho implicaría conductas como «rasgar los vestidos [...] herir, aporrear, patear [...] tratar mal como a un perro» (p. 504,1). El mismo autor es el primero que se ocupa del término «exceso», definiéndole –entre otras acepciones afines– como «culpa, delito» (p. 130,2). En los casos de ataques ejecutados contra funcionarios de la corona, además del común uso de estos epítetos, se mencionaría asimismo en los encabezados de la querella una referencia al ataque a la autoridad, en términos como: «...contra la Real Justicia», «... contra el Alcalde»; o con la frase: «perdimientos de respeto», entre otras.

a.1. *Abuso o «excesos» de la autoridad.* Por otro lado, las ofensas y daños físicos provocados por las autoridades –comúnmente denominados como «excesos»– constituirán el 18% del total de injurias personales contabilizadas. Estos ataques, normalmente, se desarrollarían en dos momentos bien definidos. El primero se caracterizará por la disputa en sí; hablamos de controversias que se podían originar –como ya se ha mencionado– por asuntos de naturaleza privada en los que el representante de la corona fungía como particular, o de reconvenciones o mandatos propios de la función jurisdiccional y tendientes a cautelar el orden social (aunque, como se verá luego, muchos de estas disposiciones no estarían exentas de intereses personales). Estas disputas, de naturaleza eminentemente verbal, se agudizarán cuando la autoridad haría exhibición de su cargo, lo que desencadenará finalmente en una franca gresca entre la autoridad y su interlocutor. En un segundo momento, la autoridad muchas veces se retiraría del lugar en busca de ministriles, alguaciles (que muchas veces eran sus propios sirvientes), o bien echaría mano de gentes del lugar, para ejecutar –ya plenamente– su facultad correctiva ordenando se prenda, maniate, castigue y aprisione a la otra parte por su desacato e insolencia. Vemos así que en estas disputas una misma persona actuaba muchas veces –aunque guiado por un mismo interés– en dos facetas que eran difícilmente distinguibles: la de particular y la de autoridad.

Por otro lado, en algunas ocasiones, los ultrajes perpetrados por las autoridades pasarán de constituir lesiones menores a consecuencia de castigos –como los grilletes o el cepo– o de una mera golpiza, para convertirse en ataques cuyas consecuencias podrían en grave riesgo la vida de los penados. Estas «heridas» derivadas del abuso de la facultad correctiva de las

autoridades, por otro lado, constituyeron el 22% del total de «excesos» en el ejercicio de la acción jurisdiccional.

Un buen ejemplo de estos graves perjuicios relacionados con los abusos de autoridad lo tenemos en el informe que suscribirá don Gaspar de Salazar, comisionado por el Intendente para revisar las heridas de Francisco Xavier Henríquez. Dicho vecino fue sometido a crueles tratos—como haber sido apaleado, apedreado, azotado, puesto en el cepo y privado de los alimentos— por el Alcalde Mayor del valle de Chaca en el curato de Arica, y a la sazón también pariente suyo, don Luís Yáñez, a consecuencia de una disputa por agua. En el documento Salazar refiere:

«sele allaron una cicatriz echa en la misma sien según parece de pedrada y en la parte del ojo un cardenal echo segun parece de pedrada y los brazos de las muñecas acardenalados según parece de ataduras o ligaduras: otro golpe en el mismo codo entre el lagarto con mucha parte de el negro, y magollado al parecer de peligro: en las espaldas, y plumones iguales golpes con inflamaciones de dichos plumones y correspondencia de dolor a pecho según indica el paziente y patentiza las contriciones»¹⁶⁵

Más comprometedoras lesiones recibiría Lorenzo Mamani, indio tributario de Carumas, a manos de don Tomás Quintanilla, cobrador de tributos del pueblo de Carumas e Ychuña, en el partido de Moquegua. Luego que el indio y su mujer se negaran a entregar un burro para beneficio del funcionario, Quintanilla, echando mano de su autoridad lo sometería a diferentes vejaciones, entre la que se incluía el castigo —durísimo, pero frecuente— del arrastramiento:

«Después de haberlo maltratado apaleandolo con rara crueldad y cansandose en maltratarlo, lo enlaso el pescuezo y amarrando el otro extremo del laso contra la sincha de su mula, lo arrastro, por medio del sarsal de los espinos, piedras, patemás (sic.), hasta la quebrada que inisia una cuesta del pueblo [...lo soltó] y lo colgó contra un poste tendiéndole el cuerpo pendiente. [Luego de ser liberado por el camayo del

¹⁶⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (25-VIII-1786) «Don Luis Yáñez por tentativa de homicidio contra Francisco Xavier Henríquez»

agresor en la noche...] se escapó y llegó al hospital de Belem en Moquegua donde murió»¹⁶⁶.

a.2. «Atropellamientos» *contra la autoridad*. Por otro lado, las autoridades no pocas veces serían blanco de la violencia, recibiendo la peor parte en las reyertas con los particulares. Estos procesos constituyeron el 10% del global de injurias personales frente al 18% que corresponden al total de «excesos» ejecutados por la autoridad (véase cuadro 3). En estos casos, los funcionarios coloniales agredidos, más allá de hacer justicia bajo sus propia jurisdicción como era usual, acudirían al intendente exigiendo la prisión y el embargo de los bienes del agresor. Dichas causas, normalmente denominadas como «perdimientos de respeto» y «atropellamientos», se promoverían en consideración a dos hechos: la proximidad del lugar de comisión del crimen a la capital de la intendencia, y la fuga del agresor. En ambos casos la posibilidad de la ejercer eficientemente la jurisdicción se vería mermada, ya por la sustracción del imputado, o por la cercanía de una autoridad de mayor jurisdicción. Asimismo, como se desarrollará con detalle más adelante, se ha verificado un significativo incremento de estos ataques conforme se aproxima el final del virreinato (1810-1824).

Como ejemplo de estos «perdimientos de respeto» podemos citar las agresiones que recibiría Nicolás Briceño y Dávila, alcalde de aguas de Camaná de parte de Mariano y Juan Rivas, labradores, y de la esposa de éste último, Rosa Gonzáles. Luego de una disputa por la imposición de una multa, los campesinos atacarían a la autoridad «hasta llegar a herirme con un cuchillo y darme de palos», tal como el referiría en su querella¹⁶⁷. Igualmente esclarecedora, resulta la causa judicial contra Ubaldo Cabrera y Manchego por el «atropellamiento al juez» y «resistencia y oposición a la Real Justicia» en la persona de Pedro Antonio de Alatrística Almonte y Zúñiga, alcalde ordinario del pueblo de Andaray. Luego de la reconvención que el alcalde le hiciera a Cabrera por los maltratos que procuraba a su esposa por la entrega de un anillo que ésta poseía como prenda de esponsales de un anterior compromiso con José María Alvarado, y después de haberse enfrentado con él

¹⁶⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (15-IX-1799) «María la Torre, viuda de Lorenzo Mamani, contra don Tomas Quintanilla, cobrador de tributos del pueblo de Carumas é Ychuña por excesos». Fjs. 12.

¹⁶⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (1793) «Nicolás Briceño y Dávila, ayudante mayor del regimiento de la Villa de Camaná y alcalde de aguas, contra Juan de Rivas y Rosa Gonzáles».

hiriéndole el brazo con un hacha, Ubaldo Cabrera pasaría a la casa del alcalde buscando forzar su puerta. Rompiendo una ventana «se introdujo al Dormitorio de D. Pedro Antonio [...] y pretendió matarlo con un cuchillo que llevaba consigo oculto, de cuyo asesinato se pudo librar [...] por haver logrado echar mano al cuchillo aunque de la parte de la punta [...] sin embargo de que le dio un puñaso en la cara sin advertir que hacia de juez»¹⁶⁸.

Más allá de lo ya mencionado, cabe resaltar que no se contabilizaron –como sí se hizo en el caso de los «excesos»– ataques a la autoridad que provocaran gran menoscabo y que pudieran considerarse como «heridas». Es más, casi la mitad de las injurias recibidas por los funcionarios reales (40%) fueron únicamente de índole verbal. Se evidencia así que, más allá que no había gran diferencia entre el número de las agresiones físicas provocadas por la autoridad y las recibidas por ellas (véase cuadro 3), la magnitud del daño causado por las autoridades era muy superior, causando en algunos casos la muerte de los sometidos a castigos.

b. Sujetos, espacios y medios del crimen. Más allá de las modalidades antes mencionadas, consideramos importante el análisis de las funciones y cargos de las autoridades más involucradas en los hechos de violencia, así como los medios que éstas poseían para ejercitar su abusiva autoridad.

b.1. Cargos y funciones. Entre las autoridades involucradas con mayor frecuencia en estos delitos, destacan los alcaldes ordinarios. Son especialmente numerosas las causas judiciales que éstos protagonizan, apareciendo normalmente como agresores. A pesar que se deben relativizar estas cifras dado que nuestra fuente proviene íntegramente de un fuero –como es el del intendente– en el que se debatían justamente las quejas contra las autoridades inferiores y los conflictos de competencia, se hace patente el acentuado grado de conflictividad que existía entre las autoridades locales y los vecinos, sobre todo en los rincones más alejados y en aquellos lugares donde el poder económico y político estaba en mano de un muy reducido grupo de familias que constituían bloques opuestos. En los documentos se observa como

¹⁶⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (01-I-1817) «A solicitud del Procurador don Torivio Aguilar como Apoderado de Dn. Francisco Xavier de Villena y demás vecinos del pueblo de Andaray Partido de Condesuyos en esta Provincia». Fjs. 53.

estos grupos de poder local, de los que participaba el alcalde de turno, se enfrentaban movilizándolo a sus allegados que ostentaban un cargo determinado.

Por otro lado, otro grupo de autoridades muy enredado en este tipo de disputas y ocasional protagonista de hechos de violencia, sería el correspondiente a los alcaldes de naturales, o alcaldes indios. Además de algunos procesos en los que indios del común los acusan de vejaciones y exacciones injustas, son numerosos los pleitos promovidos por miembros del cabildo de naturales, caciques, y otros indios principales por supuestos abusos y arbitrariedades; hechos que, luego de un análisis más detallado de las controversias, corresponderían más bien a conflictos de poder entre grupos de intereses bien delimitados.

En esa línea citamos el proceso promovido por Tiburcio Choque contra Carlos Chipoco, alcalde de naturales de Torata. En su querella, Choque se hacía portavoz de una serie de denuncias que evidenciaban el trato autoritario y déspota del alcalde con los naturales de Torata. Sin embargo, luego de la contraquerella presentada por Carlos Chipoco, se evidenciaría un subyacente enfrentamiento entre dos facciones, la representada por el alcalde y algunas familias de indios principales, y la representada por Choque y algunos vecinos españoles e indios del común; personajes que depondrían como testigos de uno y otro querellante en el proceso. Finalmente, al manifestarse este complejo conflicto de intereses en la localidad, se dispondría simple y sumariamente el sobreseimiento de la causa y reconvendría a los querellados para que «guarden los excesos de ambos»¹⁶⁹.

Otro ejemplo de enfrentamiento entre grupos locales en el ámbito indígena lo presenta la causa seguida por el alcalde de naturales de Cayma, Juan Chrisostomo Anco, contra algunos regidores de ese cabildo de indios. En ella, entre otras vejaciones e insultos, se acusa a Domingo Calla, Tomás Quinto y Domingo Mendoza, regidores e indios principales del lugar, de haberlo injuriado en plena misa: «Llegado el tiempo de darse al Cavildo la Paz; con igual o mayor escandalo omitieron darmela [...] y con notable escandalo de la feligrecia que se hallo presente me despideron con improprio y ultrage tanto que en el propio lugar

¹⁶⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (1807) «Tiburcio Choque contra Carlos Chipoco, alcalde de naturales de Torata por excesos». Fjs. 40.

me ofrecieron bofetadas insultándome con extraordinarias provocaciones que por atención al Templo huve de disimular»¹⁷⁰. En su querella responde a un proceso previo por atropellamiento y excesos que fuera seguido por vecinos de la localidad contra el alcalde, a instancias de los regidores, evidenciándose así un antiguo conflicto entre sectores rivales dentro del ámbito indígena.

Además de los alcaldes ordinarios de españoles y los alcaldes indios, otro grupo de autoridades aparece comúnmente en la documentación judicial involucrado en todo tipo de agresiones: nos referimos a los cobradores de tributo indígena y a los diezmeros. A pesar de ser identificados generalmente como agresores –tal y como ocurriera en el caso del cobrador de tributos Tomás Quintanilla que acabaría con la vida del indio Lorenzo Mamani después de los crueles tratos a los que fuera sometido, como mencionamos líneas arriba¹⁷¹–, serían también víctimas de maltratos como consecuencia de su cargo. Este sería el caso de Carlos Málaga, cacique recaudador de tributos de Pocsi, de la parcialidad de *urinsaya*. Cuando pasaba frente a la casa de Melchora Vizcarra y su sobrina, al atravesar el camino de Yarabamba a Polobaya, ellas le gritarían una serie de insultos como «ladronazo, cobrador de tributos iniquo». Luego que éste respondiera agriamente a estas voces, el hijo de Vizcarra acometería contra él iniciándose una disputa en el que el cobrador llevaría la peor parte. Además de resultar con la camisa destrozada recibiría «una bofetada en la cara que – y tal como señala el funcionario– me embañó en sangre y me partió la nariz»¹⁷². Sin embargo, este ataque aparentemente perpetrado en función al cargo de la víctima, escondía también un conflicto previo de naturaleza privada. Así pues, en el desarrollo de la causa ambas partes aludieron a un conflicto previo debido a daños producido por el ganado a unas sementeras.

¹⁷⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (26-VI-1786) «Juan Chrisostomo Anco, Alcalde de naturales del pueblo de Cayma, contra Domingo Calla, Tomás Quinto y Domingo Mendoza, por los ultrajes e injurias efectuados a éste». Fjs. 1v.

¹⁷¹ También sería el caso de Miguel Quico, recaudador de tributos de Guanica e indio principal de aquella comunidad, quien sería acusado conjuntamente con el alcalde ordinario de abusos cometidos contra Julian Condori, natural de la comarca. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1813) «Julian Condori contra don Tomás Barrios, alcalde ordinario de Guanica por vejaciones y estropicios».

¹⁷² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (27-V-1799) «Carlos Málaga, Cacique recaudador de tributos de Pocsi contra doña Melchora Vizcarra, Vicente Herrera y Narcisa Vizcarra por atropellamientos a la autoridad». Fjs. 16.

De igual forma, conforme se iba acercando el final de la dominación española, se produjeron conflictos en el ámbito urbano de la capital de la intendencia, los que tenían como protagonistas a los comisarios de barrio. Este cargo, recientemente implementado en el marco de las reformas borbónicas para –según el paradigma cartesiano de ese movimiento–

«...conseguir un control más personal y directo sobre la población. Al ser el comisario un vecino más, estaba en la posición idónea para poder informar del vecindario y vigilarlo de una manera más personal, convirtiéndose en una figura crucial para atajar los pequeños problemas o fallos en el control de lo cotidiano, precisamente por esta cercanía con el resto de los vecinos» (APAOLAZA-LLORENTE 2015: 3).

Justamente, al estar abocado a poner orden entre la plebe urbana y por las prerrogativas que mantenía sobre ella, el ejercicio de su cargo resultaba un foco de conflictividad tal como se observa de los expedientes criminales. Desde el año 1813 y hasta el fin de la presencia monárquica en Arequipa, encontramos cuatro denuncias que refieren a hechos de violencia en los que intervinieran estos representantes coloniales, un número nada despreciable si tenemos en cuenta los pocos años en que estuvo en vigencia la figura del comisario de barrio. Algo similar encontramos en La Habana según el trabajo de APAOLAZA-LLORENTE (2015). En este lugar, el primero en donde se implementó, apenas fuera dada la reglamentación para tal efecto tuvo que suavizarse «a lo preciso y posible» para buscar evitar los abusos que se venían suscitando y hacer eficaz esta institución, como prohibir el ingreso a las casas o el prendimiento de «personas notables». El hecho que estos abusos se agudizaran hacia las postrimerías del virreinato también hace eco a otros espacios del orbe hispano, en el que por la emergencia de conflictos sociales y revueltas que luego de la invasión napoleónica se suscitaran, se planteó la necesidad de la instauración de un «régimen de policía» más eficaz (pp. 6-19).

Suponemos luego que, el aprovechamiento indebido del cargo en el caso de los comisarios corresponde a la fase final del sistema aristocrático de una sociedad de antiguo régimen como la hispana. Este sistema, basado en el ejercicio de la función pública por parte de «los mejores y más honrados vecinos», entraría en crisis justamente cuando la necesidad de

mayor control –propio del paradigma ilustrado– exigiría la participación de sectores de la población de mediana extracción social (tal como era el caso de los comisarios de barrio, y en algún sentido de alcaldes ordinarios) que por estar totalmente inmersos en el medio social que les tocaba administrar, no podrían distinguir totalmente entre la función y su interés, aún más cuando estos grupos no estaban totalmente concientizados por el paradigma aristocrático. De hecho, el punto débil de todo sistema aristocrático, que radica en la identificación de aquellos justos hombres que harán de autoridades, se ve más complicada por la irrupción de ciertos criterios democráticos que aluden a designar autoridades entre las capas más bajas de la población, como en el caso de los comisarios de barrio.

Episodios en que sus protagonistas –miembros de la plebe urbana, acreditados y ascendidos socialmente luego de su designación como comisarios de barrio– violentan a sus pares aprovechando su autoridad, podemos observarlos en dos de los cuatro casos que figuran en los documentos: el que involucra al comisario de barrio de San Lázaro en 1813, y en el que interviene el de Tingo en 1824, de resultados de asuntos meramente privados. En el primero de ellos, una chichera de nombre Juana Josefa Rosel y su familia serían agredidos física y verbalmente por el comisario y su familia cuando esta le reclamó la devolución de un «quitasol y un bastón» en su casa¹⁷³; el segundo consistirá en una lucha entre dos familias de labradores, una de las cuales era la del comisario de barrio del lugar, quien aprovechando su condición amarraría a algunos de sus rivales para azotarlos y vejarnos cruelmente. La disputa se iniciará cuando los vecinos del comisario se aprestaban a levantar una pared, a lo que éste se acercaría a ellos exigiendo la devolución de «dos ó tres piedras negras que suponía suia»¹⁷⁴.

Asimismo, como otros representantes de la corona involucrados en hechos violentos –pero ya en menor número– podemos nombrar a los alcaldes de aguas, quienes por su función, se veían envueltos en estos sucesos ya que las disputas por los turnos de regadío –vitales en una sociedad agraria– eran focos permanentes de conflictividad. Asimismo, otros

¹⁷³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (12-XII-1813) «Juana Josefa Rosel contra don Manuel Dávila, comisario del barrio de San Lázaro y su muger Manuela de tal». Fjs 1.

¹⁷⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (12-VIII-1824) «Francisco Oblitas contra Pascual Chavez, Comisario de Tingo y su familia por injurias reales y verbales». Fjs. 1

representantes de la administración virreinal involucrados en disputas serían los alcaides de la real cárcel de la ciudad¹⁷⁵, y los encargados del puerto de Arica, más conocidos como «guardamares»¹⁷⁶.

b.2. Instrumentos de la violencia desde la autoridad. Más allá que los medios con que se materializaba la violencia hacia las autoridades –hablamos de los «perdimientos de respeto»– eran los comunes a todos los miembros de la sociedad, tales como piedras, palos, vías corporales, y que serán examinados en un acápite posterior, vale la pena distinguir y analizar entre los muy particulares medios con que se ejecutaban los abusos o «atropellamientos» perpetrados por la autoridad.

Más allá de los medios habituales con que se efectuaban las lesiones, y al uso de la vara de alcalde nombrado en líneas precedentes, al considerar los daños infligidos por los funcionarios de manera abusiva debemos citar medios extraordinarios como los propios de la actividad jurisdiccional; herramientas que utilizadas de forma excesiva o injusta se convertían en los medios de violencia específicos de estas modalidades. Así pues, nos referimos de instrumentos punitivos típicos y usuales como serán el cepo, los grilletes –o como se les denominaba en la época: «los grillos»– y los azotes; otros medios menos comunes serán la carlanca¹⁷⁷ y las anillas. Sin embargo, será la prisión, ejecutada muchas veces en espacios privados tales como la casa del alcalde, el medio afflictivo por excelencia; aquel que sumado a las privaciones de alimento y bebida con que muchas veces venía deliberadamente acompañado, constituía un verdadero tormento y causa de grandes daños a la integridad física (BELAN y CONDORI 2017). Otras medidas punitivas menos usuales, aunque más crueles, serían los ya mencionados «arrastramientos» y «colgamientos»; prácticas consistentes en atar de los pies al individuo de un caballo o mula y conducirlo por matorrales, pendientes o pedregales, en el caso de la primera, y colgar al penado en un poste

¹⁷⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (25-V-1806) «Don Manuel Pérez, cadete del regimiento de infantería contra Nicolás López, alcaide de la Real Cárcel de ésta ciudad, por las injurias cometidas en la persona de su esclavo Gregorio».

¹⁷⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (02-V-1806) «José León Carbajal, del gremio de mar de la ciudad de Arica, contra don José Vicente Galves, Guardamar del puerto por injurias».

¹⁷⁷ Collar ancho y fuerte, erizado de puntas de hierro, que preserva a los mastines de las mordeduras de los lobos.

de las extremidades superiores o inferiores por un tiempo considerable, en el caso de la segunda.

b.3. En las postrimerías del dominio colonial. De la revisión de las causas judiciales, y como ya se ha mencionado, se ha advertido un notable incremento de episodios de violencia en general, y en especial entre las autoridades y los vecinos al final del período, concretamente entre los años 1814 a 1824. A pesar que se tiene constancia de «atropellamientos» de la autoridad y de «perdimientos de respeto» en todo el lapso de estudio, reparamos en que las agresiones se incrementan de manera acentuada en los últimos años del virreinato (véase gráfico 2). En esta tensa última etapa, tanto la cantidad como la gravedad de las injurias con respecto a la autoridad se acentúan. Parece ser que el debilitamiento del sistema colonial se presta a que los valores típicos de una sociedad jerarquizada se resientan, reflejándose esto en cada vez mayores cuestionamientos a la figura de la autoridad.

A pesar de ser raros los casos en los que se alude a la coyuntura de la independencia como relativa a las manifestaciones de violencia (la excepción la encontramos en 1814, en la causa promovida el comisario de barrio en contra Manuel Medina y su cómplice Julián –apodado «medio corpiño»–, en la que se les acusa de agitar el barrio de San Jerónimo como «sublevados»¹⁷⁸), muchos casos darán cuenta de un cada vez más marcado desprecio a los representantes del Rey. Situación que se evidencia en el tenor de las injurias proferidas, como la expresada por don Mariano Benavides, quien en un remate «que se hizo de la pencion de guanos de puertos» en Arica, y luego de discrepar sobre el modo en el que se llevaba a cabo, referiría públicamente que el funcionario encargado –el guarda caminero de la Real Aduana don Pedro Rosel– «que [él] y todos los demás guardas camineros estafábamos del real erario sinquenta mil pesos en cada año»¹⁷⁹. Con mayor desprecio a la autoridad se manifestaría Nicolás Salinas cuando sería increpado por el juez de arrieros Manuel Talavera sobre la prestación de un servicio de trabajo que debían cumplir sus peones. Talavera referiría el atropello de la siguiente manera: «hecho presente era yo oficial de citado

¹⁷⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (10-VII-1814) «Manuel Villafuerte, ayudante del comisario del barrio de san Jerónimo, contra Manuel Medina por injurias».

¹⁷⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (11-X-1819) «El capitán Mariano Benavides contra don Pedro Rosel, Guarda Caminero de la Real Aduana por injurias verbales».

regimiento como Juez de Arrieros; me contesto: Seria oficial de mierda, y Juez de Mulas hasta los extremos de resolverse a atropellar a mi persona con el Cavallo»¹⁸⁰.

Las más frecuentes requisas —especialmente de mulas para el transporte del ejército— que se iniciaron en 1814 en la coyuntura de los enfrentamientos con las tropas patriotas, hicieron que la relación de las autoridades y los miembros de la plebe fuera cada vez más tensa, llegando a suscitarse esporádicos episodios de agresiones. La disputa más temprana de este tipo la encontramos en 1817. El hecho es como sigue: por el apremio de mulas para el envío de 200 hombres para Arica al mando del Coronel Francisco Xavier Olarria, el intendente dio orden de embargo de 30 mulas en cada pueblo de las proximidades de Arequipa. Siendo que en Tiabaya no entregaron más que quince, y al requerir el juez de arrieros Manuel Talavera —mencionado en el párrafo anterior como protagonista de otra querrela— la entrega de los animales a los vecinos de la localidad, sería agredido por el sargento Mateo Laso de la Vega con quien se trabaría una disputa que se prolongaría por algunos días¹⁸¹. Años después, la más tardía mención de este tipo de altercados la encontramos en 1823: en dicha causa, Santos Serpa, comisario de Characato sería golpeado por los arrieros José Torres y Antonio Sosa cuando éstos se negaran a la incautación de una mula «para uso de la Nación» como transporte de tropas¹⁸². Otras exacciones y requisas serían las de ganado como forma de pago de contribuciones y tributos, cada vez más celosamente requeridos por el fisco¹⁸³.

La presencia cada vez más frecuente de mandos militares en ciertos lugares, y su intromisión en asuntos de naturaleza civil, sería muchas veces sería recelada por los grupos de poder local cuyo desarrollo mercantil y preponderancia social venían siendo resentidos por sus disposiciones; sectores que finalmente promoverían querellas e incriminarían a las

¹⁸⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (23-III-1820) «Manuel Talavera contra Nicolás Salinas por injurias». Fjs. 1v.

¹⁸¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (30-IX-1817) «Dn. Manuel Talavera, juez de harrieros contra el Sargto. Mateo Laso Lujan y su mujer Da. Asencia Ramires por injurias».

¹⁸² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (5-XI-1823) «Santos Serpa, Alcalde comisario de Characato por atropellamiento a la autoridad contra José Torres y Antonio Sosa». Fjs. 1.

¹⁸³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (20-III-1818) «Sumaria criminal formada por el Alcalde Ordin° de Vitor dn. Calisto Caseres contra dn. Miguel Rodrigues por falta de respeto»; Leg. 92. (20-VIII-1824) «Ignacio Benavides contra Mariano Goyzueta por injurias verbales»; (29-XII-1819) «Remitido por el Alcalde Ordinario de Yanaguara atenta la declinatoria de jurisdicción del Soldado dela Concordia dn. José Leon y Aro, contra quien en aquel Juzgado havia iniciado causa criminal el Teniente de Cura dn. José Delgado».

autoridades castrenses de abusos apara así apartarlos de su zona de influencia. Un caso concreto que da cuenta de esto lo encontramos en la querella que interpondrían en 1815 algunos miembros el cabildo de naturales, el presbítero y un puñado de vecinos del pueblo de Sabandía contra Juan Pablo Rosado, sargento comisionado a aquel paraje, a quien se imputaban los cargos de abusos contra los vecinos y sedición contra la Corona. Luego de sustanciada la causa, quedaría patente que esta sería impulsada como represalia a ciertos castigos impuestos por Rosado por el desacato sistemático de dos de los querellantes a sus labores militares; los cuales, finalmente, serían condenados a dos días de carcelería y a silencio perpetuo luego que se declarara su denuncia como calumniosa¹⁸⁴.

c. La violencia de las autoridades locales en la encrucijada de la lucha por el estatus. Muy lejos de lo que podría pensarse, lo público –entendido esto como racionalidad política que busca trazar parámetros en existencia humana– tiene muy poco que ver en los episodios de violencia ejecutados por las autoridades en los ámbitos más periféricos –tanto espacialmente como por escala jerárquica– de la vida social arequipeña a finales del S. XVIII. Muchos de los excesos cometidos por los funcionarios contra los vecinos no tenían mayor cálculo que el interés privado, dirigido las más de las veces a mantener o conseguir ventaja económica y reconocimiento social.

Un buen ejemplo de esto ocurriría en 1810, en el valle de Tambo. Estando el alcalde ordinario de la localidad, don Juan Valdivia, en la boca del río disponiéndose a pescar en compañía de un zambo sirviente suyo, entró en disputa con el teniente alcalde de aguas del lugar, llamado Dionicio Peralta, por la propiedad de un chinchorro que estaba utilizando; asunto que, en medio de una disputa verbal, degeneró en que Peralta sea agredido ferozmente por el zambo. Cuando el alcalde de aguas logró una providencia para encarcelar al sirviente que lo había maltratado, el alcalde no sólo desconocería la orden, sino que injuriaría y golpearía directamente a Peralta¹⁸⁵.

¹⁸⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1815) «Don Julian Sevallos y don Ramón Evia contra el sargento Juan Pablo Rosado, sargento de los de Chiguata».

¹⁸⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (15-X-1810) «Don Dionicio Peralta, Teniente Alcalde de Aguas del Valle de Tambo contra don Juan Valdivia, Alcalde Provincial de Tambo por injurias».

c.1. Las autoridades locales y su relación con el intendente. Por otro lado, un hecho es digno de tenerse en cuenta para situar el panorama de violencia ejercido o recibido por las autoridades locales: siendo que –según lo testimonian los documentos oficiales– las directivas y las políticas de la Corona, encausadas y establecidas por altos funcionarios como el intendente, prácticamente se diluían en las zonas periféricas donde su capacidad de coacción era francamente restringida, los representantes coloniales orientarían sus esfuerzos a establecer una tácita alianza con los grupos hegemónicos de una localidad, con el fin de procurar un muy cuidado equilibrio entre los intereses de estos sectores –muchos de ellos clanes familiares– y las políticas del reino; esto, en vista que ellos, finalmente, eran los que poseían la capacidad de hacer realidad las pretensiones de la Corona en los confines del orbe hispano. Sin embargo, los enfrentamientos entre los diferentes grupos de poder complicaban este panorama, generándose así una suerte de abuso sistemático de los cargos con el objeto de perjudicar a los sectores rivales; disputas que en otras ocasiones enfrentarían a diferentes autoridades locales (alcaldes ordinarios, párrocos, alcaldes de naturales, de aguas, caciques, recaudadores) o vecinos notables que habían accedido anteriormente a esas dignidades. La situación era compleja y cuando ésta degeneraba en violencia abierta, las denuncias y quejas ante el intendente no se hacían esperar. En la capital de la intendencia, sin embargo, la actitud casi siempre era recelosa y contemporizadora. Normalmente se alargaba deliberadamente las diligencias para aquietar la situación, se comisionaba a un delegado ajeno a la localidad que actuaba con afán conciliador, y, finalmente, se llamaba a la concordia y a la convivencia pacífica entre las partes mediante una resolución sumaria, como un decreto simple; situación que no se cumplía muchas veces, tal como lo manifiestan nuevas causas promovidas por los mismos personajes.

La tensa relación entre los representantes de la Corona –normalmente peninsulares– y los grupos de poder criollo, y la fragilidad del acuerdo de intereses entre las políticas reales y las ambiciones de los sectores locales se evidenciaría en toda su dimensión en el gobierno de Bartolomé María de Salamanca, quien luego de impulsar una política reformista que respondiera al espíritu modernizador de su época y continuara la emprendida por su antecesor, Antonio Álvarez y Jiménez, no sólo se toparía con la resistencia en forma de inacción por parte de los criollos desde el Cabildo de la ciudad, sino que, finalmente, sería

separado de sus cargo luego que la presión de los grupos más poderosos exigieran a la Corona su destitución, imputándole cargos de corrupción y abusos (FISHER 1968). Así podemos explicar la debilidad y aparente inacción del intendente en estos conflictos locales –traducidos en causas criminales– entre sectores rivales que se disputaban el poder en la periferia, manteniéndose cautamente al margen para evitar cualquier menoscabo en la relación con los principales de la región.

c.2. Luchas de poder e injurias de la autoridad. La distinción entre el ámbito público y privado en el ejercicio de la autoridad resultaba tan ambigua que, casi siempre, muchas de las reconvenciones o llamadas al orden se inscribían en manifiestas o veladas disputas por intereses locales. Muestra de ello lo encontramos en el conflicto existente entre dos vecinos notables del valle de Sigüas, en 1816. Bartolomé Gill, receptor de reales rentas unidas, y el alcalde ordinario del valle, don Tomás Zambrano, se enfrentarían acusándose mutuamente de defraudación y abuso. El conflicto iniciaría luego que el alcalde desterrara a la amante de Gill y llamara la atención de éste por su vida escandalosa, a su vez éste en represalia lo denunciaría por usurpación de los reales derechos de alcabala y por otros abusos:

«que tomando el nombre del Rey ha oprimido a todos los vecinos perjudicándoles en el acopio de bacas, de las viudas y pobres dándoles lo que quiso no en el precio justo: en el acopio de mulas para el transporte de las tropas de Extremadura que pasaron por este valle al ejército del Alto Perú; reservando solo a sus parciales [...] les consta que encarcela a los pobres un quan sin motivo y les exige por los derechos beinte y un reales de Carcelaje»¹⁸⁶

Asimismo, la pugna por los cargos dentro de una localidad generaría conflictos entre los vecinos, quienes se verían atacados cuando no se prestara el apoyo para éste efecto y luego que accediera a la vacante. Este será el caso de María Torres, chichera de Yarabamba, quien se quejara de las injurias que perpetrara contra ella don Norberto Arenas, entre otras cosas, por no haber aceptado ser su fiadora para ser cobrador de diezmos¹⁸⁷.

¹⁸⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (12-X-1816) «A solicitud de dn. Bartolomé Gill contra don Tomás Zambrano por usurpación de reales derechos de alcabala, injurias y otros excesos». Fjs. 10.

¹⁸⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (18-I-1798) «María Torres contra don Alberto Arenas, por injurias».

El tener como aliado a un funcionario real en esta lucha por ventajas sociales y económicas resultaba clave, es por eso que también era común que la facción opuesta sostuviera acciones que, acusando a un determinado funcionario de falsos o exagerados cargos, pretendieran su separación del cargo. Estos se realizaban mediante procesos individuales en los que subalternos (jornaleros, peones, empleados o clientes) impulsaban, aduciendo abusos y maltratos, así como también eran presentados de manera colectiva por el grueso de la facción mediante un largo petitorio que, más adelante buscaría ser rebatido por los testimonios de individuos del bando opuesto.

Un ejemplo de ello lo tenemos en el proceso promovido por el negro liberto Luis Portales contra el alcalde ordinario de Locumba, Tadeo Rospigliosi y Bustos, en el que lo acusaba de haber maltratado a su esposa María Castillo hasta el punto de quebrarle el brazo dándole de palos¹⁸⁸. En la causa, que finalmente sería archivada, se aludiría a la enemistad que el alcalde mantenía con Gregorio Zilba a partir de haber iniciado un pleito por «perdimientos de respeto», y que también figura en el archivo. En esta causa se refiere que, cuando el alcalde procedía a allanar la casa de Zilba en busca de ladrones con la excusa de ser el lugar de ocultamiento y receptación de los bienes, «continua garita de juego» y espacio en el cual sus hermanas operaban como meretrices, el alcalde sería maltratado gravemente, por lo que iniciaría un proceso a fin de ponerlo en prisión¹⁸⁹. Según el alcalde, tiempo después al hecho, y en represalia, Zilba se valdría del negro Luis Portales, miembro de su camarilla, para que le inicie un proceso calumnioso con el objeto de que sea temporalmente privado de su vara el tiempo que dure la sumaria y así entorpecer la investigación en su contra.

La identificación de la autoridad a un sector concreto, y la alta rotación de los cargos –puesto que se elegían periódica y alternativamente como funcionarios a miembros de uno u otro grupo rival–, generaba que la figura de la autoridad local en general –y del alcalde ordinario, en particular– se viera muy deslegitimada, lo que quedaría patente por las muchas agresiones e injurias a las que los representantes de la corona se veían expuestos, y por los comunes

¹⁸⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (6-VIII-1792) «Luis Portales contra el alcalde ordinario de Locumba Tadeo Rospigliosi y Bustos, por injurias contra su esposa María Castillo».

¹⁸⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (17-XII-1792) «Tadeo Rospigliosi y Bustos, alcalde ordinario de Locumba, partido de Arica contra Gregorio de Zilba por perdimeinto de respeto». Fjs. 1v.

desacatos de sus órdenes¹⁹⁰. De otro lado, para compensar su debilidad y apuntalar su menguado prestigio, la autoridad local desplegará dos estrategias: la primera, intervenir más activamente en la vida social de la localidad mediante el dictado de órdenes o directivas, muchas de ellas absurdas; y la segunda, ejercer la facultad punitiva con rigor, llegando muchas veces a la sevicia o a muestras de violencia gratuita.

Como muestra de directivas arbitrarias y extravagantes dadas por algunos alcaldes ordinarios, encontramos dos casos singulares: En el primero encontramos al alcalde de naturales de Torata, Carlos Chipoco, quien sometería a maltratos a Simón Mamani y a Ysabel Céspedes por oponerse la orden del alcalde que disponía que asista a una misa diferente a la que concurriera la autoridad¹⁹¹; igualmente, el alcalde de Chiguata Pedro José Rivera y Prado se enfrentaría a Valentin Moscoso cuando éste desoyera la orden del alcalde que lo obligaba a «prestar a su hijo» Gregorio, para que acompañara a un sacerdote que pasaba de camino de Sabandía¹⁹². Por otro lado, a pesar de ser numerosos los ejemplos al respecto, un caso que ilustra muy bien el rigor del que algunas veces desplegaban los funcionarios locales contra los vecinos con el fin de afirmar su autoridad. Se trata de los «atropellamientos» que el alcalde de Tiabaya, Alejandro Alvarado, consumara contra Paulino Moscoso, su esposa y su hija:

«pues por solo haber resistido la mujer de este [Moscoso] la entrega de un burro, [que demandaba en propiedad un tercero llamado Faustino Rivera, trabándose una disputa entre ambos] la hizo amarrar en su misma chacara [...] para llevarla á la cárcel de Tiabaya; y como su marido Moscoso viniese á defenderla, lo hizo también amarrar a él de pies y

¹⁹⁰ Al respecto citamos: ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (27-V-1799) «Carlos Málaga, Cacique recaudador de tributos de Poci contra doña Melchora Vizcarra, Vicente Herrera y Narcisa Vizcarra por atropellamientos a la autoridad». Leg. 88. (V-1806) «María Baldivia, viuda de Ylario Nuñez contra Marcos Riveros, Alcalde Ordinario de Socabaya por atropellamientos». Leg. 92. (1820) «Promovidos por Tuco y Caya contra el Alcalde de Puquina Dn. Manuel Gutierrez».

¹⁹¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (1807) «Tiburcio Choque contra Carlos Chipoco, alcalde de naturales de Torata por excesos».

¹⁹² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86 (18-XI-1799) «Criminales promovidos por dn. Pedro José Rivera y Prado, Alcalde Ordinario de Chiguata contra Valentin Moscoso, Diego, y Carlos Ramos, Vecinos de aquel pueblo».

manos, y á ambos los condujo así arrastrados hasta dicha cárcel donde los hizo poner en el sepo y así los mantiene incomunicados»¹⁹³.

Finalmente, el alcalde conduciría a prisión a su hija de 12 años, y ya en la cárcel la familia será impedida de tomar el alimento. Francisca, al ser llevada la cárcel fue agredida por orden del alcalde, dándosele de patadas en el trayecto por quienes hacían de alguaciles.

Otro ejemplo de extremo rigor mostrado por una autoridad, en este caso sustituta, con el objeto de reforzar su jerarquía, lo encontramos en la actuación del alcalde ordinario sustituto de Uchumayo, Pedro Delgado, acaecida en 1819. La situación es como sigue: Timoteo Mendosa, labriego de Uchumayo, mantenía una deuda de algo más treinta pesos con una vecina; habiendo perdido el proceso, el alcalde ordinario sustituto pretendió confiscarle una mula para el pago de esa obligación. Ante la resistencia de María Chaves, esposa de Mendosa que a la sazón estaba embarazada, el alcalde sustituto la trataría severamente, llegando causarle graves daños que referirá su esposo de la siguiente forma:

«...la injuria, la atropella, y viéndola en Sinta de un modo que no se puede ocultar, pues se halla en los siete meses, la arroja contra un Peñón que situado en una ladera forma a puerta del pesebre: [...] Se halla pues desde el jueves al amanecer arrojando muchísima sangre, dislocadas las dos últimas costillas que cubren el vientre, con fiebres que le ha sobrevenido, y por estos síntomas fatales, se cree evidentemente que el Feto sino há perecido, perecerá, y con la madre que lo mantiene»¹⁹⁴.

c.3. La lucha por la moral pública como estrategia de poder local. Una de las maneras comunes de ejercer presión por parte de las autoridades locales era la erradicación del amancebamiento. Una de las facultades del alcalde ordinario era el velar por la moral y la buena conducta de los vecinos de su jurisdicción, y dentro de las prácticas deshonestas más usuales, el amancebamiento o las relaciones adulterinas continuadas y escandalosas

¹⁹³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92 (20-XII-1820) «El soldado de caballería Paulino Moscoso se queja de los atropellamientos que á él, y á su muger les há inferido el Alcalde de Tiabaya dn. Alejandro Alvarado». Fjs. 3.

¹⁹⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92 (14-VII-1819) «Timoteo Mendosa y su esposa contra el Alcalde sustituto de Uchumayo». Fjs. 1v. y 2.

constituían el problema más resaltante y de más difícil solución¹⁹⁵. Esta realidad no era nueva y fue conocida por el nombre de «tropicalización»; ya desde los inicios del virreinato se conocían en España a las tierras de ultramar como «el paraíso de Mahoma» por la gran proliferación de estas prácticas, conducta en que incurrían todas las clases sociales y los diferentes grupos étnicos¹⁹⁶, siendo que la pena más impuesta por la Inquisición limeña será la de bigamia (20.1% de los casos), cifras que aumentan significativamente en el período que nos toca tratar (1700 a 1820) (HAMPE 1995). Inclusive, los documentos dan cuenta que personajes encargados de velar por la moral de la población –como el alcalde ordinario– estaban lejos de constituir un ejemplo de virtud, ya que mantenían relaciones ilícitas con mujeres casadas o doncellas, estando ellos casados.

Así pues, aprovechando esta extendida práctica, algunas autoridades locales aplicaban correctivos severos o ponían en prisión a sus rivales en un momento determinado acusándolos de amancebados, a pesar que en muchas ocasiones esta conducta inmoral y pública se había iniciado hacía años, manteniéndose en el tiempo gracias a la omisión de la autoridad, para ser perseguida tan sólo cuando se manifestó un interés de neutralizar a un rival. Como ejemplo de ello, podemos citar la causa seguida por Bartolomé Barrios contra Manuel Gastañeta, Alcalde Ordinario de Sigüas. Barrios mantuvo una deuda con su arrendatario y hacendado Martín Velásquez; el alcalde, adicto al hacendado, dispuso el pago de la deuda a pesar que Barrios señalaba que ya estaba saldada (consolidada) por una acreencia previa que le tenía Velásquez. Habiendo interpuesto queja Barrios contra el alcalde por el embargo de varios bienes, este «enfurecido procedió contra [él] y assi lo há puesto

¹⁹⁵ Como ejemplo de las dificultades que tenían las autoridades para mantener la moral sexual dentro de los parámetros, podemos señalar el episodio de violencia que sufriría el alcalde ordinario de Guasacachi y Tingo, Manuel Ascuña. Saliendo éste a hacer ronda en la noche, encontró al soldado José María Barriga «cometiendo un acto torpe con Petrona Barriga» a los cuales resonó censurando su actitud, ante lo cual Barriga respondería descargándole dos garrotazos, para finalmente huir mientras le daba de pedradas. Al reiniciarse la persecución, y siendo Barriga detenido nuevamente en casa de la hermana de su «amancia», saldría al encuentro del alcalde y su comitiva con un sable desnudo, para luego tomar «un palo con el que irio gravemente en la cava a Pedro Josef Chacon» quien era parte de la escolta. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91 (01-IX-1816) «Criminales de oficio contra José María Barriga por atropellamiento a la Real Justicia en la persona del Alcalde ordinario de Guasacachi d. Manuel Ascuña». Fjs. 2.

¹⁹⁶ Se ha contabilizado que del total de agresiones relativas a la autoridad («excesos de la autoridad» y «perdimientos de respetos»), nueve tuvieron que ver con casos de amancebamientos o adulterios; hablamos pues del 18.75% del total con respecto a ese tipo de violencia.

preso, y en el Zepo en aquel Valle de Ziguas» acusándolo de estar amancebado con Flora Campos, mujer casada¹⁹⁷.

¹⁹⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85 (13-XI-1786) «Querella de Bartolomé Barrios contra dn. Manuel Gastañeta Alcalde Ordinario de Sihuas de Cailloma». Fjs. 1.

CAPÍTULO III

ESPACIOS, ÁMBITOS, INSTRUMENTOS DETRÁS DEL CRIMEN DE SANGRE.

1. ESPACIOS: HACIA UNA CARTOGRAFÍA DEL DELITO.

1.1 *Generalidades. Discerniendo lo «urbano» y lo «rural».* Establecer diferencias entre lo urbano y lo rural según parámetros actuales resulta inútil en el contexto de la Arequipa virreinal, ya que los límites entre estos ámbitos eran muchas veces indistinguibles en una sociedad agraria¹⁹⁸. Por ejemplo, en el caso de la ciudad cabeza de partido, es difícil establecer fronteras entre espacio que ella comprendía propiamente –las célebres cuarenta y nueve manzanas– y los pueblos aledaños que prácticamente quedaban comprendidos en el espacio de la ciudad. Esto se debió, fundamentalmente, a dos causas: primero por el hecho que la ciudad fuera fundada en un espacio rural (las tierras de los indios *yarabayas*) transformándose así progresivamente el «suelo agrario en suelo urbano» (GUTIERREZ 1992: 26), asunto que quedaba patente en la gran proliferación de huertas y corrales contiguos los solares¹⁹⁹; ya sea también porque la movilidad entre las aldeas vecinas y la ciudad era tan fluida que estos dos espacios quedaban íntimamente ligados²⁰⁰. Luego, como consecuencia de ello y a diferencia de lo que ocurría en el resto de la intendencia, la autoridad del gobernador intendente –residente en Arequipa– estaba muy presente en estos asentamientos periféricos, lo que se tradujo en un número considerable de procesos que eran sustraídos de la jurisdicción del alcalde ordinario para entrar a conocimiento de la máxima autoridad regional.

¹⁹⁸ Recordemos que, en el s. XVIII específicamente, el desarrollo económico de la ciudad está basado en el mercado local de provisiones (trigo maíz, papas y alfalfa), y sobre todo, en la explotación vitivinícola en los valles costeros que satisfacía las necesidades de Potosí (BROWN 2008; DAVIS 1984), sobre el particular Pereyra y Ruiz en 1816 señalaba: «Arequipa há tomado el mayor incremento: atribúyolo al adelantamiento de la Agricultura, cuyo ramo ha llegado á mas perfección que en otras partes [...] Tanto en Arequipa, como dos legüas en circunferencia de la Ciudad todas las tierras son de regadío y panllevar no pudiendo extenderse mas su cultivo por no alcanzar el agüa de su Rio» (CARRIÓN ORDÓÑEZ 1983: 380).

¹⁹⁹ Al respecto TRAVADA Y CÓRDOVA (1958 [1752]) menciona: «son las casa por lo general capaces, bien dispuestas, de dos patios y raras o ningunas son las que carecen de corrales y huertos [...] haciéndolas de campo con expandidos huertos» (p. 86).

²⁰⁰ Nuevos emplazamientos que se encontraban en el límite de lo «urbano» y lo «rural» fueron apareciendo en los espacios entre la ciudad y las aldeas aledañas. En este sentido GUTIÉRREZ (1992) advierte que en el S. XVII «Hacia la campiña se fueron formando no sólo caseríos reduccionales sino una red de caminos y acequias que permitieron una ocupación efectiva y eficaz del territorio [...] tendiendo a integrar en ese periodo a los núcleos indígenas adyacentes» (p. 47; 51).

En realidad, discernir estos dos espacios sólo es posible por una abstracción forzada, ya que podemos encontrar tanto enclaves urbanos en espacios mayoritariamente rurales, como también apéndices rurales en zonas urbanas. Esta simbiosis se debía a que muchos propietarios –grandes, medianos e incluso pequeños– tenían domicilios en las ciudades cabeza de partido o en la propia capital de la intendencia. Asimismo, las redes familiares y de clientela hacían posible la alta movilidad entre campo, encontrándose numerosos casos de individuos que por asuntos de diversa índole –comercial, administrativa o personal– pasaban sucesivas y prolongadas temporadas en las ciudades y pueblos más importantes, hospedados en casa de sus parientes o allegados. Un punto adicional que indiferencia aún más los límites entre lo rural y lo urbano en la sociedad arequipeña de fines del s. XVIII radica en el hecho que, si bien muchos vecinos tenían su morada en residencias ubicadas en sus campos, aparentemente aisladas de sus vecinos más próximos, la propia movilidad impuesta por la vida cotidiana hacía que su interacción en las aldeas próximas –donde la mayor densidad de viviendas las podría identificar como un foco urbano– las integraba prácticamente a este espacio, como lo menciona CHAMBERS (2003).

Los espacios que podemos señalar como propiamente rurales, son aquellas ocupados por comunidades indígenas –normalmente de los partidos de Cailloma y Condesuyos– que, dada ubicación en zonas altas, mantenían una organización social y dispersión de hábitat típica del entorno rural, además de mantener una comunicación mucho más menguada de los entornos propiamente urbanos más próximos. Su condición rural hacía, entre otras cosas, que la presencia de la autoridad virreinal y su jurisdicción en graves asuntos criminales sea excepcional, interviniéndose sólo en asuntos graves como homicidios y tan sólo después de un buen tiempo de ocurrido el suceso. Situación que se evidencia, entre otras fuentes, en el asesinato de Francisca Gutiérrez en Chivay²⁰¹; de Mauricio Pumacoto en Turucani, Chiguata²⁰²; y de María Arequipa, en la Puna de Viñocaya en Yanque²⁰³.

²⁰¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1810) «Copia de la sentencia de vista pronunciada en contra de Cipriano Herrera por el homicidio cometido en contra de su esposa Francisca Gutiérrez».

²⁰² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1810) «Contra Miguel Pumacoto por parricidio contra Mauricio Pumacoto».

²⁰³ ARAr/Intendencia/Criminal (22-III-1812) Leg. 90. «Marcelo Ccasa por el homicidio cometido en la persona de su muger María Arequipa».

A pesar de las consideraciones antes expuestas, por efectos metodológicos se ha tenido bien el discriminar el ámbito «urbano» y «rural» ateniéndonos al lugar concreto donde se cometió el hecho. Así pues, si un altercado se produjese en el contexto de una faena agrícola, en una chacra o aldeaño, o cuyo móvil estaba relacionado a las tareas del campo, se ha tenido a bien calificarlo de conflicto «rural».

Teniendo en cuenta ello, observamos que el 21% del total de conflictos analizados se perpetraron en un ámbito rural, destacándose así sobre otros espacios de perpetración (véase cuadro 9). Luego, si bien el 43% de los enfrentamientos ocurrieron en una zona urbana, es decir en calles o plazas de las aldeas, pueblos, ciudades o la capital de la intendencia, es significativo que el 21% del total de contiendas entre vecinos se haya dado en un espacio eminentemente rural.

1.2 *En los límites de la intendencia: el crimen de sangre en los pueblos y aldeas.*

a. Incidencia. Partidos y crimen. Haciendo un análisis numérico de la incidencia de crímenes teniendo como parámetro la demarcación espacial del periodo, encontramos que el mayor número de injurias y homicidios lo encontramos en la ciudad de Arequipa (46%). Esta cifra resulta comprensible tanto por la densidad de su población, tanto porque la capacidad de judicializar los crímenes era mayor según la proximidad a la capital de la intendencia, por encontrarse allí la sede jurisdiccional. Esto explica también que un gran porcentaje de las causas provienen del partido de Arequipa (26%), ya que la jurisdicción del intendente se hacía efectiva en los pueblos aldeaños a la capital, como son Paucarpata, Socabaya, Tingo, etc. (Véase cuadro 10).

Por otro lado, partidos como Camaná (11%) y Moquegua (6%) tendrán los porcentajes más significativos en tanto incidencia de delitos. Dada la cercanía de estos partidos a la capital de la intendencia, su preponderancia política y económica —en sus valles se producía la mayor

parte del aguardiente que sería comercializado a Potosí– y al tener una buena cantidad de criollos y mestizos como vecinos, muchas de las causas provenientes de estas jurisdicciones se ventilarían en la sede de la intendencia. Así pues, luego de Arequipa, la mayoría de las causas promovidas contra autoridades locales por vecinos notables provienen del partido de Camaná y Moquegua. Esto apunta a la existencia de varios grupos de poder local –favorecidos por la producción de aguardiente– que se enfrentaban por ejercer hegemonía en su radio de influencia.

No obstante lo antes mencionado, en el caso de Moquegua, al ser la zona con mayor población luego del partido de Arequipa, es posible deducir que –más allá que las cifras reflejen más la capacidad de judicialización de los conflictos que la cifra real de violencia– el número de episodios de crímenes personales era alto en este partido.

Por otro lado, se evidencia que la conflictividad en estos dos partidos –como en todos los restantes– estaba fuertemente ligada a los ambientes rurales o periféricos, ya que alrededor del 70% de delitos se perpetraban en estos ámbitos (véase cuadro 11). Interpretamos este hecho relacionándolo con el alto grado de ruralización de estas regiones, lugares donde la población y la importancia socioeconómica se concentraban en unidades de producción agrícola, como las haciendas vitivinícolas.

Sorprende de otro lado, que a pesar de la numerosa presencia de población africana en estos valles costeros, y por contrario de lo ocurrido en lugares como Lima, la incidencia de crimen entre los mulatos o negros de la región era muy escasa, encontrando simplemente hechos aislados de violencia entre éste sector, destacándose la inexistencia de bandas o pandillas de salteadores que proliferaban en otros lugares del virreinato integrados fundamentalmente por miembros de este sector. A pesar de no existir investigaciones que pudieran echar más luces sobre éste fenómeno, como aquellas que versen sobre la condición del esclavo africano en Arequipa de fines del virreinato, nos inclinamos a pensar que las condiciones de vida de los esclavos fueron más benignas en los valles arequipeños que en otras locaciones, tanto por su escasez en comparación a otras regiones, y la alta necesidad de mano de obra en la coyuntura

del auge de la producción vitivinícola en estos valles; todo esto, consecuentemente, generaba un mayor cuidado de la mano de obra esclava lo que se traducía en un mejor trato.

De otro lado, tenemos que un partido como el de Condesuyos que albergaba una población considerable (la tercera en la intendencia), tan sólo refiere el 1% del total de causas analizadas. Consideramos luego, que tanto por alta estratificación de la sociedad, como por el hecho que la gran parte de la población estaba encuadrada en los márgenes sociales de las comunidades indígenas, la mayoría de los conflictos eran resueltos en las localidades no derivándose éstos –salvo los más atroces– al fuero del intendente. Esto, sumado a la lejanía del territorio con respecto a sede de la intendencia, explicaría el mínimo número de causas que provendrían de aquella región.

Finalmente, en el caso de Cailloma, observamos que este partido –aunque la conformación de sus comunidades nativas no era tan rígida como la de Condesuyos y albergaba una población bastante menor– presentaba características similares a las de Condesuyos en su conformación social. No obstante un hecho adicional puede dar más luces sobre el porqué esta circunscripción presenta un número de crímenes mayor que otras regiones (4%). La respuesta tiene que ver con por Cailloma atravesaban los comerciantes que se dirigían a Cuzco, lugar donde se llevaban a cabo algunos ataques, específicamente en el paraje conocido como Pampa Cañaguas; agresiones que por otra parte, no constituían casos verdaderos de bandolerismo y que se ejecutaron como resultado del abuso de la relación de confianza entre los viajeros.

b. Las características de los conflictos en los espacios periféricos: pueblos y aldeas. Luego de haber mencionado que –excepto el partido de Arequipa– los episodios de violencia se desarrollaban casi en su integridad en ámbitos rurales o aldeanos, siendo raros los hechos criminales en los pueblos o ciudades cabeza de los partidos, advertimos que en dichos ámbitos periféricos proliferaban los encuentros violentos entre las autoridades locales y los vecinos, evidenciándose incluso un buen número de actos de sevicia contra la población por parte de los alcaldes ordinarios (véase cap. 2; acápite 3.3). Atribuimos este hecho a la

prácticamente nula presencia de la autoridad central –el gobernador intendente– en estos espacios, los que eran llenados por principales locales que haciendo de alcaldes ordinarios, ejercían su potestad confundiendo intereses públicos y privados. Evidentemente, este fenómeno propiciaría la mayor ocurrencia de maltratos a la población –sevicia– y ocasionalmente de enfrentamientos prolongados entre grupos de principales en los que participaban autoridades del lugar.

c. Las características de los conflictos rurales. Analizando los conflictos de orden rural, encontramos que en su mayoría estos fueron iniciados por asuntos que atañían a turnos de agua de regadío, destrucción de sementeras por parte de bestias de los vecinos, y diferencias sobre la propiedad sobre animales, cosechas o tierras²⁰⁴. Asimismo, en menor número, se produjeron enfrentamientos entre arrendatarios y propietarios de tierra²⁰⁵, por repartición de tierras comunales²⁰⁶, a consecuencia de hurtos menores de productos agrícolas²⁰⁷, y por desavenencia en el proceso de compraventa de productos agrícolas²⁰⁸.

Entre todo este catálogo de discordias, el origen más habitual de la violencia estaba referido a asuntos de aguas, llegándose incluso a producirse graves heridas en algunos de los enfrentamientos²⁰⁹. Asimismo, y como ya se ha mencionado en otra parte, en más de una ocasión los alcaldes de aguas –autoridad facultada al respecto– se vieron envueltos en

²⁰⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (21-VII-1796) «Dn Miguel Medina y Dn José Álvarez contra Calisto Lazo por Calumnia»; (28-VII-1796) «Fray Francisco Cárdenas contra Pasqual Rodríguez, por injurias»; Leg. 86. (23-II-1797) «Juan de Dios Bernedo contra Don Antonio Bernedo, Alcalde Ordinario de españoles de la doctrina de Puquina»; Leg. 90. (13-X-1814) «Francisco Vela contra Clara Ramos, mujer de Francisco Vela por excesos de palabra y obra cometidos contra su esposa María Begazo»; (17-VI-1815) «Manuel Vizcarra contra Eusebio, Melchor, y Jacinta Vizcarra por injurias de palabra y obra»

²⁰⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (5-VII-1798) «Don Lorenzo Velarde, Síndico de Jerusalem contra dn. Pedro Mantilla, Alcalde ordinario de españoles del valle de Uchumayo y Mollebaya».

²⁰⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (31-V-1812) «Pedro Rodríguez, alcalde ordinario de españoles de Quequeña contra Pedro Quispe, Alcalde de Aguas de Quequeña e Ysidro y Diego Pantigoso, capitulares del cabildo de indios de Quequeña, por excesos y falta de respeto».

²⁰⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (8-I-1793) «Manuel Salazar contra Nicolás Quintanilla por injurias de palabra».

²⁰⁸ En especial la *chala*. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 84. (08-VIII-1784) «Melchora Quiroz contra Juan de Dios Herrera por injurias reales y verbales». Leg. 85. (30-VII-1798) «Juan Herrera, vecino de Arequipa contra el capitán Thomas Chocano por el homicidio de su hijo Juan»

²⁰⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (25-VIII-1786) «Don Luis Yáñez por tentativa de homicidio contra Francisco Xavier Henríquez».

situaciones violentas cuando pretendieron hacer valer su jurisdicción sobre este sensible asunto²¹⁰.

Como ejemplo de este tipo de pugnas podemos traer a colación el litigio promovido por Calisto Silva contra don Gabriel de la Granda. En su querella, Silva reclama que luego del desborde del río Ocoña –que también produjo daños en su chacra– se alteró el turno de regadío lo que perjudicó en gran manera sus cultivos. A pesar de expresar estos hechos al alcalde de aguas Esteban de la Granda, éste beneficiaría en el turno a su pariente y gran propietario don Gabriel. A pesar de lo dispuesto por el alcalde, Silva haría uso del agua en el turno de la Granda de manera furtiva. Descubierto, sería fieramente golpeado por un esclavo de la Granda; días después, además, sería condenado días después por insubordinación y encerrado en prisión por orden del alcalde de aguas²¹¹.

El otro común motivo de reyertas entre propietarios rurales eran los daños causados por animales a las cosechas de los predios colindantes. Un significativo ejemplo de estos conflictos lo tenemos en la causa promovida por don Antonio Acosta contra su vecino Diego Llerena y su familia por las injurias recibidas a propósito de unos daños provocados en su parcela del pago Acequia Alta, Cayma. La situación es como sigue: Un puñado de cerdos de Llerena, que se paseaban en un terreno contigo a las tierras de Acosta, ingresaron a las tierras del vecino malogrando las sementeras. Producido el daño, Acosta mandó rejonear a los cerdos, matándolos. Esto provocó que, una vez en el solar de Antonio Acosta, Llerena protestara furiosamente al punto de insultar a la hija del dueño de casa. Este hecho, degenerando en gresca, provocó que ambos se dieran a golpes luego que Llerena azotara con

²¹⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (1793) «Nicolás Briceño y Dávila, ayudante mayor del regimiento de la Villa de Camaná y alcalde de aguas, contra Juan de Rivas y Rosa Gonzáles»; Leg. 87. (15-X-1800) «Juan Carnero contra don Ignacio de la Granda, Alcalde Ordinario del Valle de Ocoña, por excesos». Por disputas sobre el pago del diezmo y otras contribuciones agrarias tenemos: Leg. 88. (5-III-1805) «Mariano Coaguila, contra don Manuel Gutierrez, Alcalde de españoles de Puquina». (1806) «Contra Eugenio Gonzalez, alcalde ordinario de Characta por las injurias y maltratamientos contra Jacinto Baldivia»; Leg. 91. (22-IV-1816) «Juan Arachibala contra Jasinto Rodríguez y Bicente Luna por estropeos e injurias»; Leg. 92. (29-XII-1819) «Remitido por el Alcalde Ordinario de Yanaguara atenta la declinatoria de jurisdicción del Soldado dela Concordia dn. José Leon y Aro, contra quien en aquel Juzgado havia iniciado causa criminal el Teniente de Cura dn. José Delgado».

²¹¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (27-VI-1797) «Calisto Silva contra don Gabriel Granda, sargento de la 6ta compañía de milicias de Camaná por injurias». Como otras disputas por agua tenemos: Leg. 87. (17-II-1803) «José Manuel y Pedro Valdivia contra Nicolás Cuadros por injurias reales y verbales».

su zurriago a su rival. Luego de abandonar la casa de Acosta, Diego Llerena regresaría a dicho lugar en la noche, esta vez acompañado de toda su familia, quienes armados de piedras y palos pretendieron matarlo. Acosta, luego de muchos esfuerzos, escaparía a la casa vecina de Bernardino Galdos, dónde también sería hostigado hasta la llegada del alcalde ordinario quien, calmando la situación, posibilitó que Acosta se refugie en la casa del cura de Cayma²¹².

Curiosamente, como modalidad de conflicto agrario no se han encontrado casos de abigeato, los que eran extendidos en zonas andinas como Canas, Canchis y Quispicanchis, tal como aluden los trabajos de STAVIG (1985, 1990) al respecto. No descartamos la ocurrencia de estos hechos en zonas altas de la intendencia, pero tal como se ha señalado anteriormente, la información procedente de partidos como Cailloma y en especial Condesuyos es muy relativa, sólo figurando delitos de magnitud como homicidios o abusos de autoridad de gran envergadura y duración. Es probable que el fenómeno del abigeato se manejara de forma local, según sus propios usos, costumbres y justicia, en los que el alcalde de naturales tendría una importancia preponderante. Sin embargo, y a diferencia de otros lugares (como en la sierra cuzqueña), no se advierte de la actividad de bandas de abigeos, o de conflictos endémicos que –por ejemplo– involucrarían homicidios como parte de ajustes de cuentas entre comunidades, ya que dichas situaciones de alto riesgo serían derivadas a la autoridad del intendente.

1.3 *Cartografía criminal de la ciudad de Arequipa.* Ya refiriéndonos al espacio urbano de la capital de intendencia, podemos dar cuenta de las siguientes características con respecto a la violencia cotidiana.

²¹² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (03-X-1792) «Antonio Acosta contra Diego Llerena por injurias». Otros conflictos similares serán: ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (23-V-1799) «Ygnacio Delgado, su esposa Josefa Núñez e Ygnacio Antonio Delgado y su esposa Catalina Manrique contra Pedro Núñez por injurias»; 27-V-1799) «Carlos Málaga, Cacique recaudador de tributos de Pochi contra doña Melchora Vizcarra, Vicente Herrera y Narcisa Vizcarra por atropellamientos a la autoridad»; Leg. 91. (22-VI-1816) «El dr. don José María Albizuri contra los Negros Antonio, y Francisco Esclabos de doña María Josefa Guerola por los maltratamientos que hicieron en la persona de su Mayordomo José Gonzales».

Del análisis de los documentos, se evidencia que la pequeña élite local permanece totalmente fuera de las pendencias que comúnmente desembocaban en causas judiciales. Las disputas que podrían ocurrir entre ese sector, al parecer, serías resueltas «puertas adentro» mediante la conciliación y el acuerdo de las cabezas de las familias y con la discreción del caso para no empañar la imagen de los ilustres con querellas que eran más características de la «ínfima plebe»²¹³.

Por el contrario, las fuentes criminales nos remiten a una fuerte asociación entre plebe urbana y delito. Serán artesanos, tenderos, pulperos, carpinteros, herreros, plateros, cirujanos latinos, escribanos, pequeños comerciantes y minifundistas los que más usualmente se ven enfrascados en episodios de violencia. Este sector mayoritario de la población (por encima de los esclavos negros y siervos indígenas), indiferenciado étnicamente al diluir su identidad en las ambigüedades de la raza, mantenía una posición también indeterminada en la jerarquía social. Nos inclinamos a pensar que –tal como se expondrá ampliamente en líneas siguientes– la alta conflictividad de este sector estuvo vinculada a la búsqueda de un mayor estatus social. Así pues, plebeyos entrarían en disputa con sus semejantes «personificando» el honor propio y cuestionando el del vecino, para así ganar una mayor jerarquía por contraste.

El declive del Cuzco como centro económico y político entre los años de la revuelta tupacamarista a consecuencia de la peste de 1720 y el bajo rendimiento agrícola de esos años, atrajo a la ciudad a muchos forasteros, a mediados del siglo XVIII. El clérigo y cronista VENTURA TRAVADA Y CÓRDOVA (1958 [1752]) señaló al respecto: «se va extendiendo tanto el vecindario, mayormente de forasteros, que vienen atraídos de las vitalidades que hallan en la ciudad y su comercio, que en breve volverán a retirar más el rollo para dar más ensanche a la ciudad» (p. 83).

Esta población de origen forastero –mestiza o de indígenas altamente hispanizados, tal como lo señalan numerosas fuentes²¹⁴– que se allega a Arequipa desde el s. XVII, y que conformaría el grueso de la plebe urbana, se vería beneficiada por el auge económico iniciado

²¹³ Como era como comúnmente las autoridades arequipeñas se referían a las querellas que se conocían en sus tribunales.

²¹⁴ Citamos a BARRIGA (1941) y a ZAMÁCOLA (1958 [1804]) de entre las más importantes.

en el s. XVIII y que llegaría hasta 1824 (CONDORI 2012). Dadas las propicias circunstancias económicas de la ciudad, estos sectores podían prosperar económicamente, como efectivamente lo hacían; sin embargo la holgura monetaria no siempre se condecía con el ascenso social. Los espacios de disputa y representación social –como la calle y el tribunal– vendrían a configurarse como terrenos de lucha para obtener un «mayor valer» para estos grupos.

La sociedad arequipeña, en cuya cabeza sobresalía una pequeña y poco significativa élite que recientemente había sido reconfigurada y engrandecida en el S. XVIII²¹⁵, era relativamente flexible en su estructura jerárquica y mantenía espacios libres para el ascenso social en los sectores intermedios. Esto, sumado al hecho que –por la irrupción de las ideas ilustradas– el Monarca elevó la condición de las hasta en ese momento «viles ocupaciones manuales» en oficios honrados, abrió un margen de promoción ciudadana para artesanos y comerciantes²¹⁶.

El deseo de una asimilación plena a la sociedad, y la participación activa en esta, implicaba una adscripción de sus principios y representaciones. Esto tal vez sería la causa de la fuerte aculturación indígena y la ferviente adopción de los valores hispánicos de casi el completo de la población (y quizás de su acentuado realismo), pues se debía emular al arquetipo del «caballero cristiano» para así triunfar en su empresa por el reconocimiento²¹⁷. El singular interés que mantenían los arequipeños por acrecentar su honor se ilustra bien por una historia relatada por Bernardino Fernández de Velasco, más conocido como el DUQUE DE FRÍAS (1743), en su «Deleite de la discreción y la fácil escuela de la agudeza»:

²¹⁵ Recordemos que las menguadas élites arequipeñas habían renovado sus blasones recientemente con el advenimiento de una migración montañesa y vasca de comerciantes exitosos en el S. XVIII, y como consecuencia de la expansión comercial vitivinícola que siguió a las Reformas Borbónicas. Véase (MALAMUD: 1982).

²¹⁶ Carlos III promulgó la honradez de todos los oficios mecánicos en una Real Cédula del 18 de marzo de 1784. Véase: MORAL RONCAL (1996),

²¹⁷ CHAMBERS sugiere que esta pugna por el reconocimiento se prolongaría hasta entrada la República asumiendo luego este grupo la bandera del liberalismo y la ciudadanía, en un discurso que haría más visible su participación (y por ende su estatus) en el espacio público. Tiempo después, inclusive en el S. XX, resonarán los ecos de una idílica ciudad cuya sociedad de clases medias y de pequeños poseedores afirmaron un espíritu ciudadano, tal como lo señalaría en sus memorias Víctor Andrés Belaúnde.

«En Arequipa, ciudad de gran proeza en el Perú, y de tal vanidad de sus Vecinos, que por ella se dice aquel Proverbio: *De dones, pendones y muchachos sin calzones*. Sucedió que llegando á apearse en la posada cierto religioso grave, vió un mozuelo hecho andrajos, díxole: *—Há mancebo, tenme este estrivo*. Respondióle enfurecido: *—Há Padre, sabe que habla con N. de tal, y de tal?*, arrojándole millones de apellidos; á lo que dijo el religioso: *—Pues señor don fulano de tal, y tal, y tal, vuestra merced vístase como se llame o llámese como se vista*» (p. 84)²¹⁸.

Como contraste, otras sociedades más añejas, de élites más estables y consolidadas, y de estructuras sociales menos permeables como la cuzqueña o la limeña, permitirían un espacio de despliegue social mucho más limitado, circunscribiéndose únicamente a reproducir dos tipos de vecinos: los «integrados», es decir los dignos de honor (los indios naturales y principales en el caso de las comunidades del Cuzco; la élite criolla en el caso de Lima); y los «marginados», sujetos a una vida de violencia que respondería más a factores culturales o sociales que a económicos (los negros y mestizos en Lima, implicados en bandolerismo y crimen sostenido en el tiempo; y los indios forasteros en la comunidades indígenas del Cuzco, tal como lo señala STAVIG, sobreviviendo del abigeato).

a. Los suburbios. La expansión urbana del s. XVIII, algunas veces caótica, generó la aparición de nuevos suburbios, que se sumarían a los antiguos como los de Santa Marta, San Lázaro y La Chimba (Yanahuara) que se pueblan en el siglo XVII a consecuencia de:

«la localización temporaria de los *mitayos* collaguas y otros que trabajaron en la reconstrucción de la ciudad de los terremotos [...configurándose como] asentamientos tipo ‘campamento’ que irían determinando afincamientos efímeros o quizás definitivos ya que a fines del siglo XVII el Virrey Duque de la Palata tuvo que tomar disposiciones para controlar la cantidad de ‘forasteros’ indígenas que se habían trasladado de sus reducciones y pueblos eludiendo el sistema tributario» (GUTIÉRREZ: 51).

Los nuevos suburbios, por otro lado, serán los de La Ranchería, la Pampa de Miraflores, la «Otra banda», situada en la margen izquierda del Río Chili, y finalmente, el callejón de Guañamarca.

²¹⁸ También en (CARRIÓN 1983: 376).

De otro lado, es posible segmentar a la plebe, según el lugar donde habitaban: el sector más próspero en el orden económico y que mantenía cierto arraigo en la ciudad habitaba suburbios «tradicionales» como La Chimba, y en especial San Lázaro; el procedente de migraciones más recientes, y que a pesar de poder tener ingresos aceptables se mantenía todavía en una zona más periférica, residiendo en los nuevos suburbios ya enumerados. Si bien la «alta plebe», por sus posibilidades económicas y mayor capacidad de reconocimiento social es la que es más sensible a la injuria y reclama con más ahínco desagravios a su honor ante los tribunales²¹⁹, el sector plebeyo más deprimido –involucrado muchas veces en episodios de violencia de mayor magnitud– también disputará por el reconocimiento de su estatus con sus pares más encumbrados.

Finalmente, la periferia –compuesta por suburbios antiguos o recientes– era el escenario por excelencia de la violencia cotidiana en la Arequipa de fines del S. XVIII. Las calles, patios, y demás espacios públicos de éstos concurridos barrios serían testigos de disputas, grescas y asesinatos. A continuación enumeraremos los espacios más habituales de la violencia de este sector:

La «Pampa de Miraflores» constituía la expansión urbana de la parroquia de Santa Marta. En ella se había inaugurado una capilla dedicada a san Antonio Abad, y existían algunos tambos que desde el s. XVI albergaban a viajeros del Altiplano. Según las cifras, la pampa era el suburbio donde ocurrieron el mayor número de incidentes de violencia a fines del s. XVIII y finales del XIX, ya que albergó el 22.7% de los crímenes cometidos en la periferia urbana. Si bien, por su magnitud, no se podían considerar como graves a los delitos que en esa zona ocurrieron –no habiéndose por ejemplo contabilizado ningún asesinato– el elevado número de hechos conflictivos nos dan cuenta de cómo las características geográficas y sociales de la «pampa de Miraflores» mantendrían alguna relación con la generación de violencia.

²¹⁹ Especialmente las chicheras, normalmente envueltas en conflictos con la plebe, y de mala fama por estar involucradas normalmente en adulterios.

En primer lugar, además de su condición periférica, «la pampa» destacaba por albergar a los elementos más deprimidos de la sociedad arequipeña. Costureras –algunas denunciadas por practicar la hechicería–, sirvientes domésticos indios, esclavas negras, vendedoras ambulantes de colación, leñadores y peones agrícolas serán comunes protagonistas de los delitos, tanto como agresores como víctimas. Las chicheras también ocuparon un espacio preponderante en las causas y constituirían, por otro lado, la escala más alta de la sociedad mirafloresina; y a pesar de ser públicamente tenidas por ligeras y pendencieras²²⁰ mantendrán prevalencia en su entorno por su autonomía –sobre todo si las comparamos con las demás mujeres– dada una capacidad económica superior al promedio. Esta particularidad permitiría a las chicheras mantener varones que vivían a costa suya, y sufragar gastos procesales querellando asiduamente a sus vecinos. Justamente, el otro aspecto característico de la pampa lugar sería la gran proliferación de chicherías y espacios de recreo. Un buen promedio de episodios cruentos ocurridos en chicherías o afines dan fe de ello²²¹. Luego, las disputas más usuales serían de tinte sentimental, traducándose ello en enfrentamientos entre esposas y «amancias» –muchas de ellas chicheras–, y en episodios de violencia doméstica²²².

Por otro lado, en un barrio popular más antiguo como el de «san Lázaro» la violencia cotidiana también constituyó un asunto significativo, advirtiéndose un buen número de delitos personales (18.2%). Sus actores recurrentes serán plebeyos, fundamentalmente indígenas, enfrentados por móviles sentimentales, y en contextos de diversión doméstica y pública (chicherías).

Sin embargo, y a diferencia de Miraflores, se tienen constancia de algunos ataques de gravedad, como el conato de homicidio que sufriría Juana Sánchez a manos de su medio hermano Rafael Galdos, por desavenencias patrimoniales, el hecho es como sigue: la

²²⁰ Al respecto, la mulata Luisa Tapia enfrentándose a doña María Rosa de Ureta, vecina del callejón de Guañamarca –famosa por las numerosas chicherías que albergaba– le ofendería diciendo: «canalla [...] serás criada de una chichería». ARAr/Intendencia/Criminal. (24-VII-1815). Leg. 90. «Luisa Tapia contra Doña Bárbara de Ribero por Injurias Verbales» fjs. 2.

²²¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (04-I-1790) «Bernarda Velarde contra Brígida Santayana por injurias». Leg. 90. (23-X-1809) «Doña Gregoria Viscarra contra Úrsula Ceballos por injurias reales y verbales». (05-V-1814) «Manuela Carpio contra Juana Arana por heridas». Leg. 91. (15-IV-1816) «Da. Petronila Bera contra Manuela, María e Ignacia Santayana por injurias».

²²² ARAr/Cabildo/Causas Ordinarias. Leg. 42. (12/12/1821). «Bárbara Mamani, Tributaria de la parroquia de Sta. Marta, vecina de la Pampa de Miraflores, contra su esposo, Antonio Pasos»

víctima y el agresor, ambos indios tributarios de la parroquia de Santa Marta, mantenían una disputa por «la pocesion que se le ministró proindiviso de una casita del Barrio de San Lázaro [...uno de] los bienes que quedaron por la muerte de su padre Mariano Sanches»²²³. El 24 de abril de 1810 a las ocho de la noche, Rafael y Balentín Galdos –medios hermanos de la víctima– y su madrastra María Galdos se acercaron donde Juana Sánches a requerirle la entrega una suma de dinero. Al negarse, Rafael penetró subrepticamente a su habitación y trató de matarla utilizando una tijera que tenía a mano, lo que no se concretó por haber sido detenido a tiempo por una persona desconocida.

No obstante lo antes mencionado, consideramos que el lugar más peligroso de la periferia –por ser del que se tiene más testimonios de asesinatos– fue el llamado «callejón de Guañamarca» ubicado en últimas calles de la actual calle Rivero. Al ser un suburbio famoso por sus chicherías y casas de juego, no extraña que episodios cruentos fueren perpetrados en sus inmediaciones; ejecutaos siempre en coyunturas festivas en los que no faltara el consumo de alcohol. El primer asesinato de este tipo del que tenemos noticia sería el del zapatero Manuel Vilca, «el cojito», ocurrido en la madrugada del 15 de noviembre de 1824. Luego que la víctima pasara la noche bebiendo chicha y aguardiente en los locales de Rafaela «la platera» y de Manuela, chicheras de ese barrio, se encontraría su cuerpo inerte a la mañana siguiente. Las autoridades iniciarían las investigaciones de inmediato, sin embargo el hecho nunca sería esclarecido²²⁴. El segundo hecho cruento del que tenemos noticia será el homicidio en conato de Alberto, esclavo de doña Juana Florez, a manos de Bernardo Pastor. Su ama describiría con detalle el suceso en su escrito de querella:

«El dicho día martes último de Carnestolendas salió el referido mi Esclavo á divertirse como es de costumbre, y una costumbre inevitable; precedida mi licencia, y con buena compañía vajo de la cual y de las instrucciones continuas que le doy [...] en este estado hallándose en la calle de Guañamarca en la diversión pública fue acometido traydora y alebosamente por el expresado Bernardo Pastor quien con un arma que vulgarmente llaman Macana, que es un palo con un grueso nudo ó porra en la punta le dió un fuerte porrazo en la parte superior de la nariz, que abrazó también la parte inferior de la frente:

²²³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (24-IV-1810) «Juana Sánches en contra de Rafael, María y Balentín Galdos». Fjs. 1

²²⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (16-XII-1824) «Sobre la muerte de Manuel Vilca».

el golpe fue tan recio, (como que le quebró el hueso de la nariz y frente) que cayó al suelo; y ánimo hostil del agresor tan determinado al homicidio, que le asegundó otro golpe, y habría continuado sin duda hasta consumir el asesinato, sino es el auxilio de muchos que estaban presentes»²²⁵

Guañamarca, al albergar muchos establecimientos de diversión y recreo –al igual que Miraflores– complicaba la vida de los residentes, generándose así un ambiente muy peligroso en sus alrededores. Esto le ocurriría a doña Bárbara Rivero y a María Rosa de Ureta, vecinas del lugar, quienes fueron injuriadas en repetidas ocasiones por la mulata Luisa Tapia, conocida como la «Guacaca» o «Macaca». La disputa se produjo luego que las Rivero amonestaran a Luisa Tapia por su comportamiento, ya que estando ebria la mulata se enfrascaría en una discusión con un zapatero arrendatario de las Rivero, provocando alboroto y escándalo en horas de la noche. La mulata, no sólo se retiraría del lugar después de ser llamada al orden, sino que se enredaría en una disputa con las dueñas de casa; enfrentamientos que se reanudarían periódicamente y en los que la liberta insultaría a las matronas llamándolas «criadas de chichería»²²⁶.

Asimismo, la «Otra banda» se evidenciaría como otro de los arrabales más turbulentos por aquella época. Emplazamiento situado en la margen izquierda del Puente Real (hoy puente Bolognesi), alrededor de la Capilla de la Soledad y del Beaterio, constituía un lugar muy concurrido, tanto por los numerosos tambos que allí se apostaban por constituir el acceso principal a la ciudad, como por la buena cantidad chicherías o «lugares de diversión» que allí existían. El intendente Álvarez y Jiménez destacaría la peligrosidad que aquel lugar entrañaba, señalando en la relación de su visita al Partido que la zona conocida como «pampa de los Zevallos» constituía un lugar de «pecados públicos amancebamientos, y embriagueces que pudieran motivar graves y muy escandalosas resultas» (BARRIGA 1941: 282). Esto sería confirmado por los miembros del Cabildo de la ciudad, quienes en 1817 comunicarían que

²²⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (27-II-1816) «Da. Juana Florez contra Bernardo Pastor por haver herido mortalmente á un Esclavo mio nombrado Alberto Florez». Fjs. 1 y v.

²²⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. (24-VII-1815). Leg. 90. «Doña María de Rivero por injurias verbales, contra Luisa Tapia conocida por el sobre nombre de Guacaca o Macaca» fjs. 1; y la contraquerella «Luisa Tapia contra Doña Bárbara de Ribero por Injurias Verbales».

en otro lugar de la otra banda, como es la barranca del «Puente Real» (hoy puente Bolognesi) «se había formado un muladar y escondrijo de ladrones sobre los arcos averiados»²²⁷.

La peligrosidad de aquel paraje puede quedar ilustrada por lo ocurrido a don Marcos Martínez Begazo, vecino de Tiabaya. En la causa que promoviera ante el intendente, daría cuenta que, como producto de una vieja enemistad que mantenía con su cuñado, Pedro Ruelas, éste lo siguió –tal como hizo antes en repetidas ocasiones– hasta el último puente de la Antiquilla, lugar descampado de la otra banda, en donde lo atacó con un cuchillo²²⁸.

Otro suburbio también mencionado en las causas será «La Ranchería» actual calle Manuel Muñoz Nájar; lugar que debía su nombre al buen emplazamiento de «ranchos», es decir barracas o construcciones de madera en el lugar, y en la que se ubicaban también un buen número de chicherías.

Finalmente, en el camino que se dirigía hacia los pueblos circundantes de la ciudad se asentaban algunas chicherías, frecuentadas por labradores locales, siendo famosas las emplazadas en el «pago del Palomar». Aquellos lugares, por otro lado, serían también recurrentes escenarios de conflictos, llegando algunos de ellos hasta las últimas consecuencias. Uno de ellos sería el que enfrentaría a Úrsula Ceballos y a Gregoria Viscarra, vecinas del «pago el Palomar». Luego que Ceballos fuera a sacar a su hijo y marido de la chichería de Viscarra, ambas se enredarían en una disputa verbal al habérsele tratado de alcahueta a Viscarra por haber «embriagado a su marido y su muchacho con aguardiente y chicha [...al tiempo que vociferaba que] con un palo había de moler a todas estas cochinas que lo inquietaban [a su hijo]»²²⁹. Finalmente, y luego de la respuesta de la chichera, ambas se liarían a golpes, arrancándose las trenzas.

²²⁷ BIBLIOTECA GIBSON (13- XI-1817). «Libro de actas del muy ilustre Cabildo de esta ciudad de Arequipa». fjs. 74 v. Citado en GUTIERREZ 1992: 93.

²²⁸ La enemistad se produjo a consecuencia de la sevicia que Ruelas ejecutaba contra su hermana, Micaela Begazo. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (27-IV-1815) «Don Marcos Martínez Begazo en contra Pedro Ruelas por amenazas de homicidio».

²²⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (23-X-1809) «Doña Gregoria Viscarra contra Úrsula Ceballos por injurias reales y verbales». fjs. 3; 4v.

Sin embargo, no todos estos enfrentamientos terminarían sólo en una paliza. En 1803, en la chichería de Guillermina Alaucona «pasada la primera lloclla del camino que va a Paucarpata»²³⁰, José Fuentes, criado del establecimiento, perdería la vida a manos de Gregorio Ramos, indio forastero y ayudante de sastre cuando se le requirió el pago de un real de chicha. Cuando Ramos y su acompañante, ya ebrios, fueron expulsados del local al negarse a pagar, cogería una piedra con la cual golpearía a Fuentes causándole la muerte. Tiempo después Ramos sería indultado al tenerse en cuenta su condición de minusvalía social y el hecho de que estuviera ebrio cuando se cometió el crimen.

b. *Hacinamiento*. El hacinamiento en las casas y barracas de los suburbios donde moraba la plebe constituyó una circunstancia que favoreció a la violencia. Por otro lado, en el centro de la ciudad, la escasez de vivienda y las necesidades económicas de algunos pequeños propietarios arruinados, obligaron a que se subdividieran las casonas en cuartos en los que vivían artesanos y trabajadores como arrendatarios. Así también, por el aumento del número de integrantes de las propias familias, se dieron casos en que un gran número de personas relacionadas por sangre o parientes políticos –primos segundos, abuelos, tíos, etc.– vivieran en una misma casa, dividiéndola en habitaciones donde moraban compartiendo exiguas zonas comunes en la cuales se cocinaba, lavaba o jugaba. El patio de la casa constituía el lugar público por excelencia, y donde se producían generalmente los conflictos. El gran número de habitantes –familiares y extraños– una misma quinta y los reducidos espacios comunes generaron no pocos –y muchas veces sangrientos– enfrentamientos entre los moradores.

Ejemplo de esto lo tenemos en la causa formada contra Thomaza, «conocida como la piqueña mulata libertina de oficio pastelera»²³¹. En una casa de vecindad contigua al solar que servía de Cajas Reales –hoy primera cuadra de Palacio Viejo– moraba María Ebarista Arroyo, mujer legítima de Domingo Córdoba. En ella también moraba la mulata Thomaza «en una de las salas de dicha casa»²³². Al abocarse ambas a las tareas del lavado, y luego de disputar

²³⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (22-XI-1803) «De oficio por la muerte de José Fuentes». fjs. 1.

²³¹ ARAr/Intendencia/Criminal. (17-V-1788). Leg. 85. «María Ebarista Arroyo contra Thomasa la piqueña por injurias».

²³² *Ibidem*. fjs. 2.

por el uso de la acequia que atravesaba el patio de la casa, la mulata la golpearía en la mano izquierda a María Arroyo con una piedra, lastimándole un dedo.

Cuatro años después, en otra casona del centro de la ciudad abarrotada de moradores, surgiría un incidente del mismo tipo. En el solar habitado por varias familias emparentadas entre sí, Antonia Bustamante se enfrentaría a sus sobrinas Manuel, Inés y María Bustamante, luego que estas se negaran al pago de la reparación de la acequia que atravesaba el patio común. El conflicto llegó a su culmen cuando Gertrudis Almagro, hija de Antonia, fuera golpeada al tratar de defender a su madre, recibiendo sendos puñetazos y arañones en el rostro²³³.

Ya en los suburbios de la ciudad, en una quinta de «la Calle Nueva que va para la chacra que fue de Felipe Morán»²³⁴ ocurrirían hechos similares, la historia es como sigue: habitaban el solar, entre muchas otras personas, María Corso y su familia –quienes laboraban como tenderos– y Juana Linares y sus dos hijos, migrantes de Moquegua. El 11 de junio de 1792, los hijos menores de Linares y Corso –y a propósito de unos juegos infantiles– se enredarían en una trifulca en el patio de la casa. Esto produjo agrias recriminaciones entre las mujeres (las que giraban en torno a la extracción étnica y a la «incivilidad» de sus vecinos). El altercado llegaría a su máximo nivel cuando, luego que Pedro Linares –joven peón agrícola de dieciocho años– regresara a casa e interviniera en favor de su hermano pequeño, recibiría una golpiza por parte de Manuel y Josefa Corso, los hijos mayores de María Corso, quienes agarrándolo del pelo lo golpearon «rompiéndole la ropa y los zapatos», dejándolo incapacitado para el trabajo por algunos días²³⁵.

La difusa división entre lo particular y lo común que mantenían los vecinos se manifestaba además en lo borroso que se manifestaban los límites entre los espacios privados, y en especial en alta intromisión de terceros en ellos. Así pues, existe constante referencia de

²³³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (3-X-1792) «Manuela Bustamante y hermanas por heridas contra Gertrudis Almagro».

²³⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (11-VI-1792) «Juana Linares contra María Manuel y Josefa Corso por injurias». fjs. 6 y s.

²³⁵ *Ibidem*. fjs. 1.

discusiones originadas por gallinas²³⁶ y perros²³⁷ que circulaban de propiedad en propiedad y cuya pertenencia quedaba en entredicho; o aquellos que causaban daños en los bienes y personas de los vecinos, como ocurrió con la sirvienta de Antonio Delgadillo y Alatrística quien sería mordida por el perro de Francisca Xaviera Maldonado, luego que el animal se hubiera introducido a la huerta de la casa vecina²³⁸. De igual forma, muchos altercados se iniciarían cuando, desconociéndose las fronteras de los inmuebles, se perturbara la tranquilidad de la posesión de los colindantes. Ejemplo de ello lo encontramos en el pleito entre Juan de Mata y Lorenza Escudero. Por sus actividades comerciales, de Mata arrendaba una ranhería a los padres de san Agustín, en un ambiente contiguo al convento. Lorenza Escudero mantenía una habitación junto a la ranhería, desde la cual echaba sus desperdicios al inmueble contiguo. No obstante los reclamos del comerciante, Escudero persistiría en su accionar e instigando a cuatro de sus menores sobrinos que habitaban con ella sustraería parte del material (paja) del techo de su vecino²³⁹.

Ya en referencia a la vulneración de los espacios privados, observamos con frecuencia como sirvientes ingresarán sin escrúpulo alguno a ellos (siendo usual el penetrar a la huerta de los colindantes para «reorientar» el curso del agua para regar la huerta de los patrones²⁴⁰), e incluso los propios propietarios entrarían en las habitaciones de los vecinos sólo por haber escuchado bullicio²⁴¹. El ingreso a las estancias privadas por parte del vecindario será pues una constante, además de ser percibido como algo usual por parte de quienes narran los hechos. Constituirá un hecho más frecuente aún en las quintas, lugares en los que las divisiones entre las habitaciones no eran permanentes por haberse acondicionado tan solo

²³⁶ «Con ocasión de haver hido la citada mi Esclava María Añatrística á la casa de los suso dichos [Matías Rojas y Narcisa Postigo], por estar contigua a la mía, á preguntar por una Gallina que se salio de mi casa...» ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (12-VII-1815). «Doña Josefa Ramírez contra doña Narcisa Postigo por injurias». fjs. 1.

²³⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (13-IX-1804) «Marta Quintanilla contra José Manuel Zea por injurias reales y verbales».

²³⁸ ARAr/Cabildo/Causas Ordinarias. Leg. 42 [1824 – Tomo III]. (23-VIII-1824) «Antonio Delgadillo y Alatrística solicita se mate al perro de Francisca Xaviera Maldonado».

²³⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (01-I-1819) «Don Juan de Mata contra doña Lorenza Escudero por injurias verbales».

²⁴⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (11-XII-1811) «Don Casimiro Ballon contra don Juan Laso, su hijo Bonifacio, y su muger, y contra otros por injurias verbales y personales».

²⁴¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (28-VI-1812) «El cabo primero Manuel Ribera contra Ysidro Romaña por heridas».

trancas o tabiques entre las alcobas, luego que fueran divididas entre los herederos para su ocupación, o para el de arrendamiento de cuartos. Un ejemplo de ello será lo narrado por Luisa Saavedra, moradora de una de estas quintas, en la causa que promoviera en contra de Juliana Prado:

«Serrado las puertas de mi havitacion, y a pasado seguido de encaminarme al lecho cotidiano, me encontré con una mujer que se havia internado por extraordinarias puertas, y acercándose acia mi, me pregunto: si era cassada; a que le repuse: ¿que para que me lo preguntava? Y sin mas motivo. Que esta expresión, me contestó, diciendo: para esto hiriéndome el pecho, con un instrumento cortante y dandose de mi parte un grito cai desmayada en tierra; sin haver persona que de pronto me auxiliase a excepcion de Maria Ruelas, que me acompañaba»²⁴²

Así pues, las fronteras entre el espacio privado y público en la sociedad arequipeña de finales del XVIII era difícilmente distinguible. Como ya se ha manifestado en párrafos anteriores, la participación de vecinos, allegados y hasta de extraños en querellas particulares era habitual, lo que extendía el ámbito de la violencia de la esfera doméstica a la pública. Indudablemente, el hacinamiento multiplicaba el rango de los conflictos, extendiendo la violencia entre los miembros inmediatos de la comunidad. Dado que, como se ha mencionado anteriormente, las «habitaciones» o «cuartos» del solar dispuestos como viviendas familiares no estaban separadas del todo de las de sus vecinos –aludiéndose además en las causas al normal tránsito de los colindantes por espacios privados–, evidentemente los episodios de violencia por la normal convivencia se incrementaban de forma considerable.

Numerosas causas describen cómo las contiendas domésticas trascendían al vecindario, ya sea porque las víctimas se refugiaban en ambientes cercanos o por la intromisión de los vecinos en las pugnas, luego que la gritería atrajera la atención. Este último sería el caso de Manuela y María Bustamante –involucradas años atrás en otro incidente ocurrido también en la casa quinta que habitaban– quienes serían atacadas con una navaja por su vecino, el

²⁴² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (X-1818) «Luisa Saavedra, viuda de Leonardo Prieto, soldado filiado al regimiento de infantería. contra Juliana Prado por heridas». Fjs. 1 y v.

teniente de milicia don Pedro de la Fuente. El hecho es como sigue: estando las mujeres ocupando su habitación en la casa, apareció de pronto María Tristán huyendo de don Pedro quien la perseguía con puñal en mano. Luego de acoger a la mujer y reconvenir al agresor, las vecinas serían atacadas por de la Fuente, quien buscó herirlas con el arma blanca²⁴³. Algo similar le ocurriría a Lorenzo Aguirre, quien sería herido gravemente por Manuel Dávila luego de que intentase proteger a la mujer de éste de la paliza que le diera²⁴⁴.

Por otro lado, no sólo el hacinamiento generaba conflictos por las intromisiones en el ámbito familiar, sino que desencadenaría riñas por la censura y recriminaciones que realizaban entre los miembros del barrio sobre las costumbres y el modo de vida que llevaban; trifulcas que se reavivaban esporádicamente. Es en ese tenor que, el 11 de setiembre de 1814, luego que doña Petronila Suárez llamara la atención al soldado de infantería de nombre Diego –que por ese tiempo habitaba cerca de su casa– por las trifulcas que propiciaba, el miliciano le daría de golpes con palo de lloque²⁴⁵. Un año después encontramos el caso de don Atanacio Trujillo y doña María Josefa de Silva. Luego que la señora se hubiera quejado públicamente de los jolgorios y las «tiradas de dados» que noche a noche se realizaban en su habitación, Trujillo respondería haciendo un escándalo y ofendiendo la reputación de la mujer, tildándola a ella y a su nieto de libertina, de dedicarse –también– al juego y a hablar mal del monarca²⁴⁶.

Finalmente, la devolución de objetos prestados entre vecinos –práctica común en ambientes de bajo ingreso– también es común causa de violencia en zonas periféricas; algo que, el 21 de abril de 1817, enfrentaría a doña Josefa Uría –esposa de un cirujano latino– y doña Dominga Chumes, residentes ambas del barrio de san Lázaro. Luego que Uría y su hija

²⁴³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (20-V-1815) «Doña Manuela Bustamante y su hermana María contra don Pedro de la Fuente por injurias reales y verbales».

²⁴⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (23-X-1787) «Manuel Dávila por heridas en contra de Lorenzo Aguirre». También Leg. 91. (01-XI-1817) «Teresa Díaz y sus hermanas María y Manuela contra el soldado Mariano Delgado por injurias reales y personales».

²⁴⁵ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (11-IX-1814) «Doña Petronila Suárez, viuda de Casimiro Mariño contra el soldado de infantería Diego, por heridas».

²⁴⁶ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (21-VI-1815) «Doña María Josefa de Silva y Saconeta contra don Atanacio Trujillo por calumnia».

fueran a exigir la devolución de un mortero prestado a Chumes por intermedio de su criada Paula, se iniciaría un altercado que terminaría en un combate entre las hijas de ambas²⁴⁷.

c. *Plazas y calles*. La alta concurrencia de vecinos a un espacio público también era causa común de conflictos. Esto ocurría fundamentalmente con miembros de la plebe que, como ya hemos señalado, no mantenían una fácil identificación social jerárquica con respecto a sus iguales, por lo que, aprovechando estas situaciones, desencadenaban pugnas a fin de reformular o afirmar su escala social haciéndose de un espacio preeminente y de alta visibilización en un ámbito público. Esto se podía observar en las frecuentes pugnas que a los alrededores de la pileta de la plaza mayor mantenían miembros de la plebe, sirvientes y esclavos, por obtener la prerrogativa en el turno de agua; asunto que es relatado por el fraile de la Merced José Baldivia en el pedido que hiciera a la autoridad para que se erigiera una pileta de agua en su convento:

«...a todo el vecindario le ha parecido útil y necesaria esta piadosa obra [...] para evitar los infinitos excesos, desórdenes y culpas que se cometen con el motivo de concurrir las domésticas y los criados de las casas a todas horas del día y de la noche en la Pila de la Plaza para la exportación de las aguas necesarias para el uso de las cocinas de sus amas y lavar ropas de ellos»²⁴⁸

Es de suponer luego, que en momentos de alta concurrencia y exhibición la alta y baja plebe haría valer su estatus imaginado frente a sirvientes y esclavos –y entre ellos mismos–, para así diferenciarse de aquel bajo estrato social al que objetivamente pertenecían; para esto harían gala de cualquier circunstancia –étnica, económica, cultural– que manifestara su «mayor valía», en un entorno en el que las diferencias notables entre ellos eran indistinguibles.

²⁴⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (21-IV-1817) «Doña Josefa Uría, esposa del cirujano latino don Agustín Rodríguez contra doña Dominga Chumes por injurias».

²⁴⁸ Archivo del Convento de la Merced. (Tomo X). (1812) «Presentación del procurador del convento». Citado en GUTIÉRREZ 1992: 98.

Otro de las situaciones especiales para manifestar la preeminencia social entre grupos afines eran las festividades. Articuladas mediante una lógica de jerarquización, las celebraciones religiosas y cívicas constituyen a la fecha un momento privilegiado para exhibir las categorías sociales de los intervinientes (VALENZUELA, 2001). No debe sorprender, por tanto, que muchos conflictos surgiesen como consecuencia de la representación del estatus de los participantes; violencia que, de otro lado, también estaría atizada por el alcohol, infaltable en estas ceremonias.

Muestra de enfrentamientos en celebraciones públicas, y dirigidos a la representación de la jerarquía de las partes involucradas, fue el altercado que protagonizarían Luis Cáceres y Juan Portugal, platero apodado «el pulga». La pendencia se produjo al finalizar la fiesta de la Cruz de Chapota, en la calle del mismo nombre, en Cayma. Al retirarse Caseres a lomos de mula atropelló con el estribo de la bestia a Portugal que llevaba a su hijo en brazos, lanzándolos contra el suelo. Caseres, luego que el platero le recriminara llamándolo «cholo malcriado», se apearía para darse de golpes y pedradas con el platero, el que sería maltratado también por sus familiares. Finalmente la esposa de Portugal, además de ser golpeada e insultada al igual que su marido, sería despojada de un collar de perlas y un par de aretes de oro por la comitiva de Caseres²⁴⁹.

Más allá de las coyunturas festivas, las calles arequipeñas no representaban lugares peligrosos para el común tránsito y concurrencia de los vecinos en horas de la noche. Lejos de lo que ocurría normalmente en otras ciudades del virreinato, no se han encontrado episodios de asaltos en las calles, aprovechándose de la oscuridad nocturna. Algo que se corrobora de lo mencionado por viajeros como WITT (1992 [1824]), que menciona en su crónica de qué manera él podía pasear tranquilamente por las calles de la ciudad en altas horas de la noche sin temor a ningún ataque.

La única noticia sobre asaltos callejeros nocturnos la encontramos en 1808. El día domingo 26 de agosto de 1808 el abogado de la Real Audiencia, don Fermín de Ojeda informaría que

²⁴⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (6-I-1816) «Don Juan Portugal contra Luis Caseres y su familia por injurias reales y verbales». fjs. 6.

la noche anterior, saliendo de una fiesta religiosa, sería seguido a la distancia por Manuel de Zusunaga, empleado en la Real Renta de Tabacos de la ciudad. Éste, al aprovechar la soledad y oscuridad de la calle se abalanzaría contra el letrado y –tal como lo señala él mismo en su querella– «descargó el primer golpe con un puñal, cuya cachá sentí tras la oreja, y seguramente erró». Al instante salieron a la calle vecinos que auxiliaron a la víctima y obligaron al agresor a huir no sin antes lanzarle «piedras de la azequia, de las que me disparó una»²⁵⁰.

d. Chicherías y otros espacios de recreo público. Como ya se ha mencionado, un lugar de recurrente violencia lo constituían las chicherías y los alrededores de las tiendas de expendio de licor. Ubicadas preferentemente en los suburbios de las periferias, eran lugares concurridos por la plebe de la ciudad en sus ratos de ocio. Así pues, la relación entre alcoholismo y criminalidad, además de estar muy presente en la mentalidad de los vecinos –tal como lo muestran sus declaraciones judiciales– se correspondía con la realidad, habiéndose encontrado un número significativo de episodios violentos que relacionados con la ingesta de chicha o aguardiente. Por otro lado –y en la línea de TAYLOR (1987) en el ámbito novohispano y BERNAL (2003) en el vizcaíno, en la misma época– consideramos que la magnitud de la violencia desplegada en las ocasiones en que concurrían alcohol y delito era mayor de la de costumbre, causándose así heridas considerables y hasta la muerte en algunos casos.

Así pues, los momentos y lugares de esparcimiento serían propicios para el enfrentamiento interpersonal. Sabemos que la población –y en especial la plebe– solían frecuentar las periferias de la ciudad para solazarse, visitando los ya señalados arrabales donde se concentraban las chicherías. Sin embargo era usual dirigirse hacia algunos parajes campestres a manera de recreo; lugares en donde se desarrollaban espectáculos como, por ejemplo, las carreras de caballos. Conocemos de algunas escaramuzas producidas en esa coyuntura, y de entre ellas traemos a colación la que se produjo entre los hijos de José Delgado y Ramón Núñez, labradores del pueblo de Sachaca. A propósito de haberse

²⁵⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (27-VIII-1808) «Don Mariano Fermín de Ojeda, abogado de la Real Audiencia, contra don Manuel Zusunaga, empleado de la Real Renta de Tabacos de Arequipa». fjs. 2

organizado unas carreras de caballos en la pampa de Tío por carnavales, muchos campesinos de las comarcas vecinas se dieron cita en el lugar. A pesar de estar prohibido, los Núñez y los Delgado apostarían cuatro reales por sus animales en la competición; luego de producirse una diferencia sobre quién fue el ganador de la contienda los jóvenes involucrados, e incluso los mayores, se enzarzarían en una feroz lucha²⁵¹.

1.4 *La violencia en la intimidad: El espacio doméstico.*

El espacio doméstico constituye el lugar diferenciado de violencia de orden familiar o sentimental, además de resultar un ámbito de considerable incidencia de ataques personales. Como lo refieren autores como VILLEGAS (2006), «el hogar se constituyó en un lugar de alta conflictividad, donde los insultos, las riñas y los homicidios fueron frecuentes [...] varios trabajos historiográficos que han explorado el mundo familiar en los países latinoamericanos han coincidido en señalar los altos índices de violencia durante el periodo colonial y republicano» (p. 74).

En Arequipa, las cifras nos refieren que el 27% del total de las agresiones analizadas se realizaron al interior de una vivienda (cantidad tan sólo superada por la violencia producida en ámbitos urbanos / públicos que suma el 43%, véase cuadro 9). Más allá de estos datos cuantitativos, podemos suponer que la cifra real de ataques en el seno del hogar era mayor incluso aún que la ejecutada en espacios urbanos. Consideramos esto teniendo en cuenta la «cifra negra» tan propia de los crímenes ejecutados en espacios privados que, por su naturaleza, no tienden a ser conocidos más allá de los confines de la vivienda en la que se consumó. Asimismo, llegamos a esta conclusión, por el hecho que la violencia de tipo doméstico era tolerada socialmente, ya que era entendida –muchas veces– como parte de su potestad de corrección (*ius corrigendi*) que poseía el jefe de familia al interior de su hogar era. En ese sentido resulta revelador el hecho que en muchas de sus escritos de contestación, los maridos argumentaran que «según el sentir de todos los autores theóricos y moralistas

²⁵¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (16-II-1817) «José Núñez contra José Delgado, y sus hijos José y Manuel por injurias reales y verbales».

aunque el marido azote a la muger no siendo con crueldad ni excediéndose en la corrección según la calidad de la persona no es causa para la separación o divorcio»²⁵².

Como se ha mencionado, la mayoría de los delitos ejecutados en el espectro casero correspondería crímenes de tipo sentimental y familiar. Estos podían tratarse de episodios de sevicia, es decir del abuso del deber de corrección que poseía la cabeza del hogar; de desavenencias de tipo económico entre miembros de la familia; y finalmente, por asuntos sentimentales en los que se involucraba al adulterio, como el ya mencionado intento de homicidio por envenenamiento que perpetrara Eulalia Rosado contra su esposo en 1796²⁵³.

Excepcionalmente, el ámbito doméstico también era lugar de ataques por y contra miembros de la servidumbre. Sobre el particular traemos a colación el ya mencionado el asesinato que sufrió la anciana Hermenegilda Villafuerte a manos de su criada Luisa Solis, en su propio hogar, en una arquetípica muestra de abuso de confianza e instrumentalización de la inviolabilidad –y por lo tanto de lo velado– de la esfera doméstica²⁵⁴.

No obstante haberse contabilizado algunas denuncias por maltratos a mujeres por parte de sus maridos en el fuero del intendente, tanto en la vía criminal aduciéndose injurias, como en la vía administrativa, en forma de pedimentos ante el intendente o el cabildo²⁵⁵, la vía más común de denuncia de estos agravios era la vía eclesiástica. Esto se debía, en primer lugar a que la entidad más orientada a la cautela de la moralidad y de la institución familiar era la Iglesia. Por otro lado, los casos de sevicia guardaban estrecha relación con los pedidos de divorcio (separación de cuerpos) que efectuaban las mujeres agredidas para proteger su integridad física; disposición que le competía a la autoridad eclesiástica.

²⁵² AAA/Causas Civiles/Divorcio y Nulidad. Leg 5. (16-VIII-1746). «Rosa Bellido solicita el divorcio de su esposo Joseph Canizo por Vicio Incorregible».

²⁵³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (4-XI-1796) «Eulalia Rosado y Matheo Rosado por la tentativa de uxoricidio por veneno en contra de Thomas Valdivia».

²⁵⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 89. (25-VI-1808) «De oficio por la muerte de Hermenegilda Villafuerte».

²⁵⁵ ARAr/Cabildo/Causas Ordinarias. (12-XII-1821) «Bárbara Mamani, Tributaria de la parroquia de Sta. Marta, vecina de la Pampa de Miraflores, contra su esposo, Antonio Pasos por maltratos».

Como lo han planteado diversos estudios, «parece ser haber un consenso historiográfico en el sentido que las mujeres de los sectores populares fueron quienes acudieron con mayor frecuencia a los tribunales [especialmente los eclesiásticos, en el periodo virreinal] denunciando las agresiones verbales y físicas de las cuales eran víctima» (VILLEGAS: 75). Analizando las causas de divorcio seguidas entre los años 1707 – 1799 ante este fuero, AMADO (2011) establece que «la causal invocada con mayor frecuencia en la de la sevicia contra la mujer» (p. 39). Asimismo considera en su investigación dos solicitudes relacionadas al intento de atentado contra la vida del cónyuge. La sevicia, además de lo declarado por la cónyuge, estaba también acreditada por los reconocimientos médico legales que emitían cirujanos y boticarios.

Por lo que se ha podido observar en este fuero, encontramos que generalmente la sevicia estaba muy ligada al adulterio del marido; ya que ante la recriminación –pública o privada, es decir de la mujer legítima– ante el concubinato provocaba la furia del amancebado, el que descargando su impotencia contra el cónyuge, buscaba –directa o indirectamente– deshacerse de ella para mantener su ilegal conducta. Sobre el particular, mencionamos lo declarado por María Velarde a propósito de su marido, en su pedido de divorcio:

«...me trata vulnerando mis honrados procederes con denigración a mi crédito y manos violentas que me ha puesto en muchas ocasiones poniéndome en peligro de perder la vida. Llevamos once años de casados de los cuales un año y dos meses se han producido los malos tratamientos. Mantiene ilícita amistad con una mulata llamada Antonia a quien tiene de puertas adentro como que es su doméstica pública y escandalosamente sin temor de Dios»²⁵⁶

Este asunto también queda de manifiesto en los procesos de homicidio por asunto sentimental (véase Cap. 2. acápite 3.1.a) en los que la voluntad homicida estaba dirigida muchas veces a eliminar a la mujer o al esposo para poder seguir viviendo en concubinato. Otras conductas también ligadas a la sevicia serían la embriaguez, el juego, o los celos.

²⁵⁶ AAA/Causas Civiles/Divorcio y Nulidad. Leg 6. (4-VIII-1760). «Agustín Dávila solicita que María Velarde solicite retorne al hogar».

Por contrario de los tribunales eclesiásticos, y como ya hemos manifestado en líneas anteriores, existen muy pocas muestras de denuncias de violencia doméstica ante el tribunal criminal de la intendencia. Aparentemente, el criterio de juzgamiento de este tribunal estaría más orientado por mantener el *statu quo* de la familia afectada, desoyendo en la mayoría de veces los reclamos de las mujeres maltratadas por sus maridos, adoptándose así una «función paternalista» común a los jueces del espectro hispánico (VILLEGAS 2006). Uno de los pocos casos en los que se denuncia a un marido por sevicia en el fuero civil, y en el que se pone de manifiesto estos dictámenes, será la causa que promoviera de Ysidora Gutierrez. Esta panadera reclamaba ser víctima de diversos abusos por parte de su esposo, quien además de robarle sus pertenencias y golpearle, vivía como concubino con otra mujer. A pesar de los numerosos escritos que presentaría la mujer en el intervalo de dos años, en los que daba cuenta de los reiterados maltratos que sufría, el intendente Juan Bautista de Lavalle desatenderá sus pedidos, expresando incluso en uno de sus decretos que «presenta ser leve la cosa que tanto se exagera en este recurso»²⁵⁷. Finalmente, la autoridad dispondría –incluso en contra de la opinión de la autoridad eclesiástica, ante quien había también abierto causa– a que vivieran «de consuno maridablemente, deponiendo sus resentimientos, y manejándose como Casados cristianos»²⁵⁸

No obstante lo mencionado, no podemos concluir que la violencia doméstica únicamente afectaba a la mujer arequipeña. El caso de Rudesindo Megia muestra lo contrario. En su relación de querella él manifiesta que por ser «valdado de los pies» y no poder trabajar normalmente, sostenía muchos altercados con su mujer, quién aprovechándose de su incapacidad lo azotaba cruelmente²⁵⁹.

Por otro lado, hemos de señalar como los conflictos aparentemente domésticos rebasaban normalmente esa esfera hasta confundirse con la pública. Como se ha señalado anteriormente y en concordancia con diversos estudios al respecto, resulta inadecuado utilizar los conceptos

²⁵⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (5-VII-1819) «Ysidora Gutierrez contra su esposo Patricio Texada por robo y maltratos». fjs. 101.

²⁵⁸ Conformándose con el dictamen del asesor letrado. *Ibidem*. fjs. 13 y v.

²⁵⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (15-V-1803) «Ysabel Portugal contra su marido Rudesindo Megia por injurias». fjs. 3v.

de «espacio público / espacio privado» para el análisis de la sociedad del Antiguo Régimen; criterio que fue elaborado en función –y por lo tanto se ajusta más adecuadamente– al orden moderno. Las relaciones sociales en el Virreinato peruano, de otro lado, muestran ser muy porosas con respecto a ambos ámbitos. Tal como lo señalara CHAMBERS (2003): «así como las fronteras físicas entre lo privado y lo público eran relativamente fluidas, así también no había ninguna división clara entre los intereses económicos y comunales» (p. 106).

Así observamos como los conflictos domésticos se volcaban hacia la comunidad, procurándose la intervención de terceros en asuntos estrictamente privados. Como se ha detallado anteriormente, muchos vecinos resultaron golpeados por intervenir en disputas conyugales²⁶⁰ o por acoger a mujeres agredidas²⁶¹. Es curioso, por otra parte, cómo más allá de lo peligroso que podrían resultar, las intromisiones resultaban normales para el común de la población, ya que cualquier razón era buena para entrometerse o inmiscuirse en asuntos privados, tal como relata Manuel Ribera en su querrella: «como a eso de las doce de la noche pasando por la habitación de Ysidro Romaña en compañía de Calixto Zegarra y otros, y sintiendo ruido de quimera en dónde Romaña tocó la puerta [y pretendió ingresar] a lo que Romaña empezó a echar ajos». Luego de intentar intervenir en la disputa que enfrentaba a sus vecinos, ambos cónyuges cesarían su altercado para enfrentarse más bien al intruso, como relató un testigo: «Romaña con su muger los persiguieron [hasta la calle...] Romaña abrazó al declarante y le dio una puñalada»²⁶². Esta atención por parte de los miembros de la comunidad a las disputas domésticas ha sido catalogada por investigadores como CHRISTINE HUNFELT (2000, citado en VILLEGAS 2006: 80) como conductas «delimitadoras de una ‘ética del género’, en la medida que frenaban a los esposos abusivos y condenaban a las esposas adúlteras».

²⁶⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (23-X-1787) «Manuel Dávila por heridas en contra de Lorenzo Aguirre»; Leg. 91. (01-XI-1817) «Teresa Díaz y sus hermanas María y Manuela contra el soldado Mariano Delgado por injurias reales y personales».

²⁶¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (20-V-1815) «Doña Manuela Bustamante y su hermana María contra don Pedro de la Fuente por injurias reales y verbales».

²⁶² ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (28-VI-1812) «El cabo primero Manuel Ribera contra Ysidro Romaña por heridas».

En tanto las zonas de mayor concurrencia de agresiones, no encontramos diferencias notables entre el espacio estrictamente urbano y los asentamientos apostados a las afueras de la ciudad; diferencia en la que los enfrentamientos familiares en suburbios de la ciudad aparecen ligeramente incrementados. Lugares como el pago del Palomar, San Lázaro, la «otra banda» y la Pampa de Miraflores serán comunes escenarios de violencia doméstica. Ejemplo de este tipo de violencia en esta última localidad (la más mencionada en los documentos) será el ataque que habría efectuado Antonio Pasos contra su esposa Bárbara Mamani, india tributaria de la parroquia de santa Marta y vecina de la pampa. Luego de desavenencias conyugales Pasos la agrediría «con piedras y la habría herido en dos partes»²⁶³.

1.5 *¿Bandoleros?: El crimen en el descampado.*

El crimen en descampado tiene particularidades que destacan ostensiblemente de los otros espacios de comisión de delitos. Si bien no se registran muchos de delitos en descampado o en zonas deshabitadas (albergando solamente al 5% del total de agresiones), casi todas las agresiones registradas resultarán en homicidios. Así se diferencian los objetivos de los delitos según el espacio de comisión. Así pues, en los espacios urbanos y hasta rurales, la proliferación de atentados contra el honor y la integridad será alta, pero nunca de grave naturaleza, limitándose a ataques verbales o corporales leves, y orientándose más bien a la representación (*performance*) de su situación social o a la pugna por una re-escenificación de su estatus, con el fin de conseguir mayor prevalencia en el entorno. El crimen en descampado (y en algún punto el crimen doméstico) mantendrá otra lógica. Por su naturaleza furtiva, la representación social que implicaba era nula, orientándose más bien a objetivos únicamente económicos, pasionales o sentimentales.

Entre los lugares de «descampado» más habituales, encontramos dos sub-espacios muy diferenciados: los caminos; y los baldíos o eriazos (punas, cerros, bosquecillos). En dichos ambientes se cometerían, a la vez, dos tipos de crímenes: los sentimentales o pasionales, o los orientados a obtener ventaja económica; móviles que algunas veces se entrecruzarían, como en el caso del asesinato de Antonio Raberto, tal como mencionaremos más adelante.

²⁶³ ARAr/Cabildo/Causas Ordinarias. (12-XII-1821) «Bárbara Mamani, Tributaria de la parroquia de Sta. Marta, vecina de la Pampa de Miraflores, contra su esposo, Antonio Pasos por maltratos». fjs. 1.

En el imaginario popular, pues, el descampado aparecía como el medio más propicio para el crimen. Numerosas afirmaciones en las causas criminales, como la de Narciso Quiros dan cuenta de ello. Haciendo eco al dicho popular, en su declaración como testigo de un incidente de injurias, afirmaría que «donde hai gente no muere gente»²⁶⁴. Ésta expresión y la de «descaminador» para referirse a delincuente arquetípico, es de lo más elocuente.

Finalmente, con respecto a los ataques en caminos, las alusiones concretas a bandoleros o salteadores son nulas en los repositorios criminales, y mínimas en los documentos administrativos. Así pues, al referirse al pueblo de Yanahuara, el Gobernador Intendente Álvarez y Jiménez hace mención a la peligrosidad del paraje hoy conocido como Pampa de los Cañaguas, tránsito obligado hacia el Partido de Caylloma y la Ciudad del Cuzco, por «la dolorosa experiencia de los asesinatos y descaminos que en aquel despoblado se han executado siempre» (BARRIGA 1941: 255). Esto se hará mención en el Acuerdo de Cabildo celebrado el 25 de agosto de 1777, que remitiéndose años atrás, en tiempo del corregidor Juan Pacheco, señalaba:

«...ciendo constante a Vs. y especialmente a los SS jueces los continuos descaminos y muertes que se hacían en las entradas de los caminos dela sierra y otras partes a esta ciudad la pusieron en su lamentable estado, de modo que a esta nos se podía entrar mantenimientos ni menos salir los comerciantes temiendo se hiciera lo propio con ellos, por lo que dichos jueces se vieron en precisión de dar todas las providencias necesarias y aún haber salido en persona para aprehender a los delincuentes y expurgar esta provincia de ellos e imponerles las penas correspondientes que queden escarmentados y sirviese a otros de ejemplo, celaron los caminos y aprehendieron a algunos, aun con los efectos descaminados»²⁶⁵

Sin embargo, al remitirnos a las causas criminales encontramos que, a pesar de haberse verificado algunas causas por asesinato y robo en el camino que iba de Arequipa a Caylloma (y en especial en la citada zona de Pampa Cañaguas) estas se produjeron como un «crimen

²⁶⁴ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (6-I-/1816) «Don Juan Portugal contra don Luis Cáseres por injurias personales». Fjs. 4.

²⁶⁵ AMA/Libros de Acuerdo de Cabildo. (25-VIII-1777). Leg. 24 (1767-1780). «Sobre la Real Carcel».

de oportunidad»²⁶⁶, o fueron ejecutados por los acompañantes de los comerciantes o viajeros aprovechando su relación de confianza, sin que mediaran grupos de facinerosos organizados.

Como ejemplo de un asalto en caminos como consecuencia de un «crimen de oportunidad» encontramos al caso de Esteban Carrillo. Indio tributario de Lluta, sería acusado por la familia de su mujer de haber asesinado a su cónyuge. Luego de ser detenido y fugar de la cárcel de Lluta, sobreviviría haciendo pequeños hurtos de animales a propietarios y viajeros desprevenidos, en el camino de Yuta a Guanica. Finalmente se enrolaría «bajo las armas del Rey» buscando así que su delito sea indultado²⁶⁷.

Más allá del homicidio antes mencionado, los casos más representativos de transgresión en los caminos, serán los asesinatos del comerciante español Thomas de Soto en 1796²⁶⁸, y de don Antonio Raberto, encargado de azeitista general de azogues de Huancavelica, en 1800²⁶⁹ (descritos en el Cap. 2, acápite 3.1.c). Ambos crímenes, por otra parte, se perpetraron a consecuencia de abusos en la relación de confianza que existía entre la víctima y el (o los) agresores. En este caso hablamos de viajeros (comerciantes y funcionarios) que transitaban los caminos reales en compañía de ayudantes o sirvientes, quienes luego de disputar con sus patrones –normalmente por asuntos de índole económico– proyectarían y ejecutarían el asesinato de su empleador y el robo de sus pertenencias.

Asimismo, como otro punto de peligro específico de los caminantes y viajeros, podemos mencionar a la quebrada del Jagüey, en el camino de Arequipa a Puno y al Valle de Tambo.

²⁶⁶ Según la teoría criminológica de Marcus Felson, el crimen de oportunidad es aquel en el que el delincuente actúa -más allá del ejercicio de una actividad cotidiana de subsistencia- teniendo en cuenta la «oportunidad» del delito, es decir que apelando a la racionalidad delictiva, encuentra una circunstancia delictiva un provecho económico mucho mayor a las posibilidades de riesgo de la acción. A esto se suma las precariedades y necesidades del sujeto del delito que impulsan a «hacer uso de esa oportunidad» Sobre el particular véase: (MIRÓ LINARES, AGUSTINA SANLEHÍ y otros, 2015).

²⁶⁷ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (1789) «De oficio contra Esteban Carrillo por robos, fuga de cárcel y uxoricidio»

²⁶⁸ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (10-VI-1796) «Dionisio Cáceres por el homicidio de Thomas de Soto»

²⁶⁹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (26-IX-1800) «Por el homicidio de don Antonio Raberto, encargado de azeitista general de azogues de Huancavelica».

Lugar en el que el intendente Álvarez y Jiménez mandó construir un tambo para que «no se cometan los excesos que hasta el presente se han visto, por las muertes que en aquella quebrada se han hecho, y también para remediar los muchos robos que se hacen en la Ciudad, que por allí salen a varias partes» (BARRIGA 1948: 297). En dicho lugar sólo mantenemos constancia de un solo asalto sangriento; homicidio que, por otro lado, nunca fue del todo acreditado por no haberse encontrado el «cuerpo del delito». Se trata del largo proceso seguido a Andrés Zegarra, mulato esclavo de don Fernando Vilago, acusado de haber asesinado a Ramón Mantilla en el que camino que iba de Arequipa al valle de Tambo. Según la acusación fiscal Zegarra habría acuchillado a Mantilla causándole la muerte. Según el esclavo, él atacaría a Mantilla defendiendo la carga de guiñapo que transportaba por orden de su amo. Finalmente el esclavo sería absuelto del homicidio al no haberse nunca podido acreditar la muerte de Mantilla, y por existir testigos que indicaban que éste seguía vivo²⁷⁰.

Por otro lado, no solo el lucro era el único móvil del homicidio en el descampado. Lo subrepticio de ese espacio también era adecuado para ejecutar crímenes sentimentales en los que se buscara acabar con un ocasional rival amoroso o esposa infiel. Ya el asesinato del Antonio Raberto, acentista de azogues de Huancavelica, tendría implicancias sentimentales. Así pues, una de las mayores instigadoras del asesinato sería Margarita Munari, dueña de la tropa de mulas que utilizaba Raberto en sus viajes y, según las declaraciones de los demás empleados involucrados, amante de Raberto. Además de desacuerdos entre los conductores de las mulas –entre ellas la propia Munari– por el dinero que el funcionario de azogues les debía otorgar por sus servicios, y como «comisión» de los desfalcos que hacía en la distribución del azogue, el asunto que movió a Munari a conspirar contra Raberto e incitar a los demás arrieros (entre ellos su hijo) y al secretario del funcionario a que matasen a su patrón y robasen la mercancía, fue que Raberto se involucraría con una arequipeña al llegar a la ciudad dejándola de lado.

²⁷⁰ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (16-VI-1785) «De oficio contra Andrés Zegarra, mulato esclavo de don Fernando Vilago, por el homicidio de Ramón Mantilla».

No obstante estos hechos en los que se entrelazaban los intereses económicos y sentimentales, los casos arquetípicos del crimen sentimental en descampado lo constituirían los asesinatos de las indias Francisca Gutiérrez²⁷¹ y de María Arequipa²⁷², ambas asesinadas por sus maridos con el fin de convivir libremente con sus concubinas. Las dos mujeres fueron asesinadas en descampados (punas) cercanas a Chivay, la primera en 1810, y la segunda dos años después. Sin embargo, no sólo mujeres serían víctimas de este tipo de violencia, aprovechando el descampado. En 1818 Ysidro Neira sería asesinado a manos de su esposa Bentura Quispe y su amante –además de primo– cuando los tres pernoctaban en un bosquecillo baldío cerca del río Yumina, mientras cortaban leña para venderla en el mercado²⁷³. Los amantes, acordando de antemano el crimen, dieron el alcance a Neira en Yumina, y pretextando ayudarlo se internaron en descampado para cortar la madera. En un momento de descuido, Romualdo Quispe, el amante de Bentura, le daría de garrotazos hasta destrozarle la cabeza con un tronco recién cortado.

²⁷¹ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 90. (1810) «Copia de la sentencia de vista pronunciada en contra de Cipriano Herrera por el homicidio cometido en contra de su esposa Francisca Gutiérrez».

²⁷² ARAr/Intendencia/Criminal (22-III-1812) Leg. 90. «Marcelo Ccasa por el homicidio cometido en la persona de su muger María Arequipa».

²⁷³ ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91. (08-IV-1818) «De oficio contra Romualdo y Bentura Quispe por la muerte producida en la persona del marido de ésta, Ysidro Neira».

CONCLUSIONES

- I. En comparación a otros rincones del orbe hispánico, y especialmente del virreinato peruano, y según la opinión de viajeros, autoridades, y los datos contrastados en los documentos criminales de la época, la ciudad y la intendencia de Arequipa resultaban lugares bastantes seguros y de poca incidencia criminal. En ese sentido se destaca la inexistencia de abigeato endémico o de bandas estables de salteadores de caminos; plagas que azotaban a otras varias localidades cercanas. Explicamos, preliminarmente, este hecho en razón a las grandes posibilidades de ascenso e inclusión social –tanto económica como cultural– que la coyuntura socioeconómica arequipeña de fines del siglo XVIII ofrecía a los sectores plebeyos, manifestándose así como una sociedad de alta movilidad social en los sectores plebeyos.
- II. El mayor número de delitos en el periodo corresponde a los ataques interpersonales, como son las heridas, injurias y homicidios. Más allá de la adecuada relativización a que debemos someter a esta cifra, consideramos –además de guardar relación con la alta movilidad social de la Arequipa de fines del s. XVIII– que este hecho guarda relación a una mayor disputa entre los miembros de la sociedad arequipeña por el estatus y el ascenso; hablamos de altercados en el que se ponían en cuestión la honorabilidad propia y del vecino en una suerte de mecanismo de diferenciación y reconocimiento social por contraste.
- III. Identificamos asimismo una leve tendencia al incremento de delitos, tendencia que se acentúa en el periodo que inicia en 1914, en especial en lo que se refiere a los delitos por y contra la autoridad («faltamientos de respeto» y «excesos»). Así pues, se intenta explicar este hecho en la progresiva militarización que sufrió la sociedad arequipeña desde la insurrección de Pumacahua hasta el fin de la presencia hispánica.
- IV. Coincidiendo con diversos investigadores que han estudiado este fenómeno en el Perú colonial, encontramos que –en orden de prelación– los homicidios perpetrados a inicios del siglo XIX en Arequipa estaban relacionados con móviles pasionales, en los que destacan aquellos que se ejecutan para permitir una relación adulterina, que fueron cometidos mayormente por indios, y –al ser tenidos por muy graves según la mentalidad de la época– fueron merecedores de penas capitales; en segundo lugar, los que se cometieron en coyunturas festivas, bajo el influjo del alcohol, considerados por la autoridad como crímenes menos atroces que los anteriores y comúnmente tenidos como «por imprudencia» y sujetos a

conmutación de pena e indulto; y finalmente los que tenían como por móvil el lucro, realizados mediante el abuso de una relación de confianza, y que fueron también severamente castigados, algunos de ellos con pena capital.

- V. Según el criterio de la época, las «injurias» es decir los ataques contra la persona, afectaban tanto a lo corporal como lo espiritual (honor) de ella, haciéndose más bien énfasis en el ataque de tipo subjetivo. Es así que la injuria estaba graduada según la calidad o estatus del injuriante o el injuriado. Diferente será la denominación de «heridas», la cual aludirá a la mayor gravedad física del daño, y en especial a la incapacidad para el normal desempeño de las actividades cotidianas o al riesgo de muerte.
- VI. El ataque al honor era constituía uno de los más atroces oprobios que podía recibir una persona, ya que la pérdida de este constituía una menor valía social, lo que se traducía en un quebranto económico, político, familiar y amical. Simples alusiones del honor de una persona no eran tenidas a la ligera y podían traducirse en trastornos dignos de ser resarcidos en los tribunales. La publicidad de la injuria, por tanto, la haría más gravosa.
- VII. Asimismo, la injuria podía constituir un mecanismo de ascenso social, utilizándola como un medio público en el que quedara de relieve la propia honra en contraste de la menor calidad del vecino rival. A pesar que el honor era un presupuesto procesal, y según éste podían variar los dictámenes judiciales; también en los tribunales se podía disputar un mayor reconocimiento social –que impactara positivamente en las relaciones públicas del querellado– luego que fuera desagraviado o su mayor valer fuera reconocido mediante un fallo de la autoridad.
- VIII. En las ofensas verbales que constituían medios de injuria, encontramos que todas ellas –diferenciando los roles de hombre y mujer– refieren de manera negativa al paradigma de «ciudadano honrado» que será el modelo de conducta al que debiera aspirar todo vecino. La mayor adecuación a este modelo permitiría un mayor reconocimiento social y todos los beneficios que esto conllevaba.
- IX. Las ofensas a las mujeres estaban dirigidas a cuestionar su moral sexual. Por el contrario los comentarios que refieran a su fidelidad, pudor y –en segundo lugar– laboriosidad, hablarán de la virtud necesaria para ser considerada como una ciudadana honrada. De otro lado, las ofensas contra los varones se dirigirán a cuestionar su honestidad, destacando las de «ladrón» y «pícaro». La fidelidad al

Monarca, tanto en hombres como mujeres, constituirá también una de las cualidades fundamentales para el «ciudadano honrado»; así lo testimonian las ofensas que cuestionan esto en los rivales.

- X. Las ofensas por origen étnico no se dirigirán a destacar superioridades o inferioridades raciales, más bien aludirán al paradigma de plena asimilación a la ciudadanía; algo que –según la mentalidad de la época– estaba en proceso en las etnias africanas e indianas. Así lo atestiguan los agravios de contenido racial ejecutados por indígenas contra indígenas.
- XI. Las «injurias reales», es decir los ataques que involucraban un desmedro tanto físico como verbal, eran por lo general de carácter leve, asunto que era constatado por los cirujanos en sus reconocimientos médicos. También se observa que las trifulcas eran de carácter corporativo, enfrentando en ellas a familias enteras e incluso sirvientes, clientes y amigos de éstas.
- XII. En las agresiones físicas encontramos muchas de ellas que revestían alta connotación simbólica, lo que acentuaba el agravio producido. Entre estas podemos encontrar golpes con vara de alcalde, lo que acentuaba la situación de inferioridad del que recibía el maltrato; el «apechugamiento», esto es el golpe de pecho; los cortes de pelo, especialmente entre mujeres indígenas; y los azotes.
- XIII. Una de las formas más comunes de ataques graves contra el cuerpo (llamados en aquel tiempo como «heridas») era la sevicia, es decir el abuso del deber de corrección que poseía la autoridad. Esta, que muchas veces causaba la muerte, se ejecutaba contra esclavos negros, siervos indios, y en mayor medida contra los miembros del hogar, especialmente las esposas.
- XIV. Los ataques contra la autoridad, llamados como «faltamientos o perdimientos de respeto», se produjeron comúnmente –y sobre todo al acercarse el fin de la presencia hispánica– por los requerimientos y exacciones que pretendían las autoridades locales sobre los campesinos. Éstos no constituían muchas graves daños y eran algo menor en número, en comparación con los ataques que ejercían las autoridades. Estas agresiones, conocidas normalmente como «atropellamientos y excesos», algunas veces implicaban serios ataques contra la integridad. Estos comúnmente involucraban el uso de instrumentos de coerción típicos de la autoridad, como el cepo, los grillos o los azotes. Los mayores abusos fueron perpetrados por los alcaldes ordinarios, en zonas rurales, donde se confundían los intereses personales (o de grupo) con los deberes propios de la

autoridad. Asimismo se instrumentalizaba sobre todo el deber de las autoridades de cautelar por la moral pública y corregir el amancebamiento, práctica muy extendida.

- XV. Los ataques en el espacio rural se circunscribían a dos ámbitos, los relacionados a los excesos y resistencias contra la autoridad en la coyuntura de las disputas por el poder local; y los conflictos por asuntos agrarios, específicamente turnos por agua o destrucción de sementeras por animales de los colindantes. Cabe resaltar que no se han contabilizado casos de abigeato.
- XVI. En el ámbito urbano existía una fuerte asociación entre plebe y delito. Procedente de las continuas migraciones que concurrieron a la ciudad desde el s. XVII, se concentraban mayoritariamente en los suburbios de la ciudad, algunos de antigua data como «san Lázaro» o «la Chimba» u otras de tiempo más reciente, como «la Ranchería», la «Pampa de Miraflores», el «callejón de Guañamarca» y la «otra banda». En estos lugares se concentraba un buen número de chicherías y lugares de esparcimiento.
- XVII. Asimismo, existía una fuerte relación entre conflicto urbano y hacinamiento. Estos tenían como escenario habitual las casonas del centro de la ciudad o ciertas barracas de los suburbios, en donde habitaban numerosas familias en cuartos divididos provisionalmente con tabiques. En estos ambientes se producía una particular superposición de los ámbitos público y privado, lo que era una potencial fuente de conflicto.
- XVIII. Con respecto a violencia en el espacio doméstico, predominaban los ataques por parte de integrantes del seno familiar (particularmente maridos) contra otros miembros. Esta se manifestaba normalmente como sevicia muy ligada al adulterio. Sin embargo, en muchas ocasiones, las disputas eminentemente domésticas rebasaban el espectro hogareño, involucrando a colindantes o vecinos. Las agresiones normalmente se atendían en tribunales eclesiásticos.
- XIX. El crimen en descampado, si bien no numeroso en comparación a otros espacios, era fundamentalmente profuso en homicidios y otras agresiones graves. Se desenvolvía en dos ámbitos muy concretos: caminos, en el que se cometían muertes, no por parte de salteadores o bandoleros –como ocurría en otros lugares del virreinato– sino a consecuencia del abuso de confianza por parte de los acompañantes de los viajeros. El otro campo era el descampado propiamente

dicho, punas, cerros, eriazos en general, donde se ejecutaba normalmente crímenes de índole sentimental, con el fin de ocultar homicidios.

REFERENCIAS

ARCHIVOS Y COLECCIONES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN),

AGN Fondo de la Real Audiencia (Causas criminales). Leg. 73–138.

ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA (ARAR),

ARAr Cabildo (Causas ordinarias). Leg. 42.

ARAr Intendencia (Causas criminales). Leg. 85–97.

ARAr Intendencia (Causas Administrativas). Leg. 107.

ARAr Intendencia (Pedimentos). Leg. 111.

ARCHIVO ARZOBISPAL DE AREQUIPA (AAA),

AAA Causas Civiles (Divorcio y Nulidad). Leg. 4–8.

ARCHIVO MUNICIPAL DE AREQUIPA (AMA),

AMA Libros de Actas de Cabildo. Leg. 24.

FUENTES PRIMARIAS PUBLICADAS

ARCHIVO DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

2014 *Recopilación de las Leyes de Indias* [Recurso Electrónico]
<http://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.html> [Consultado:
18.08.2014]

BARRIGA, V. M.

1941 *Memorias para la Historia de Arequipa. Relaciones de la visita al Partido de Arequipa realizada por el Gobernador Intendente don Antonio Álvarez y Jiménez 1786-1791. Tomo I.* Arequipa: Editorial La Colmena S.A.

1946 *Memorias para la Historia de Arequipa. Relaciones de la visita realizada por el Gobernador Intendente don Antonio Álvarez y Jiménez 1790-1793 Tomo II.* Arequipa: Establecimientos Gráficos La Colmena S.A.

1948 *Memorias para la Historia de Arequipa. Relaciones de la visita realizada por el Gobernador Intendente don Antonio Álvarez y Jiménez 1793-1796 Tomo III.* Arequipa: Establecimientos Gráficos La Colmena S.A.

BUSTAMANTE DE LA FUENTE, M. J.

1971 *La monja Gutiérrez y la Arequipa de ayer y hoy.* Lima: Gráfica Morsón S.A.

CARRIÓN ORDÓÑEZ, E.

1983 *La lengua en un texto de la ilustración. Estudio Filológico de «La Noticia de Arequipa» de Antonio Pereyra y Ruíz, 1816.* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

COBARRUVIAS, S.

1616 *Tesoro de la Lengua Castellana o Española.* Madrid: Luis Sánchez, Impresor del Rey N.S.

ESCRICHE Y MARTIN, J.

1977 [1874] *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia.* Tomo II. Bogotá: Temis.

FISHER, J.

1968 *Arequipa 1796-1811. La relación de gobierno del Intendente Salamanca.* Lima: Seminario de Historia Rural Andina / Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

FRÍAS, Duque de (Bernardino Fernández de Velasco)

1743 *Deleite de la discreción y fácil escuela de la agudeza*. Madrid: Oficina de Franciscos Lorenzo Moxados.

HAENKE, T.

1830 *Descripción del Perú*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú (edición virtual).

MINSHEU, J.

1617 *The Guide into the Tongues. With Their Agreement and Consent One with Another, as Also their Etymologies, That Is, the Reasons and Derivations of All or the Most Part of Wordes, in These Eleven Languages...* Londres: John Brownes.

NEBRIJA DE, E. A.

2005 [1495] *Vocabulario español-latino*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

OUDIN, C.

1607 *Tesoro de las dos lenguas francesa y española*. Paris: Imprenta de la viuda de Marc Orry.

PALET, J.

1604 *Diccionario muy copioso de la lengua española y francesa, dirigido al illustrissimo Principe Henrico de Borbón Príncipe de Condé, por el doctor Ioan Palet médico ordinario de su excelencia*. París: M. Guillemot.

PERCIVAL, R.

1591 *Bibliotheca hispanica. Containing a grammar, with a dictionarie in spanish, english, and latine, gathered out of diuers good authors: very profitable for the studious of the spanish toong. By Richard Percyuall gent. The dictionarie being enlarged with the latine, by the advise and conference of Master Thomas*

Doyley Doctor in Physicke. Tomo II. Londres: John Jackson para Richard Watkins.

SÁNCHEZ-PRIETO, P. Y OTROS

2014 [C. 1256] «Ley de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio». En: *Edición de textos alfonsíes en Real Academia Española: Banco de datos (CORDE)*. [Recurso Electrónico]. Corpus diacrónico del español <<http://www.rae.es>> [Consultado: 18.08.2014]

TERREROS Y PANDO S.J; E.

1787 *Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina é italiana*. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía.

TRAVADA Y CÓRDOVA, V.

1958 [1752] *El suelo de Arequipa convertido en cielo por Dr. Ventura Travada y Córdova cura que fue de las doctrinas de Salamanca y Pochi de la misma diócesis. Año 1752*. Tomo I. Arequipa: Primer festival del libro arequipeño.

UNÁNUE, J. H.

1793 *Guía política, eclesiástica y militar del Virreinato del Perú para el año de 1793*. Lima: Sociedad académica de amantes del país.

VITTORI, G.

1609 *Tesoro de las tres lenguas francesa, italiana, y español: Thresor des trís langves, françoise, italiene, et espagnolle*. Ginebra: Philippe Albert y Alexander Pernet.

WITT, H.

1992 *Diario 1824-1890*. Lima: Mass Comunicación.

ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI, J. D.

1958 [1804] *Apuntes para la historia de Arequipa, 1804*. Arequipa: Primer festival del libro arequipeño.

LIBROS Y ARTÍCULOS CONSULTADOS

AGUIRRE, C.

1990 «Cimarronaje, Bandolerismo y desintegración Esclavista. Lima 1821-1854». En: Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario / P&P. pp. 137–182.

ANDAZABAL, R.

2007 *Criminalística peruana en el siglo XVIII*. Lima: Seminario de Historia Rural Andina / Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

ÁLVAREZ, W.

2012 «Deprimir la autoridad: la Constitución de Cádiz en las ciudades de Arequipa y Puno, 1812-1814». Ponencia en: *II Seminario: La Independencia del Perú: actores sociales, lenguaje político y espacio público*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) / Instituto Raúl Porras Barrenechea.

AMADO, A.

2011 *Desamores femeninos en los tribunales de Arequipa del Siglo XVII*. Arequipa: Universidad Católica de Santa María de Arequipa (UCSM).

APAOLAZA-LLORENTE, D.

2015 «En busca de un orden de policía: los comisarios de barrio y las ordenanzas o reglamento de policía de La Habana de 1763». En: *Temas americanistas*. Núm. 34, 2015. Sevilla: Editorial de la Universidad de Sevilla. pp. 1-24.

ARTEAGA BOTELLO, N.

- 2007 «Repensar la violencia. Tres propuestas para el siglo XXI». En: *Trayectorias*. vol. IX, núm. 23, enero-abril, 2007. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. pp. 43-54.

ASPELL, M.

- 2008 «Cárcel y presidios en Córdoba del Tucumán (siglo XVIII)». En: *Alpanchis. Revista del Instituto de Pastoral Andina*. Año XXXIX. N° 71. Primer semestre 2008. Lima: Instituto de Pastoral Andina (IPA). pp. 211-270.

BACON, F.

- 2003 [1620] *Novum Organum*. Buenos Aires: Editorial Losada.

BARRIENTOS GRANDON, J.

- 2004 *El gobierno de las indias*. Madrid: Fundación Rafael del Pino / Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales S.A.

BASADRE, J.

- 1986 *Historia del Derecho Peruano*. Lima: EDIGRAF S.A.

BELAN, C y CONDORI, V.

- 2017 *Prisiones y confinamiento en Arequipa a finales de la colonia. La Real Cárcel de Arequipa. 1780-1824*. Artículo Presentado para publicación. Centro de Estudios Peruanos (CEP), Universidad Católica San Pablo, Arequipa-Perú.

BENHABIB, S.

- 1992 «Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen Habermas» En: Craig Calhoun (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press. pp. 73-98.

BERNAL, L. M.

- 2003 «Los espacios de la violencia: tabernas y fiestas en Vizcaya (1560-1808)» En: *Vasconia*. Nº 33, pp. 333-370

BERRAONDO, M.

- 2012 *La violencia interpersonal en la Navarra moderna (siglos XVI-XVII)*. Tesis doctoral. Pamplona: Universidad de Navarra.

BRICEÑO-LEÓN, R.

- 2008 «La violencia homicida en América Latina» En: *América Latina Hoy*. Vol. 50, diciembre, 2008. Salamanca: Universidad de Salamanca. pp. 103-116.

BROWN, K.

- 2008 *Borbones y aguardiente. La reforma imperial en el sur peruano: Arequipa en vísperas de la independencia*. Lima: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) / Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

BULLER, C.

- 2011 *Vinos, aguardiente y mercado. Auge y declive de la economía del vino en los valles de Arequipa (1770–1853)*. Lima: Quellca / Centro de Estudios Andinos (IEP).

CAIMARI, L.

- 2015 «Los historiadores y la “cuestión criminal” en América Latina. Notas para un estado de la cuestión» En: Daniel Palma Alvarado (comp.) *Delitos, policías y Justicia en América Latina*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado. pp. 491 – 507.

CASTILLO GUZMÁN, G.

- 2015 *El Alcohol en el sur andino. Embriaguez y quiebre de jerarquías*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

CHAMBERS, S.

- 2003 *De súbditos a ciudadanos: Honor, género y política en Arequipa, 1780–1854.*
Lima: Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú / Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP).

CHIFFOLEAU, J.

- 1984 *Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au
XIV^e siècle.* Paris: La Sorbonne.

CONDORI, V.

- 2010 «Crimen y castigo en Arequipa a fines de la colonia» En: *Revista de Derecho.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCSM.* Año 3,
núm. 3, Noviembre 2010. Arequipa: Adrus D&L Editores S.A.C.
- 2012 *Cuadernos de Historia de Arequipa. Cambio político y crisis económica en
Arequipa a inicios de la República. 1825-1827.* Arequipa: Ediciones Rhojita.
- 2014 *Reformas económicas y privilegios comerciales. Los Cinco Gremios Mayores
de Madrid en Arequipa. 1790-1820.* Arequipa: Fondo editorial de la
Universidad Católica San Pablo (UCSP) / Centro de Estudios Peruanos (CEP).
- 2017 *Violencia y criminalidad en Arequipa a fines de la Colonia: 1780-1824.*
Artículo presentado para publicación.

CÓRDOBA LA LLAVE, R.

- 2004 «Violencia cotidiana en Castilla a fines de la Edad Media» En: José Ignacio
de la Iglesia Duarte (Coord.) *Conflictos sociales, políticos e intelectuales en
la España de los siglos XIV y XV: XIV Semana de Estudios Medievales,
Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2003.* La Rioja: Gobierno de La Rioja, Instituto
de Estudios Riojanos. pp. 393-444

CUELLO CALÓN, E.

1968 *Derecho penal*. México D.F: Editora Nacional.

DAVIES, K.

1984 *Landowners in Colonial Perú*. Austin: University of Texas Press.

DE LA PUENTE BRUNKE, J.

2008 «La cultura jurídica en el Perú virreinal». En: *Alpanchis. Revista del Instituto de Pastoral Andina*. Año XXXIX. N° 71. Primer semestre 2008. Lima: Instituto de Pastoral Andina (IPA). pp. 45-76.

DOUGNAC RODRÍGUEZ, A.

1994 *Manual de Derecho Indiano*. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

ESPINOZA DE LA BORDA, A.

2013 «Arequipa Ciudad Blanca. Un censo y la elaboración de una imagen». Ponencia en: *IV Seminario de historia del Perú*. Arequipa: Centro de Estudios Peruanos (CEP).

ESPINOSA DESCALZO, V.

1999 *Cartografía de Lima (1654-1893)*. Lima: Seminario de Historia Rural Andina / Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

FISHER, J.

1981 *Gobierno y Sociedad en el Perú Colonial: El Régimen de las Intendencias, 1784-1814*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

2000 *El Perú Borbónico, 1750–1824*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

FLORES GALINDO, A.

2010 «La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1750–1830». En: *Obras completas*. Tomo III. Parte II. Lima: Sur. Casa de Estudios del Socialismo.

FRASER, N.

1992 «Rethinking the Public Sphere: Models and Boundaries» En: Craig Calhoun, (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press. pp. 109-42.

GALDOS RODRÍGUEZ, G.

1967. *La rebelión de los pasquines. Un intento emancipador de Arequipa colonial*. Arequipa: Editorial Universitaria de Arequipa.

GARÓFALO, L. J.

2005 «La sociabilidad plebeya en las pulperías y tabernas del Cuzco. 1600–1690». En: Paulo Drinot y Leo Garófalo (eds.) *Más allá de la dominación y la resistencia. Estudios de historia peruana, siglos XVI–XX*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. pp. 104–135.

GARRIOCH, D.

1987 «Verbal insults in eighteenth-century Paris». En: Peter Burke y Roy Porter (eds.) *The social History of language*. Cambridge: Cambridge University press. pp. 104-119.

GAVARD, C.

1993 «Violence citadine et réseaux de solidarité. L'exemple français aux XIVE et XVe siècles» En: *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. Vol. 48. No. 5, setiembre – octubre, 1993. Paris: Armand Collin. pp. 1113-1126.

GOFFMAN, E.

1993 *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Madrid: Amorrurtu

GRANDE PASCUAL, A.

- 2016 «El delito de injurias en la documentación procesal vizcaína a finales del Antiguo Régimen (1766-1841)» En: *Clío & Crimen*. Nº 13. pp. 213-232.

GUSHIKEN, A. y otros

- 2010 *¿Quiénes son asesinados en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué?* Lima: Ciudad Nuestra

GUTIÉRREZ, R.

- 1992 *Evolución Histórica Urbana de Arequipa (1540–1990)*. Lima: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Universidad Nacional de Ingeniería.

HABERMAS, J.

- 1989 *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.

HALPERIN DONGHI, T.

- 1985 *Reforma y disolución de los imperios ibéricos. 1750-1850*. Madrid: Alianza editorial.

HAMPE, T.

- 1995 «Inquisición y sociedad en el Perú colonial (1570-1820): una lectura crítica de la bibliografía reciente». En: *Histórica*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Vol. XIX No 1. Julio de 1995. pp. 1-28.

HOBBSBAWM, E.

- 1974 *Rebeldes primitivos*. Barcelona: Ariel.
1976 *Bandidos*. Barcelona: Ariel

KULA, W.

- 1973 *Problemas y métodos de la Historia Económica*. Barcelona: Península.

LANGER, E.

- 1990 «Bandolerismo andino y comunidad rural campesina. 1882-1930». En: Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario / P&P. pp. 248 – 276.

LAVALLÉ, B.

- 1999 *Amor y opresión en los andes coloniales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

LASTRES, J. B.

- 1951 *La Medicina en el Virreinato. Historia de la Medicina Peruana*. Tomo V. Vol. V. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Publicaciones del Cuarto Centenario.

LÓPEZ ALBUJAR, E.

- 1973 *Los caballeros del delito*. Lima: Juan Mejía Baca.

LÓPEZ, A. Y CHIHU, A.

- 2000 «El Enfoque Dramatúrgico en Erving Goffmann». En: *Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*. Vol. II. Núm. 20002. Año 2000. pp. 239-255.

MALAMUD, C.

- 1982 «La consolidación de una familia de la oligarquía arequipeña: Los Goyeneche» En: *Quinto Centenario*. N° 4. pp. 49-135

MÁLAGA, A. Y NINA, F.

- 2010 *Africanos en la Ciudad Blanca. La esclavitud en Arequipa Colonial*. Arequipa: Universidad Católica de Santa María (UCSM).

MARAVALL, J.A.

2007 [1979] *Poder, honor y elites en el siglo XVII*. Madrid: Siglo XII editores.

MARTÍNEZ, S.

1930 *Gobernadores de Arequipa Colonial*. Arequipa: Tipografía Cuadros.

MCCAA, R.

1984 «Calidad, Clase, and Marriage in Colonial Mexico. The Case of Parral, 1788-1790», En: *Hispanic American Historical Review*. 64. No. 3. pp. 477-501.

MENDOZA GARRIDO, J. M.

1999 *Delincuencia y Represión en la Castilla Bajomedieval: Los Territorios Castellano-Manchegos*. Granada: Grupo Editorial Universitario.

MIRÓ LINARES, F; AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R. y otros. (edit.)

2015 *Crimen, Oportunidad y Vida Diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson*. Madrid: Crímina/ Dikynson S.L.

MORAL RONCAL, A. M.

1996 «Honor, vileza y honra de los oficios mecánicos en el siglo XVIII», En: *Baética: Estudios de arte, geografía e historia*. No. 18. pp. 379-386.

PALOP, J. M.

1996 «Delitos y penas en la España del siglo XVIII», En: *Estudis: Revista de historia moderna*. No. 2. 1996. Valencia: Universitat de València. pp. 65-103.

PATIÑO MILLÁN, B.

1995 «Las mujeres y el crimen en la época colonial. El caso de la ciudad de Antioquía», En: *Las mujeres en la historia de Colombia*. Tomo II. 1996. Bogotá: Presidencia de la República / Editorial Norma. pp. 77-119.

REALE, G. Y ANTISERI, D.

2007 *Historia de la Filosofía*. Tomo I. Filosofía Antigua. Bogotá: San Pablo.

RODRÍGUEZ SÁNZ, E.

2000 *Hijas, novias y esposas. Familia, matrimonio y violencia doméstica en el Valle Central de Costa Rica (1750-1850)*. San José: EUNA.

RUBIO, M. J.

2015 «Concepto y Teorías del Estado. El Estado y la Ciencia Política» En: Andrés Blas Guerrero y María Rubio (Directores) *Teoría del Estado I. El Estado y sus Instituciones*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). pp. 8-118.

RUÍZ IBÁÑEZ, J. J.

1995 *Las dos caras de Jano. Monarquía, Ciudad e individuo. Murcia, 1588 - 1648*. Murcia: Universidad de Murcia / Ecmo. Ayuntamiento de Murcia.

RYAN, M. P.

1992 «Gender and Public Access: Women's Politics in Nineteenth-Century America» En: Craig Calhoun, (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press. pp. 264.

SALINAS, R. Y MOJICA, M. T.

2005 *Conductas ilícitas y derecho de castigo durante la colonia. Los casos de Chile y Colombia*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

SALINAS MESA, R.

- 2000 «Violencias sexuales o interpersonales en Chile Tradicional» En: *Revista de Historia Social y de las Mentalidades. Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile*. Año IV, Invierno 2000. pp. 13-49.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, C. F.

- 2011 «Con más nobleza que la que ha tenido el orbe entero: La *vindicatio indianorum* de Ventura Travada (c. 1752) y el tópico del “racismo colonial” en el Perú». En: *Alpanchis. Revista del Instituto de Pastoral Andina*. Año XLII. N° 77-78. Primer y segundo semestre 2011. Lima: Instituto de Pastoral Andina (IPA). pp. 249–273.

SÁNCHEZ-CONCHA, R.

- 2013 «De la miserable condición de los indios a las reducciones» En: *Del régimen hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano*. Arequipa: Fondo editorial de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) / Centro de Estudios Peruanos (CEP).

SLATTA, R. (ed.)

- 1987 *Bandidos. The Varieties of Latin American Banditry*. Nueva York: Greenwood press.

SOSA, G.

- 1993 *Labradores, tejedores y ladrones. Hurtos y homicidios en la provincia de Tunja 1745-1810*. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

STAVIG, W.

- 1985 «Violencia cotidiana de los naturales de Quispicanchis, Canas y Canchis en el siglo XVIII» En: *Revista Andina*. Año 3. No. 2, diciembre 1985. Cuzco: Centro Bartolomé de las Casas. pp. 451-468.

- 1990 «Ladrones, Cuatreros y Salteadores. Indios criminales en el Cuzco rural a fines de la colonia». En: Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario / P&P. pp. 69–103.
- TAYLOR, L.
- 1990 «Los orígenes del Bandolerismo en Hualgayoc. 1870 - 1900». En: Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario / P&P. pp. 213–247.
- TAYLOR, W.
- 1987 *Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas*. México D.F: Fondo de Cultura Económica.
- TILLY, C.
- 2007 *The politics of collective violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- TOMÁS Y VALIENTE, F.
- 1969 *El derecho penal de la monarquía absoluta, siglos XVI, XVII, XVIII*. Madrid: Tecnos.
- TOMASIO, M. E.
- 2015 *Cuarenta y nueve manzanas*. Arequipa: Talleres Gráficos Publicont.
- TWINAM, A.
- 2009 *Vidas públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

URBANO, D.

2002 *Aproximación a los patrones e criminalidad en Santa Fe, 1735-1810*. Bogotá: CESO-Uniandes.

VALENZUELA, J.

2001 *Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile Colonial (1609-1709)*. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/ DIBAM/ Ediciones LOM.

VAN VELSEN, J.

1964 *The politics of kinship. A study of social manipulation among the lakeside Tonga of Nalawi*. Manchester: Manchester University Press.

VARGAS UGARTE (S.J.), R.

1966 *Historia General del Perú. Tomo VI. Emancipación (1816-1825)*. Lima: Carlos Milla Batres.

VILLEGAS DEL CASTILLO, C.

2006 «Juicios Criminales: La violencia doméstica. Los transgresores de los modelos de esposa, marido e hijos». En: *Del Hogar a los Juzgados: Reclamos Familiares en los Juzgados Superiores en el tránsito de la Colonia a la República, 1800-1850*. Bogotá: Universidad de los Andes. pp. 73–129.

VIVANCO, C.

1990 «Bandolerismo colonial peruano: 1760- 1810. Caracterización de una respuesta popular y causas económicas». En: Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) *Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII–XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario / P&P. pp. 24–56.

WEBER, M.

2005 [1919] «La política como vocación». En: *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial. pp. 81-179.

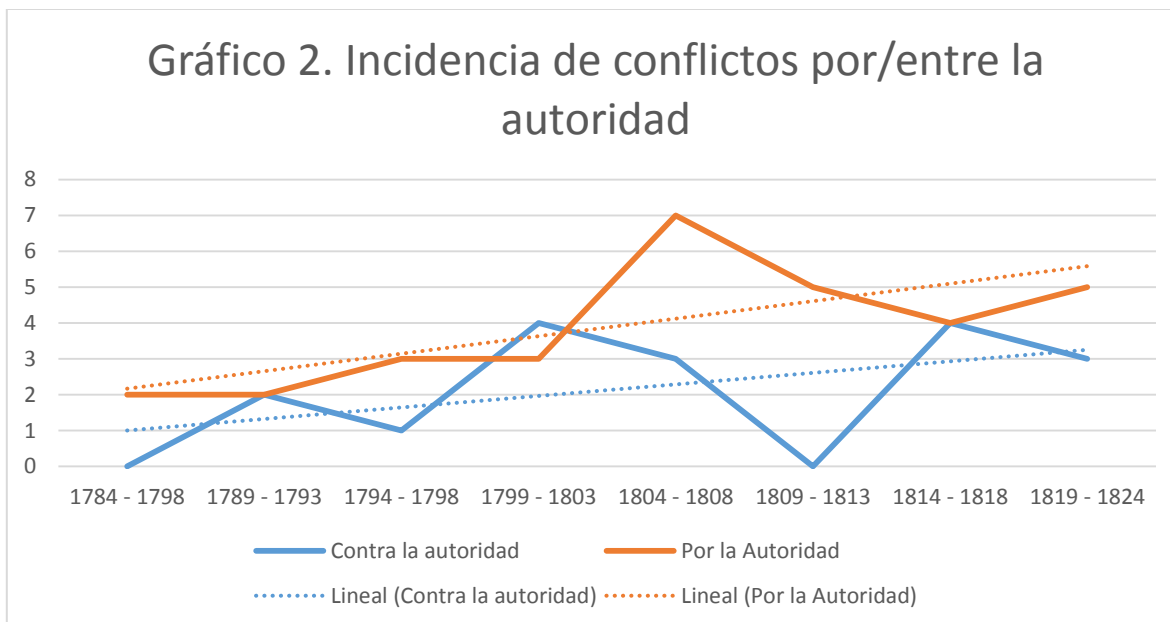
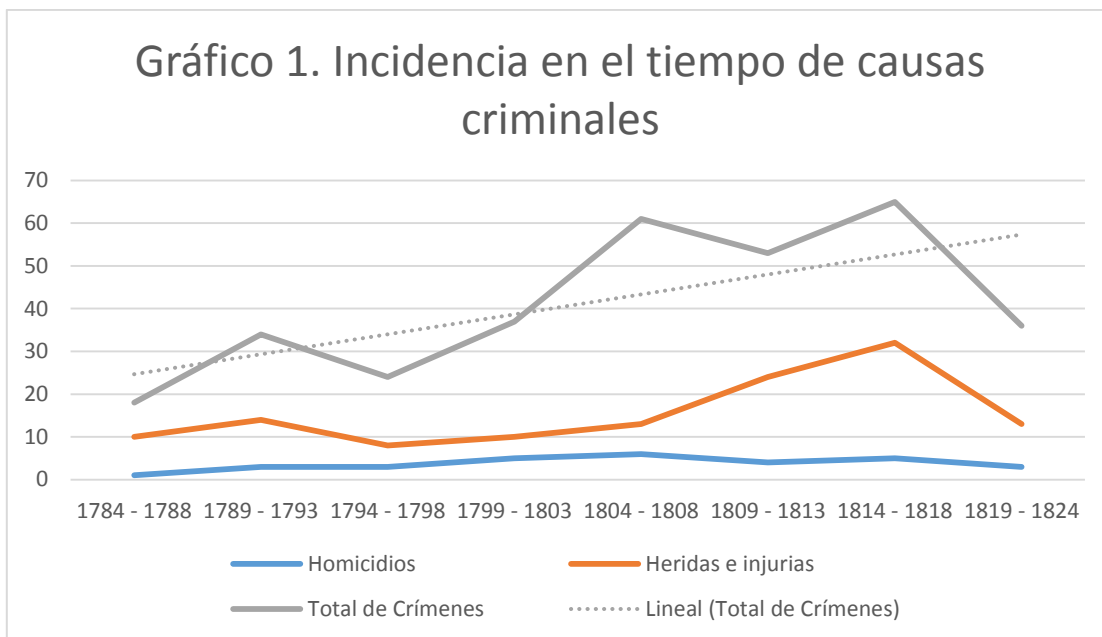
ZEGARRA MENESES, G.

1973 *Arequipa, en el paso de la Colonia a la República. Visita de Bolívar*. Arequipa: Cuzzi y Cía. Impresores.

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS

Cuadro N° 15. Población de la Intendencia de Arequipa en 1793.....p. 14.

ANEXOS



Cuadro 1										
	Violencia interpersonal									
Años	Homicidio y aborto		Injurias personales		Excesos de la autoridad		Faltamientos de respeto		Sub-total	
1784 - 1788	1	5.6%	10	55.6%	2	11%	0	0%	13	72%
1789 - 1793	3	8.8%	14	41.2%	2	6%	2	6%	21	62%
1794 - 1798	3	12.5%	8	33.3%	4	17%	1	4%	16	67%
1799 - 1803	5	13.5%	10	27.0%	4	11%	4	11%	23	62%
1804 - 1808	6	9.8%	13	21.3%	12	20%	4	7%	35	57%
1809 - 1813	4	7.5%	24	45.3%	8	15%	0	0%	36	68%
1814 - 1818	5	7.7%	32	49.2%	4	6%	6	9%	47	72%
1819 - 1824	3	8.3%	13	36.1%	6	17%	1	3%	23	64%
Total	30	9.1%	124	37.8%	42	13%	18	5%	214	65%

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Total de causas criminales (según denuncia)											
Contra el patrimonio						Otros delitos					
						Estupro y afines		Secuestros y afines		Defraudación a la Corona	
										Motín, sedición y desorden	
2	11%	0	0%	0	0%	1	6%	1	6%	0	0%
7	21%	0	0%	1	3%	0	0%	2	6%	1	3%
5	21%	0	0%	1	4%	2	8%	0	0%	0	0%
8	22%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	2	5%
7	11%	1	2%	0	0%	13	21%	3	5%	1	2%
8	15%	1	2%	0	0%	1	2%	2	4%	1	2%
8	12%	1	2%	2	3%	3	5%	3	5%	1	2%
5	14%	0	0%	0	0%	4	11%	2	6%	1	3%
50	15%	3	1%	4	1%	24	7%	14	4%	7	2%

Fraudes		Fuga de cárcel		Sub-total		Total	
0	0%	1	6%	5	28%	18	5%
0	0%	2	6%	13	38%	34	10%
0	0%	0	0%	8	33%	24	7%
2	5%	1	3%	14	38%	37	11%
0	0%	1	2%	26	43%	61	19%
3	6%	1	2%	17	32%	53	16%
0	0%	0	0%	18	28%	65	20%
0	0%	1	3%	13	36%	36	11%
5	2%	7	2%	114	35%	328	

Cuadro 2		Detalle de violencia interpersonal									
Años	Delitos contra la vida								Total		
	Homicidio	Particidio	Imprudencia	Aborto	H. en conato	Excusados					
1784 - 1798	0	0	0	0	0	0	1	1	3%		
1789 - 1793	1	1	1	0	0	0	1	4	13%		
1794 - 1798	1	0	1	0	1	33%	0	3	10%		
1799 - 1803	2	0	0	1	2	40%	0	5	16%		
1804 - 1808	3	0	0	1	2	33%	0	6	19%		
1809 - 1813	1	2	0	0	1	25%	0	4	13%		
1814 - 1818	0	1	0	1	3	60%	0	5	16%		
1819 - 1824	2	0	1	0	0	0%	0	3	10%		
Total	10	4	3	3	9	29%	2	31			

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Cuadro 3								
Años	Faltamientos de respeto						Sub total	
	Verbales		Reales		Heridas			
1784 - 1798	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1789 - 1793	1	6%	1	6%	0	0%	2	11%
1794 - 1798	0	0%	1	8%	0	0%	1	8%
1799 - 1803	3	18%	1	6%	0	0%	4	24%
1804 - 1808	3	13%	0	0%	0	0%	3	13%
1809 - 1813	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1814 - 1818	0	0%	4	10%	0	0%	4	10%
1819 - 1824	0	0%	3	16%	0	0%	3	16%
Total	7	4%	10	6%	0	0%	17	10%

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propi

Detallado de injurias personales								
Atropellamientos o Excesos						Sub total		
Verbales		Reales		Heridas				
0	0%	1	8%	1	8%	2	17%	
0	0%	1	6%	1	6%	2	11%	
0	0%	3	25%	0	0%	3	25%	
0	0%	2	12%	1	6%	3	18%	
1	4%	5	22%	1	4%	7	30%	
0	0%	4	14%	1	3%	5	17%	
1	3%	3	8%	0	0%	4	10%	
0	0%	4	21%	1	5%	5	26%	
2	1%	23	14%	6	4%	31	18%	

a.

Entre particulares										Sub total		Total	
Verbales		Calumnias		Heridas		Reales							
3	25%	0	0%	1	8%	6	50%	10	83%	12	7%		
1	6%	0	0%	1	6%	12	67%	14	78%	18	11%		
2	17%	3	25%	0	0%	3	25%	8	67%	12	7%		
2	12%	0	0%	0	0%	8	47%	10	59%	17	10%		
4	17%	1	4%	2	9%	6	26%	13	57%	23	14%		
3	10%	1	3%	0	0%	20	69%	24	83%	29	17%		
4	10%	2	5%	7	18%	19	48%	32	80%	40	24%		
2	11%	3	16%	1	5%	5	26%	11	58%	19	11%		
21	12%	10	6%	12	7%	79	46%	122	72%	170			

Cuadro 4	Estado							
Años	No concluídos						Sub total	
	Abandonado / Incompleto	Corrupto		Desconocido				
1784 - 1798	28	58%	2	4%	5	10%	35	73%
1799 - 1803	5	33%	1	7%	0	0%	6	40%
1804 - 1808	6	32%	5	26%	0	0%	11	58%
1809 - 1813	9	33%	0	0%	1	4%	10	37%
1814 - 1818	19	43%	5	11%	3	7%	27	61%
1819 - 1824	8	35%	3	13%	0	0%	11	48%
Total	75	43%	16	9%	9	5%	100	57%

o de las causas

Concluídos								Sub total		Total	
Absuelto / Desestimado		Condenado		Transado / perdonado		Reconvención/ amonestación					
4	8%	2	4%	1	2%	6	13%	13	27%	48	
3	20%	2	13%	4	27%	0	0%	9	60%	15	
0	0%	3	16%	2	11%	3	16%	8	42%	19	
4	15%	4	15%	3	11%	6	22%	17	63%	27	
2	5%	3	7%	7	16%	5	11%	17	39%	44	
7	30%	1	4%	2	9%	2	9%	12	52%	23	
20	11%	15	9%	19	11%	22	13%	76	43%	176	

Cuadro 5									
Público									
Años	Banderismo		«Excesos» de la autoridad		«Atropellamientos» a la autoridad		Festivo		Sub total
1784 - 1798	1	2%	9	16%	6	11%	3	5%	19 33%
1799 - 1803	0	0%	3	17%	2	11%	1	6%	6 33%
1804 - 1808	0	0%	7	41%	0	0%	0	0%	7 41%
1809 - 1813	0	0%	3	8%	1	3%	2	5%	6 16%
1814 - 1818	0	0%	5	10%	5	10%	3	6%	13 27%
1819 - 1824	0	0%	5	19%	4	15%	2	7%	11 41%
Total	1	0.5%	32	16%	18	8.8%	11	5%	62 30%

Relación o ámbito de la agresión									
Privado									
Familiar / Parentesco	Sentimental		Vecindad		Servidumbre		Patronaje		Profesional (colegas)
6	11%	4	10	18%	3	5%	0	0%	1
1	6%	0	3	17%	0	0%	2	11%	1
2	12%	2	3	18%	0	0%	0	0%	0
6	16%	7	5	14%	2	5%	0	0%	1
4	8%	5	14	29%	0	0%	1	2%	1
2	7%	2	4	15%	0	0%	4	15%	1
21	10%	20	39	19%	5	2.4%	7	3.4%	5

Acreedor / Deudor		Sub total	Desconocido/ Otros		Total	
8	14%	32	6	11%	57	28%
2	11%	9	3	17%	18	9%
1	6%	8	2	12%	17	8%
4	11%	25	6	16%	37	18%
5	10%	30	6	12%	49	24%
2	7%	15	1	4%	27	13%
22	11%	119	24	12%	205	

Cuadro 6		Armas utilizadas								
Años	Injurias reales y heridas									
	Vías corporales	Palo / Piedra		Artículos domésticos o propios del oficio		Arma blanca		Vara / Bastón y otros simbólicos		
1784 - 1798	21	44%	11	23%	5	10%	2	4%	3	6%
1799 - 1803	9	36%	4	16%	4	16%	3	12%	0	0%
1804 - 1808	9	38%	5	21%	2	8%	1	4%	4	17%
1809 - 1813	16	44%	9	25%	3	8%	4	11%	1	3%
1814 - 1818	17	32%	17	32%	9	17%	6	11%	1	2%
1819 - 1824	10	42%	5	21%	2	8%	3	13%	0	0%
Total	82	39%	51	24%	25	12%	19	9%	9	4%

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Cepo / Grilletes / Carlanca						Látigo / Zurrriago / Azote / Lazo		Arma de Fuego		Total
4	8%	1	2%	1	2%	48				
1	4%	3	12%	1	4%	25				
0	0%	3	13%	0	0%	24				
1	3%	1	3%	1	3%	36				
1	2%	2	4%	0	0%	53				
1	4%	3	13%	0	0%	24				
8	4%	13	6%	3	1%	210				

Cuadro 7		Armas utilizadas					
Años	Homicidio y aborto						
	Arma blanca	Palo / Piedra	Vías corporales	Otros			
1784 - 1798	2	25%	1	13%	2	25%	0
1799 - 1803	1	20%	3	60%	0	0%	1
1804 - 1808	0	0%	0	0%	2	67%	1
1809 - 1813	2	33%	2	33%	1	17%	1
1814 - 1818	1	33%	1	33%	0	0%	1
1819 - 1824	2	100%	0	0%	0	0%	0
Total	8	30%	7	26%	5	19%	4

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

as

ros	Látigo / Zurriago / Azote				Veneno		Total
0%	2	25%	1	13%	8		
20%	0	0%	0	0%	5		
33%	0	0%	0	0%	3		
17%	0	0%	0	0%	6		
33%	0	0%	0	0%	3		
0%	0	0%	0	0%	2		
15%	2	7%	1	4%	27		

Cuadro 8		Mé				
Años	Lucro	Sentimental		Resistencia / ejercicio de autoridad		
1784 - 1798	17	40%	7	17%	7	17%
1799 - 1803	12	48%	0	0%	6	24%
1804 - 1808	5	22%	3	13%	6	26%
1809 - 1813	9	30%	8	27%	2	7%
1814 - 1818	16	31%	6	12%	8	16%
1819 - 1824	11	38%	1	3%	7	24%
Total	70	35%	25	13%	36	18%

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Honor		Venganza		Otros / Desconocido		Total
8	19%	0	0%	3	7%	42
5	20%	1	4%	1	4%	25
3	13%	3	13%	3	13%	23
2	7%	2	7%	7	23%	30
9	18%	6	12%	6	12%	51
1	3%	1	3%	8	28%	29
28	14%	13	7%	28	14%	200

Espacio de perpetración										
Cuadro 9										
Años	Doméstico		Urbano		Rural		Descampado		Otros / Desconocido	Total
1784 - 1798	9	18%	23	46%	13	26%	4	8%	1	50
1799 - 1803	2	11%	9	50%	6	33%	1	6%	0	18
1804 - 1808	4	20%	10	50%	4	20%	0	0%	2	20
1809 - 1813	14	45%	11	35%	3	10%	1	3%	2	31
1814 - 1818	14	32%	17	39%	9	20%	3	7%	1	44
1819 - 1824	8	30%	12	44%	4	15%	1	4%	2	27
Total	51	27%	82	43%	39	21%	10	5%	8	190

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Cuadro 10									
Años	Ciudad de Arequipa			Partido de Arequipa			Partido de Cananá		
1784 - 1798	22	45%	10	20%	5	10%			
1799 - 1803	6	35%	4	24%	3	18%			
1804 - 1808	11	58%	1	5%	3	16%			
1809 - 1813	15	50%	7	23%	2	7%			
1814 - 1818	22	49%	17	38%	4	9%			
1819 - 1824	9	35%	9	35%	3	12%			
Total	85	46%	48	26%	20	11%			

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Lugar de perpetración - Global												
Partido de Caylloma		Partido de Condesuyos		Partido de Moquegua		Partido de Areica		Partido de Tarapacá		Otros / Desconocido		Total
3	6%	0	0%	3	6%	5	10%	1	2%	0	0%	49
2	12%	0	0%	2	12%	0	0%	0	0%	0	0%	17
0	0%	0	0%	2	11%	1	5%	0	0%	1	5%	19
2	7%	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	3	10%	30
0	0%	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	45
0	0%	0	0%	3	12%	0	0%	0	0%	2	8%	26
7	4%	1	1%	12	6%	6	3%	1	1%	6	3%	186

Lugar de perpetración - Capital/Periferia									
Cuadro 11		Partido de Arequipa		Partido de Camaná		Partido de Caylloma		Partido de Condesuyos	
Años									
	Periferia	Ciudad	Periferia	Capital	Periferia	Capital	Periferia	Capital	
1784 - 1798	10	22	5	0	2	1	0	0	
1799 - 1803	4	6	2	1	2	0	0	0	
1804 - 1808	1	11	3	0	0	0	0	0	
1809 - 1813	7	15	1	1	2	0	0	0	
1814 - 1818	17	22	4	0	0	0	1	0	
1819 - 1824	9	9	2	1	0	0	0	0	
Total	48	85	17	3	6	1	1	0	
%	36%	64%	85%	15%	86%	14%	100%	0%	

Fuente: ARAR. Intendencia Criminal. Legajos 85-91. (1784-1824). Elaboración: Propia.

Partido de Moquegua		Partido de Areica		Partido de Tarapacá	
Periferia	Capital	Periferia	Capital	Periferia	Capital
2	1	5	0	1	0
1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
9	3	5	1	1	0
75%	25%	83%	17%	100%	0%

Cuadro 12		Lugar de perpetración - Arequipa ciudad					
Años	Cercado y Santa Marta	Pampa de Miraflores	La Chimba o San Lázaro	La Ranchería			
1784 - 1798	21	91%	1	4%	0	0%	0%
1799 - 1803	3	50%	0	0%	0	0%	0%
1804 - 1808	10	91%	0	0%	0	0%	0%
1809 - 1813	10	56%	0	0%	2	11%	1
1814 - 1818	11	48%	4	17%	3	13%	0
1819 - 1824	7	78%	0	0%	0	0%	0%
Total	62	69%	5	6%	5	6%	1
Homicidios:	3	50%	0	0%	1	17%	0

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85-91. (1784- 1824). Elaboración: Propia.

Guañamarca		El Palomar, Porongoché, Guaranguillo		San Jerónimo		Desconocido		Total
0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	23
0	0%	2	33%	0	0%	1	17%	6
0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	11
0	0%	1	6%	0	0%	4	22%	18
3	13%	1	4%	1	4%	0	0%	23
1	11%	0	0%	0	0%	1	11%	9
4	4%	6	7%	1	1%	6	7%	90
2	33%	0	0%	0	0%	0	0%	6

Cuadro 13		Lugar de perpetración - Atequipa partido						
Años	Cayma	Yanahuara	Paucarpata	Tibaya, Sachaca, Tingo				
1784 - 1798	2	18%	0	0%	1	9%	2	18%
1799 - 1803	0	0%	0	0%	1	25%	0	0%
1804 - 1808	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1809 - 1813	1	17%	0	0%	1	17%	0	0%
1814 - 1818	2	13%	2	13%	1	7%	4	27%
1819 - 1824	0	0%	3	30%	2	20%	2	20%
Total	5	11%	5	11%	6	13%	8	17%
Homicidios:	0	0%	0	0%	1	25%	0	0%

Socabaya, Mollebaya, Guasacache, Uchumayo		Yarabamba, Quequeña, Poesi, Sogay, Pobobaya		Chiguata	
2	18%	3	27%	1	9%
0	0%	2	50%	1	25%
1	100%	0	0%	0	0%
0	0%	1	17%	1	17%
2	13%	0	0%	1	7%
1	10%	0	0%	0	0%
6	13%	6	13%	4	9%
0	0%	0	0%	1	25%

Sabandía, Characato, Yumina		Molendo		Yura		Vitor		Total
0	0%	0	0%	1	9%	1	9%	11
0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4
0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1
1	17%	0	0%	2	33%	0	0%	6
2	13%	1	7%	0	0%	2	13%	15
1	10%	1	10%	0	0%	0	0%	10
4	9%	2	4%	3	6%	3	6%	47
1	25%	0	0%	1	25%	0	0%	4

